

Señores

**JUZGADO CUARTO (4°) CIVIL DEL CIRCUITO DE PASTO**

[j04ccpas@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:j04ccpas@cendoj.ramajudicial.gov.co)

E. S. D.

**PROCESO:** RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL  
**DEMANDANTE:** WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA Y OTROS  
**DEMANDADO:** SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. Y OTROS.  
**RADICACIÓN:** 520013103004-**2023-00109**-00.

**ASUNTO: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA  
FORMULADO POR TRANSPORTADORA AUTOBUSES DEL SUR SAS**

**GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA**, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la cédula de ciudadanía número 19.395.114 expedida en Bogotá, abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional número 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, con dirección electrónica [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co), actuando en mi calidad de apoderado general de **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**, sociedad comercial anónima de carácter privado, legalmente constituida, identificada con NIT 860.037.707-9 y representada legalmente por la doctora Marta Lucía Pava Vélez<sup>1</sup>, con dirección de notificaciones [notificaciones.sbsegueros@sbsegueros.co](mailto:notificaciones.sbsegueros@sbsegueros.co). De manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal, manifiesto comedidamente que **REASUMO** el poder a mi conferido y procedo en primer lugar a **CONTESTAR LA DEMANDA** promovida por WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA Y OTROS en contra de SBS SEGUROSCOLOMBIA S.A. Y OTROS; y, en segundo lugar, a **CONTESTAR EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA** formulado por la EMPRESA TRANSPORTADORA AUTOBUSES DEL SUR S.A.S. a mi representada, para que en el momento en que se vaya a definir el litigio, se tengan en cuenta los hechos y precisiones que se hacen a continuación, según las pruebas que se practiquen, anticipando que me opongo a todas y cada una de las pretensiones sometidas a consideración de su Despacho, en los siguientes términos:

Es necesario precisar que el presente escrito se dividirá en dos capítulos: en el primero de ellos se hará la contestación a la demanda la cual da inicio a este proceso; en el segundo se hará la contestación al llamamiento en garantía realizado por Empresa Transportadora Autobuses del Sur S.A.S. a mi prohijada.

<sup>1</sup> Código General del Proceso, artículo 96 numeral 1.

## CONSIDERACIÓN PRELIMINAR

Resulta necesario exponer que, de acuerdo con la información que reposa en el expediente, se evidencia que el apoderado de la señora María Aura Calvache de Moncayo, también formuló el llamamiento en garantía contra mi procurada SBS Seguros Colombia S.A., dentro del mismo memorial del llamamiento presentado por la empresa Transportadora Autobuses del Sur SAS. Sin embargo, en el auto interlocutorio de fecha de elaboración 22 de mayo del 2023 y notificado en estados el día 23 de mayo del 2024, el despacho ordenó admitir el llamamiento en garantía únicamente formulado por la empresa transportadora y no el de la señora María Calvache. Ahora bien, sin perjuicio de que el apoderado de la señora María Calvache, formuló recurso de reposición contra el auto interlocutorio de fecha 22 de mayo del 2024, y notificado en estados el día 23 de mayo del 2024, en el que se tuvo por no contestada la demanda por parte de la señora María Calvache, lo cierto es que no presentó reparos frente al auto interlocutorio que admitió el llamamiento en garantía únicamente formulado por la empresa Transportadora Autobuses del Sur SAS, razón por la cual dentro del presente escrito se procede a contestar el llamamiento en garantía que sí fue admitido por su despacho.

### CAPITULO I

#### CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

##### **I. FRENTE A LOS HECHOS DE LA DEMANDA<sup>2</sup>**

Procedo a pronunciarme frente a cada uno de los hechos de la demanda en la misma forma y en el mismo orden cronológico en que fueron planteados, así:

**Frente al hecho “1.”:** como este hecho contiene varias afirmaciones, me pronuncio frente a cada una de ellas:

- NO LE CONSTA de manera directa a mi representada la forma como está conformado el núcleo familiar del señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.
- NO LE CONSTA de manera directa a mi representada que la señora MARÍA ELIZABETH ANDRADE INSUASTY sea la compañera permanente del señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Sin embargo, en el expediente no obra ningún documento que permita corroborar,

<sup>2</sup> Código General del Proceso, artículo 96 numeral 2.

así sea sumariamente, la información vertida en este hecho, por otro lado, en el dictamen de PCL aportado con la demanda se afirma que el estado civil del demandante es soltero. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

- NO LE CONSTA de manera directa a mi representada que DAVID FERNANDO BENAVIDES ANDRADE, EMILIANO SEBASTIÁN BENAVIDES ANDRADE y JEISON ALEJANDRO BENAVIDES JALVIN sean hijos del señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Sin embargo, en el expediente obran unos Registros Civiles de Nacimiento que corroboran la información vertida en este hecho.
- NO LE CONSTA de manera directa a mi representada que CECILIA DEL ROSARIO QUETAMA CUASTUMAL sea madre del señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Sin embargo, en el expediente obra uno Registro Civil de Nacimiento, el cual no contiene número de identificación de la señora CECILIA DEL ROSARIO QUETAMA CUASTUMAL, por lo que no es posible verificar la información vertida en este hecho:

SECCION GENERAL			
5 Primer apellido <b>BENAVIDES = = =</b>	7 Segundo apellido <b>QUETAMA = = =</b>	8 Nombres <b>WILLIAM ORLANDO = = = = =</b>	
9 Masculino o Femenino <b>MASCULINO</b>	10 Sexo <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Femenino	12 Fecha de nacimiento Día: <b>30</b> Mes: <b>ABRIL</b> Año: <b>1978</b>	13 Año
14 País <b>COLOMBIA</b>	15 Departamento, Int., o Com. <b>MARINO</b>	16 Municipio <b>PASTO</b>	
SECCION ESPECIFICA			
17 Clínica, hospital, dirección de la casa, vereda, corregimiento, etc., donde ocurrió el nacimiento <b>Ara 20 A # 20-05 PASTO</b>			18 Hora <b>11:28</b>
19 Documento presentado—Antecedente (Cert. médico, Acta parroq. etc.) <b>ADICIONAL AL SERIAL 3364942</b>		20 Nombre del profesional que certificó el nacimiento	
22 Apellidos (de soltera) <b>QUETAMA CUASTUMAL = = = = =</b>		23 Nombres <b>CECILIA DEL ROSARIO = = =</b>	24 Edad (años) <b>18</b>
25 Identificación (clase y número)		26 Nacionalidad <b>COLOMBIANA</b>	27 Profesión u oficio <b>HOGAR</b>
28 Apellidos		29 Nombres	

Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

- NO LE CONSTA de manera directa a mi representada que entre los demandantes haya o se mantengan fuertes lazos de amor, afecto y cariño, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

**Frente al hecho “2.”:** NO LE CONSTA de manera directa a mi representada el lugar de residencia de los demandantes, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada.

Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

**Frente al hecho “3.”:** NO LE CONSTA de manera directa a mi representada si el demandante adquirió el vehículo de placa LUD 433 en la referida fecha, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Sin embargo, no se prueba dicha situación bajo ningún medio de prueba, toda vez que: **(i)** La minuta de contrato adjunta no es el medio de prueba idóneo para acreditar la titularidad de dominio de un bien sujeto a registro, como un vehículo; **(ii)** La declaración ante Notaría del señor Nelson Alirio Tepú Díaz de ninguna manera prueba la posesión del vehículo de placa LUD 433 en cabeza del demandante; **(iii)** Obra un certificado de tradición del vehículo de placa LUD 433 en el que se observa que su propietario actual es el señor Jhoan Sebastián Beltrán Mallama, persona completamente distinta al demandante; **(iv)** Si bien se afirma que desde el 9 de abril de 2022 el demandante ostenta la posesión del vehículo, ni siquiera ha transcurrido el tiempo necesario para adquirir el bien por prescripción ordinaria ni extraordinaria adquisitiva del dominio; **(v)** No obra ninguna sentencia mediante la cual se adjudique el vehículo al demandante por prescripción adquisitiva de dominio; **(vi)** No obra ninguna sentencia sobre un proceso verbal por incumplimiento del supuesto contrato de compraventa, al no transferir el derecho de dominio; **(vii)** El documento de entrega definitiva del referido vehículo suscrito por la Fiscalía tampoco tiene la virtualidad de determinar la posesión del automotor; **(viii)** Una vez realizada la búsqueda en el RUNT con la placa LUD 433 y la cédula del demandante, esto es, 98400238, arroja que el referido carro no es de propiedad del demandante; **(ix)** No se prueba de ninguna manera los actos de señor y dueño ejercidos por parte del demandante sobre el automotor de placa LUD 433; **(x)** Aunado a todo lo anterior, los documentos no tienen validez probatoria hasta tanto no sean ratificados por las personas que supuestamente los suscribieron. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

**Frente al hecho “4.”:** NO LE CONSTA de manera directa a mi representada la actividad laboral o económica del demandante, ni mucho menos sus ingresos mensuales, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Sin embargo, revisado el RUAF – SISPRO, se observa que el demandante únicamente está afiliado en salud bajo el régimen subsidiado. En igual sentido, la página del ADRES confirma que el demandante está afiliado en salud bajo el régimen subsidiado. Quiere decir todo lo anterior que el señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA nunca ha trabajado, ni ha generado ingresos, por lo tanto, los hechos más adelante descritos no afectaron en nada las condiciones económicas que antes tenía el demandante. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

**Frente al hecho “5.”:** NO LE CONSTA de manera directa a mi representada si el señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA, para el 27 de mayo de 2022, se desplazaba en el vehículo de placa LUD 433, ni mucho menos el sentido vial en el que lo hacía, toda vez que son circunstancias

ajenas al conocimiento de mi prohijada. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

**Frente al hecho “6.”:** NO LE CONSTA de manera directa a mi representada el sentido vial en el que se desplazaba el vehículo de placa SJP 307 para el 27 de mayo de 2022, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

**Frente al hecho “7.”:** como este hecho contiene varias afirmaciones, me pronuncio frente a cada una de ellas:

- NO LE CONSTA de manera directa a mi representada la ocurrencia de un accidente de tránsito el 27 de mayo de 2022, ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar que habrían rodeado el mismo, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Sin embargo, dentro del expediente se observa un IPAT, el cual contiene la información sobre el lugar donde ocurrieron los hechos, la fecha, los conductores y los vehículos involucrados.
- Sobre la forma como supuestamente ocurrieron los hechos, NO LE CONSTA a mi representada, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Sobre las causas de tales hechos, debe tener en cuenta el Despacho que lo que se consigna en el Informe Policial del Accidente corresponde a una mera HIPÓTESIS (que según la Real Academia Española es la “*suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia*”), realizada por un agente de tránsito, razón por la cual NO podrá ser considerada como plena prueba dentro del presente trámite judicial.

**Frente al hecho “8.”:** NO LE CONSTA a mi representada la hipótesis plasmada en el IPAT, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Sobre las causas de tales hechos, debe tener en cuenta el Despacho que lo que se consigna en el Informe Policial del Accidente corresponde a una mera HIPÓTESIS (que según la Real Academia Española es la “*suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia*”), realizada por un agente de tránsito, razón por la cual NO podrá ser considerada como plena prueba dentro del presente trámite judicial.

De igual forma, respecto al valor probatorio de los informes policiales de accidente de tránsito, ya se ha pronunciado la Corte Constitucional en sentencia C-429 de 2003, en donde indicó que dicho documento se presume auténtico en relación con la persona que lo elaboró y su fecha, pero su contenido puede ser desvirtuado en el respectivo proceso, por lo que insistimos es una mera hipótesis, pues el agente de tránsito que lo elabora tampoco presenció el accidente. Adicionalmente, es preciso que se tenga en cuenta que el agente de tránsito se hace presente en el lugar del

accidente en momentos posteriores a su ocurrencia, por lo que es evidente que no fue testigo presencial de los hechos. Además de lo anterior, el referido IPAT ni siquiera fue realizado con base en las conclusiones propias del funcionario de tránsito que lo elaboró, sino que lo hizo por lo que la gente supuestamente vio y le manifestaron:

MENCIONADOS AL IGUAL QUE UNA PERSONA LA CUAL RESULTA LESIONADA EN EL EVENTO DE ACCIDENTE DE TRANSITO, POR OTRO LADO, SE DEJA CONSTANCIA LA PRESENCIA DE LA COMUNIDAD EN EL LUGAR DE LOS HECHOS LOS CUALES MANIFIESTAN QUE EL VEHICULO NUMERO DOS VEHICULO TIPO BUSETA AL INTENTAR ADELANTAR OTRO VEHICULO POR EL CARRIL QUE CONDUCE DE SIBUNDOY A PASTO NO SE PERCATA DE LA SALIDA DEL VEHICULO NUMERO UNO TIPO AUTOMOVI IMPACTANDOLO DE FRENTE Y CAUSANDO EL ACCIDENTE DE TRANSITO. DE IGUAL

Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

**Frente al hecho “9.”:** como este hecho contiene varias afirmaciones, me pronuncio frente a cada una de ellas:

- Sobre la forma como supuestamente ocurrieron los hechos, NO LE CONSTA a mi representada, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Sobre las causas de tales hechos, debe tener en cuenta el Despacho que lo que se consigna en el Informe Policial del Accidente corresponde a una mera HIPÓTESIS (que según la Real Academia Española es la “*suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia*”), realizada por un agente de tránsito, razón por la cual NO podrá ser considerada como plena prueba dentro del presente trámite judicial.
- Sobre el funcionario que realizó el IPAT, NO LE CONSTA a mi representada, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Sin embargo, en el cuerpo del referido documento se puede observar que dicha persona suscribió el documento.

**Frente al hecho “10.”:** como este hecho contiene varias afirmaciones, me pronuncio frente a cada una de ellas:

- Sobre la supuesta inspección al lugar de los hechos por parte de la patrullera, NO SE TRATA DE UN HECHO, sino de apreciaciones subjetivas que hace la parte activa. Lo anterior pues en el hecho se indica que “*al promediar*”, es decir, no hay ninguna certeza sobre tal aseveración. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.
- Sobre las apreciaciones que hizo la patrullera que diligenció el IPAT, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Sin embargo, se itera, el agente de tránsito se hace presente en el lugar del accidente en momentos posteriores a su ocurrencia,

por lo que es evidente que no fue testigo presencial de los hechos. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

**Frente al hecho “11.”:** como este hecho contiene varias afirmaciones, me pronuncio frente a cada una de ellas:

- Sobre las supuestas lesiones del demandante, **NO LE CONSTA** a mi representada, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.
- Sobre el traslado del demandante a centros médicos, **NO LE CONSTA** a mi representada, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

Sobre la enfermedad actual del demandante, **NO LE CONSTA** a mi representada, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Sin embargo, en cuanto a las casillas de “motivo de consulta” y “enfermedad actual” de las historias clínicas, lo cierto es que dicha información es la manifestada por el mismo paciente al momento del ingreso, no por el médico, por esa razón, este último se limita a transcribir lo que el paciente le indica. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

**Frente al hecho “12.”:** **NO LE CONSTA** a mi representada la información vertida en este hecho, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

**Frente al hecho “13.”:** **NO LE CONSTA** a mi representada la información vertida en este hecho, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

**Frente al hecho “14.”:** **NO LE CONSTA** a mi representada la información vertida en este hecho, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

**Frente al hecho “15.”:** NO LE CONSTA a mi representada la información vertida en este hecho, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Sin embargo, dicho dictamen será objeto de contradicción conforme lo estipulado en el artículo 228 del Código General del Proceso. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

**Frente al hecho “16.”:** NO LE CONSTA a mi representada la información vertida en este hecho, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Sin embargo, dicho dictamen será objeto de contradicción conforme lo estipulado en el artículo 228 del Código General del Proceso. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

**Frente al hecho “17.”:** NO ES CIERTO como está redactado y se aclara: Si bien mi representada expidió el contrato de seguro documentado en la Póliza De Seguros De Responsabilidad Civil Extracontractual Para Vehículos No. 1000272, vigente entre el 29 de noviembre de 2021 y el 29 de noviembre de 2022, en la que figuraba como tomador AUTOBUSES DEL SUR S.A.S., como asegurada MARÍA AURA CALVACHE DE MONCAYO, como beneficiarios TERCEROS AFECTADOS, que contemplaba como riesgo asegurado el vehículo de placa SJP 307 y en la que se otorgó el amparo de responsabilidad civil extracontractual, lo cierto es que la misma no podrá ser afectada por cuanto no se acreditó la ocurrencia de un siniestro ni la cuantía de la pérdida, por lo tanto, no se configuró el riesgo asegurado contenido en dicha póliza y asumido por mi representada.

**Frente al hecho “18.”:** como este hecho contiene varias afirmaciones, me pronuncio frente a cada una de ellas:

- NO LE CONSTA de manera directa a mi representada si el vehículo de placa SJP 307, para el 27 de mayo de 2022, era de propiedad de la señora MARÍA AURA ELISA CALVACHE DE MONCAYO, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Sin embargo, en el expediente se aportó un histórico vehicular del referido automotor expedido por el RUNT, el cual de ninguna manera es el medio de prueba idóneo para acreditar la titularidad del dominio de un carro, pues únicamente tal situación se podrá acreditar a través de certificado de tradición, el cual no reposa en el libelo. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.
- Sobre la persona que conducía el vehículo de placa SJP 307 para el 27 de mayo de 2022, NO LE CONSTA de manera directa a mi representada, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Sin embargo, como se dijo antes, dentro del expediente se observa un IPAT, el cual contiene la información sobre el lugar donde ocurrieron los hechos,

la fecha, los conductores y los vehículos involucrados.

- Sobre la empresa que operaba el vehículo de placa SJP 307 para el 27 de mayo de 2022, NO LE CONSTA de manera directa a mi representada, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Sin embargo, en el expediente obra una tarjeta de operación del referido automotor, que corrobora la información vertida en este hecho.

**Frente al hecho “19.”:** como este hecho contiene varias afirmaciones, me pronuncio frente a cada una de ellas:

- Sobre la ejecución de una actividad peligrosa por parte del conductor del vehículo de placa SJP 307, NO SE TRATA DE UN HECHO, sino de una apreciación subjetiva que hace la parte demandante. Lo cierto es que el señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA también estaba ejecutando una actividad peligrosa al conducir el vehículo de placa LUD 433, por lo tanto, el presente asunto se debe analizar desde la perspectiva del artículo 2341 del Código Civil, esto es, bajo la normatividad de la culpa probada y no a la luz del artículo 2356 del Código Civil.
- Sobre la responsabilidad de los hechos del 27 de mayo de 2022, NO LE CONSTA de manera directa a mi representada, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Sin embargo, en el presente caso se observa una completa ausencia de medios de prueba que permitan corroborar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aparentemente ocurrieron los hechos del 27 de mayo de 2022. Por tal motivo, por la ausencia de medios probatorios que militen dentro del expediente de la referencia, las pretensiones de la demanda se deben desestimar.

**Frente al hecho “20.”:** como este hecho contiene varias afirmaciones, me pronuncio frente a cada una de ellas:

- Sobre la posesión del vehículo de placa LUD 433 en cabeza del señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA, NO LE CONSTA de manera directa a mi representada, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Sin embargo, no se prueba dicha situación bajo ningún medio de prueba, toda vez que: **(i)** La minuta de contrato adjunta no es el medio de prueba idóneo para acreditar la titularidad de dominio de un bien sujeto a registro, como un vehículo; **(ii)** La declaración ante Notaría del señor Nelson Alirio Tepú Díaz de ninguna manera prueba la posesión del vehículo de placa LUD 433 en cabeza del demandante; **(iii)** Obra un certificado de tradición del vehículo de placa LUD 433 en el que se observa que su propietario actual es el señor Jhoan Sebastián Beltrán Mallama, persona completamente distinta al demandante; **(iv)** Si bien se afirma que desde el 9 de abril de 2022 el demandante ostenta la posesión del vehículo, ni siquiera ha transcurrido el tiempo necesario para adquirir

el bien por prescripción ordinaria ni extraordinaria adquisitiva del dominio; **(v)** No obra ninguna sentencia mediante la cual se adjudique el vehículo al demandante por prescripción adquisitiva de dominio; **(vi)** No obra ninguna sentencia sobre un proceso verbal por incumplimiento del supuesto contrato de compraventa, al no transferir el derecho de dominio; **(vii)** El documento de entrega definitiva del referido vehículo suscrito por la Fiscalía tampoco tiene la virtualidad de determinar la posesión del automotor; **(viii)** Una vez realizada la búsqueda en el RUNT con la placa LUD 433 y la cédula del demandante, esto es, 98400238, arroja que el referido carro no es de propiedad del demandante; **(ix)** No se prueba de ninguna manera los actos de señor y dueño ejercidos por parte del demandante sobre el automotor de placa LUD 433; **(x)** Aunado a todo lo anterior, los documentos no tienen validez probatoria hasta tanto no sean ratificados por las personas que supuestamente los suscribieron. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

- Sobre el supuesto perjuicio material del demandante con ocasión a los hechos del 27 de mayo de 2022, NO LE CONSTA de manera directa a mi representada, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Sin embargo, no obran en el expediente medios de prueba que permitan probar el supuesto daño emergente y lucro cesante del demandante. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

**Frente al hecho “21.”:** NO LE CONSTA a mi representada si el demandante fue calificado en su pérdida de capacidad laboral, ni la entidad que lo hizo, ni el porcentaje dictaminado, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Sin embargo, en el expediente obra un Dictamen de Determinación de Origen y/o Pérdida de Capacidad Laboral y Ocupacional expedido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Nariño, el cual corrobora el porcentaje de PCL y la fecha de estructuración.

**Frente al hecho “22.”:** NO LE CONSTA a mi representada si el demandante no puede gozar de actividades rutinarias después de los hechos del 27 de mayo de 2022, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Sin embargo, como se verá más adelante, al demandante no le cambió su vida respecto de sí mismo con ocasión a los referidos hechos, pues se evidencia, nuevamente, una completa ausencia probatoria para soportar ese supuesto perjuicio indemnizatorio. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

**Frente al hecho “23.”:** NO SE TRATA DE UN HECHO, sino de apreciaciones subjetivas que hace la parte demandante. Pues se evidencia, nuevamente, una completa ausencia probatoria para soportar ese supuesto perjuicio indemnizatorio. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

**Frente al hecho “24.”:** NO SE TRATA DE UN HECHO, sino de apreciaciones subjetivas que hace la parte demandante. Pues se evidencia, nuevamente, una completa ausencia probatoria para soportar ese supuesto perjuicio indemnizatorio. Corresponde a la parte demandante la probanza de lo dicho de conformidad con lo reglado a partir del artículo 167 del Código General del Proceso.

## II. FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA<sup>3</sup>

**Frente a la pretensión “1.”:** **ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Lo anterior, comoquiera que no se haya acreditada la responsabilidad extracontractual que pretende endilgar el demandante al extremo pasivo, debido a que **(i)** existe una completa orfandad de medios de prueba que permitan establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos del 27 de mayo de 2022, por lo anterior, no es posible endilgar responsabilidad en cabeza de los demandados, **(ii)** producto de lo anterior no se configura el nexo causal como uno de los elementos de la responsabilidad civil, lo que implica la negación de todas las pretensiones de la demanda, **(iii)** finalmente es importante resaltar que mi procurada, no puede ser declara solidariamente responsable por los hechos reprochados, en atención a que la misma no tuvo participación o injerencia, y se reitera que su vinculación al presente proceso, se limita únicamente a la existencia de un contrato de seguro.

**Frente a la pretensión “2.”:** **ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Lo anterior, comoquiera que es una pretensión subsidiaria de la anterior que, por las razones ya expuestas, no tiene vocación de prosperidad. La Corte Suprema de Justicia<sup>4</sup> ha señalado que la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño, sin embargo, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban. Recuérdese que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y, en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mi representada deba ser condenada de forma solidaria. En atención a ello, reitero, no existen elementos fácticos ni jurídicos que permitan determinar que mi procurada sea civil y solidariamente responsable de los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales presuntamente sufridos por los demandantes. Sobre cada uno de los conceptos indemnizatorios solicitados, me pronuncio así:

**Frente a la pretensión “2.1. POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MORALES”:** **ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión porque no hay lugar a la declaratoria de responsabilidad. Adicionalmente, me opongo a la cuantificación debido a que las sumas pretendidas bajo el concepto de daño moral son exageradas y no se encuentran delimitadas y enmarcadas de acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales en los que en múltiples ocasiones se ha pronunciado la Sala Civil de

<sup>3</sup> Código General del Proceso, artículo 96 numeral 2.

<sup>4</sup> Sentencia SC780-2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

la Corte Suprema de Justicia, pues se solicitan valores que superan el baremo jurisprudencial de antaño decantado por el Órgano de Cierre en la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Civil. Puesto que, siguiendo con los lineamientos jurisprudenciales fijados por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia para la tasación de los perjuicios morales en casos análogos de lesiones, la Corte ha fijado reconocido sumas muy inferiores a las aquí pretendidas, incluso en casos de mayor gravedad, es decir, la tasación propuesta está sobrestimada. Mientras que en el caso particular se trata de lesiones de menor gravedad. Aunado a lo anterior, bajo ningún medio de prueba se establece la supuesta unión material de hecho entre los demandantes WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA y MARÍA ELIZABETH ANDRADE INSUASTY, por lo que, en una eventual condena, ninguna suma de dinero podrá ser reconocida a favor de la última.

**Frente a la pretensión “2.2. DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN Y/O DAÑO A LA SALUD”:** **ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos, toda vez que la parte actora no acredita, argumenta, explica ni justifica de manera alguna la valoración sobre la tasación de dichas sumas de dinero, pues únicamente se limita a solicitar un monto a favor del señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA, sin que se argumente y/o sustente lo allí pretendido. Por otro lado, dentro del plenario no existen pruebas que permitan demostrar el daño a la vida de relación del demandante y, además, si bien al dossier se aportó un dictamen de PCL, cabe destacar que el mismo será objeto de contradicción, para que el despacho lo tenga como prueba, dentro del proceso. Así las cosas, de todas maneras, las sumas pretendidas bajo este concepto son exageradas y no se encuentran delimitadas y enmarcadas de acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales en los que en múltiples ocasiones se ha pronunciado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. En efecto, se solicitan valores que ni siquiera han sido reconocidos en casos más graves.

**Frente a la pretensión “2.3. POR CONCEPTO DE PERJUICIOS MATERIALES”:** **ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Lo anterior, comoquiera que es una pretensión subsidiaria de la primera que, por las razones ya expuestas, no tiene vocación de prosperidad. Sobre cada uno de los conceptos indemnizatorios solicitados, me pronuncio así:

**Frente a la pretensión “a. Daño Emergente Debido y Consolidado”:** **ME OPONGO** al reconocimiento de \$ 10.100.000. Lo anterior toda vez que: **(i)** La minuta de contrato adjunta no es el medio de prueba idóneo para acreditar la titularidad de dominio de un bien su jeto a registro, como un vehículo; **(ii)** La declaración ante Notaría del señor Nelson Alirio Tepú Díaz de ninguna manera prueba la posesión del vehículo de placa LUD 433 en cabeza del demandante; **(iii)** Obra un certificado de tradición del vehículo de placa LUD 433 en el que se observa que su propietario actual es el señor Jhoan Sebastián Beltrán Mallama, persona completamente distinta al demandante; **(iv)** Si bien se afirma que desde el 9 de abril de 2022 el demandante ostenta la posesión del vehículo, ni siquiera ha transcurrido el tiempo necesario para adquirir el bien por

prescripción ordinaria ni extraordinaria adquisitiva del dominio; **(v)** No obra ninguna sentencia mediante la cual se adjudique el vehículo al demandante por prescripción adquisitiva de dominio; **(vi)** No obra ninguna sentencia sobre un proceso verbal por incumplimiento del supuesto contrato de compraventa, al no transferir el derecho de dominio; **(vii)** El documento de entrega definitiva del referido vehículo suscrito por la Fiscalía tampoco tiene la virtualidad de determinar la posesión del automotor; **(viii)** Una vez realizada la búsqueda en el RUNT con la placa LUD 433 y la cédula del demandante, esto es, 98400238, arroja que el referido carro no es de propiedad del demandante; **(ix)** No se prueba de ninguna manera los actos de señor y dueño ejercidos por parte del demandante sobre el automotor de placa LUD 433; **(x)** Aunado a todo lo anterior, los documentos no tienen validez probatoria hasta tanto no sean ratificados por las persona que supuestamente los suscribieron.

**Frente a la pretensión “b. Lucro Cesante Consolidado”:** **ME OPONGO** al reconocimiento de \$ 3.718.501. Lo anterior toda vez que: **(i)** Revisado el RUAF – SISPRO, se observa que el demandante únicamente está afiliado en salud bajo el régimen subsidiado; **(ii)** La página del ADRES confirma que el demandante está afiliado en salud bajo el régimen subsidiado; **(iii)** Quiere decir todo lo anterior que el señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA nunca ha trabajado, ni ha generado ingresos, por lo tanto, los hechos del 27 de mayo de 2022 no afectaron en nada las condiciones económicas que antes tenía el demandante.

**Frente a la pretensión “c. Lucro Cesante Futuro”:** **ME OPONGO** al reconocimiento de \$ 64.414.714. Lo anterior toda vez que: **(i)** Revisado el RUAF – SISPRO, se observa que el demandante únicamente está afiliado en salud bajo el régimen subsidiado; **(ii)** La página del ADRES confirma que el demandante está afiliado en salud bajo el régimen subsidiado; **(iii)** Quiere decir todo lo anterior que el señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA nunca ha trabajado, ni ha generado ingresos, por lo tanto, los hechos del 27 de mayo de 2022 no afectaron en nada las condiciones económicas que antes tenía el demandante.

**Frente a la pretensión “3.”:** **ME OPONGO** a la prosperidad de esta petición de condena en costas del proceso y agencias en derecho, reitero mi oposición, toda vez que, se repite, mi representada no tienen ninguna obligación indemnizatoria derivada de los hechos descritos en el escrito genitor. Por tal motivo solicito que, en vista de que no se identifica ninguna actuación que refleje la necesidad de un reproche jurídico por parte de la demandada, se condene en costas a los demandantes, pues sometió al extremo pasivo y a mi prohijada, sin justificación ni respaldo probatorio alguno, al agotamiento innecesario de estas instancias judiciales.

### III. OBJECIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO DE LA DEMANDA

De conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 206 del Código General del

Proceso y con el fin mantener un equilibrio procesal, garantizar pedimentos razonables y salvaguardar el derecho de defensa de mi procurada, procedo a **OBJETAR** el juramento estimatorio de la demanda en los siguientes términos:

**A) Frente al daño emergente.**

Como aspecto fundamental para objetar el juramento estimatorio frente al daño emergente, debe advertirse que: **(i)** La minuta de contrato adjunta no es el medio de prueba idóneo para acreditar la titularidad de dominio de un bien sujeto a registro, como un vehículo; **(ii)** La declaración ante Notaría del señor Nelson Alirio Tepú Díaz de ninguna manera prueba la posesión del vehículo de placa LUD 433 en cabeza del demandante; **(iii)** Obra un certificado de tradición del vehículo de placa LUD 433 en el que se observa que su propietario actual es el señor Jhoan Sebastián Beltrán Mallama, persona completamente distinta al demandante; **(iv)** Si bien se afirma que desde el 9 de abril de 2022 el demandante ostenta la posesión del vehículo, ni siquiera ha transcurrido el tiempo necesario para adquirir el bien por prescripción ordinaria ni extraordinaria adquisitiva del dominio; **(v)** No obra ninguna sentencia mediante la cual se adjudique el vehículo al demandante por prescripción adquisitiva de dominio; **(vi)** No obra ninguna sentencia sobre un proceso verbal por incumplimiento del supuesto contrato de compraventa, al no transferir el derecho de dominio; **(vii)** El documento de entrega definitiva del referido vehículo suscrito por la Fiscalía tampoco tiene la virtualidad de determinar la posesión del automotor; **(viii)** Una vez realizada la búsqueda en el RUNT con la placa LUD 433 y la cédula del demandante, esto es, 98400238, arroja que el referido carro no es de propiedad del demandante; **(ix)** No se prueba de ninguna manera los actos de señor y dueño ejercidos por parte del demandante sobre el automotor de placa LUD 433; **(x)** Aunado a todo lo anterior, los documentos no tienen validez probatoria hasta tanto no sean ratificados por las persona que supuestamente los suscribieron.

**B) Frente al lucro cesante.**

Como aspecto fundamental para objetar el juramento estimatorio frente al lucro cesante, debe advertirse que: **(i)** Revisado el RUAF – SISPRO, se observa que el demandante únicamente está afiliado en salud bajo el régimen subsidiado; **(ii)** La página del ADRES confirma que el demandante está afiliado en salud bajo el régimen subsidiado; **(iii)** Quiere decir todo lo anterior que el señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA nunca ha trabajado, ni ha generado ingresos, por lo tanto, los hechos del 27 de mayo de 2022 no afectaron en nada las condiciones económicas que antes tenía el demandante.

De tal suerte, en el entendido de que las sumas consignadas en el acápite del juramento estimatorio no obedecen a la realidad probatoria allegada al proceso, es en todo caso excesivo y sin soporte probatorio, de manera amable solicito a usted señor Juez, no tener en cuenta la estimación que se realiza en el libelo genitor.

#### IV. EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA DEMANDA<sup>5</sup>

En primer lugar, es preciso poner en conocimiento del Honorable Juez que la defensa se abordará con la formulación de medios exceptivos divididos en tres (3) grupos. En primer lugar, se abordarán las excepciones relacionadas con los medios de defensa propuestos con ocasión a los hechos del 27 de mayo de 2022, en segundo lugar, en relación con las pretensiones indemnizatorias invocadas en la demanda y, en tercer lugar, se formularán los medios exceptivos que guardan profunda relación con el contrato de seguro vinculado a este proceso.

Por lo anterior, se formularán las siguientes excepciones:

#### EXCEPCIONES FRENTE AL FONDO DEL ASUNTO

##### 1. INEXISTENCIA DE MEDIOS DE PRUEBA QUE PERMITAN ENDILGAR RESPONSABILIDAD CIVIL EN CABEZA DE LOS DEMANDADOS

Por medio de la presente excepción, se pretende demostrar al despacho que la parte activa del litigio fundamenta su escrito petitorio única y exclusivamente en un Informe de Accidente de Tránsito (IPAT) para intentar endilgar responsabilidad civil en cabeza de los demandados. No obstante, no obran en el expediente más medios probatorios que den cuenta real y fidedigna de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos del 27 de mayo de 2022. Observándose una total orfandad de elementos que permitan corroborar lo que realmente ocurrió el día de los hechos. Por tal motivo, por la ausencia de medios probatorios que militen dentro del expediente de la referencia, las pretensiones de la demanda se deben desestimar.

Respecto al valor probatorio de los informes policiales de accidente de tránsito, ya se ha pronunciado la Corte Constitucional en sentencia C-429 de 2003, en donde indicó que dicho documento se presume auténtico en relación con la persona que lo elaboró y su fecha. Sin embargo, su contenido puede ser desvirtuado en el respectivo proceso por lo que es una mera hipótesis, pues el agente de tránsito que lo elabora no presenció el accidente, veamos:

*“(…) Es preciso tener en cuenta también, que un informe de policía al haber sido elaborado con la intervención de un funcionario público formalmente es un documento público y como tal se presume auténtico, es decir, cierto en cuanto a la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad, y hace fe de su otorgamiento y de su fecha; y, en cuanto a su contenido es susceptible de ser desvirtuado en el proceso judicial*

<sup>5</sup> Código General del Proceso, artículo 96 numeral 3.

respectivo.

*Este informe de policía entonces, en cuanto a su contenido material, deberá ser analizado por el fiscal o juez correspondientes siguiendo las reglas de la sana crítica*

*y tendrá el valor probatorio que este funcionario le asigne en cada caso particular al examinarlo junto con los otros medios de prueba que se aporten a la investigación o al proceso respectivo, comoquiera que en Colombia se encuentra proscrito, en materia probatoria, cualquier sistema de tarifa legal (...)*”

Es claro entonces que, según la Corte Constitucional, de dicho documento sólo se puede presumir autenticidad de la persona que lo elabora y el momento en que lo hace. No obstante, el resto de información está sujeta a una futura acreditación por cuanto la persona que realiza el IPAT y el croquis, no estuvo presente en el momento en que ocurrieron los hechos. Por lo tanto, no fue un testigo presencial y el diligenciamiento de dicho informe se hace con base en el seguimiento de lo preceptuado en el artículo 149 de la Ley 769 de 2002, el cual dispone que:

*“(...) ARTÍCULO 149. DESCRIPCIÓN. En los casos a que se refiere el artículo anterior, el agente de tránsito que conozca el hecho levantará un informe descriptivo de sus pormenores, con copia inmediata a los conductores, quienes deberán firmarlas y en su defecto, la firmará un testigo.*

*El informe contendrá por lo menos:*

*Lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho.*

*Clase de vehículo, número de la placa y demás características.*

*Nombre del conductor o conductores, documentos de identidad, número de la licencia o licencias de conducción, lugar y fecha de su expedición y número de la póliza de seguro y compañía aseguradora, dirección o residencia de los involucrados.*

*Nombre del propietario o tenedor del vehículo o de los propietarios o tenedores de los vehículos.*

*Nombre, documentos de identidad y dirección de los testigos.*

*Estado de seguridad, en general, del vehículo o de los vehículos, de los frenos, de la dirección, de las luces, bocinas y llantas.*

*Estado de la vía, huella de frenada, grado de visibilidad, colocación de los vehículos y distancia, la cual constará en el croquis levantado.*

*Descripción de los daños y lesiones.*

*Relación de los medios de prueba aportados por las partes.*

*Descripción de las compañías de seguros y números de las pólizas de los seguros obligatorios exigidos por este código.*

*En todo caso en que produzca lesiones personales u homicidio en accidente de tránsito, la autoridad de tránsito deberá enviar a los conductores implicados a la*

*práctica de la prueba de embriaguez, so pena de considerarse falta disciplinaria grave para el funcionario que no dé cumplimiento a esta norma.*

*El informe o el croquis, o los dos, serán entregados inmediatamente a los interesados y a la autoridad instructora competente en materia penal.*

*El funcionario de tránsito que no entregue copia de estos documentos a los interesados o a las autoridades instructoras, incurrirá en causal de mala conducta.*

*Para efectos de determinar la responsabilidad, en cuanto al tránsito, las autoridades instructoras podrán solicitar pronunciamiento sobre el particular a las autoridades de tránsito competentes (...).*

Es notorio entonces, que el funcionario que diligencia el IPAT y el croquis lo hace en cumplimiento de lo reglado por la norma de tránsito y la información que deposita en dicho documento se circunscribe estrictamente a lo que la Ley ordena que debe ir diligenciado al momento de elaborar el informe. El artículo 146 de la norma ibídem, reza que:

*“(...) ARTÍCULO 146. CONCEPTO TÉCNICO. Las autoridades de tránsito podrán emitir conceptos técnicos sobre la responsabilidad en el choque y la cuantía de los daños. A través del procedimiento y audiencia pública dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación del informe. En caso de requerirse la práctica de pruebas éstas se realizarán en un término no superior a los diez (10) días hábiles, notificado en estrados previo agotamiento de la vía gubernativa.*

*En los procesos que versen sobre indemnización de perjuicios causados por accidentes de tránsito, una vez dictada la sentencia de primera instancia, sin importar que ésta sea apelada o no, el juez decretará el embargo y secuestro del vehículo con el cual se causó el daño, siempre y cuando el solicitante preste caución que garantice el pago de los perjuicios que con la medida puedan causarse. Tal medida se registrará por las normas del libro IV del Código de Procedimiento Civil, y se levantará si el condenado presta caución suficiente, o cuando en recurso de apelación se revoque la sentencia condenatoria o si el demandante no promueve la ejecución en el término señalado en el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, o si se extingue de cualquier otra manera la obligación.*

*Las medidas cautelares y las condenas económicas en esta clase de procesos, no podrán exceder el monto indexado de los perjuicios realmente demostrados en él mismo (...)*

Una vez hecho el recuento normativo al respecto, se analizará el caso particular. Dentro de los medios de prueba que se aportan al proceso obra el IPAT del 27 de mayo de 2022. En este sentido, lo primero que se debe manifestar es que, como se dijo en líneas anteriores, el funcionario que

realiza el informe no estuvo presente al momento de los hechos, como se observa en un extracto del documento:

4. FECHA Y HORA											
2	9	0	5	2	0	2	2	0	6	1	0
FECHA Y HORA DE OCURRENCIA											
1	2	7	0	5	1	2	0	1	2	0	8
FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO											

Esta simple cuestión es determinante para aseverar que el diligenciamiento del informe se hace por una persona que desconoce todas las circunstancias que rodearon los hechos, por cuanto, se itera, no los presencié. Ahora bien, respecto de lo preceptuado en la parte normativa, el IPAT de ninguna manera puede endilgar responsabilidad a cualquiera de los involucrados en el evento de tránsito, pues se cimienta a través de una hipótesis que, en todo caso, de ninguna manera puede tener un carácter absoluto al momento describir lo que realmente ocurrió. Quiere decir todo lo anterior, que la parte demandante únicamente fundamente sus pretensiones en un único medio de prueba que fue realizado por una persona que ni siquiera presencié los hechos.

Además de lo anterior, el referido IPAT ni siquiera fue realizado con base en las conclusiones propias del funcionario de tránsito que lo elaboró, sino que lo hizo por lo que la gente supuestamente vio y le manifestaron:

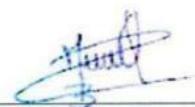
MENCIONADOS AL IGUAL QUE UNA PERSONA LA CUAL RESULTA LESIONADA EN EL EVENTO DE ACCIDENTE DE TRANSITO, POR OTRO LADO, SE DEJA CONSTANCIA LA PRESENCIA DE LA COMUNIDAD EN EL LUGAR DE LOS HECHOS LOS CUALES MANIFIESTAN QUE EL VEHICULO NUMERO DOS VEHICULO TIPO BUSETA AL INTENTAR ADELANTAR OTRO VEHICULO POR EL CARRIL QUE CONDUCE DE SIBUNDOY A PASTO NO SE PERCATA DE LA SALIDA DEL VEHICULO NUMERO UNO TIPO AUTOMOVI IMPACTANDOLO DE FRENTE Y CAUSANDO EL ACCIDENTE DE TRANSITO. DE IGUAL

Por otro lado, los demás documentos obrantes en el expediente, como el Acta de Inspección a Lugares FPJ 09 es diligenciado por la misma funcionaria que hizo el IPAT, es decir, no se trata del concepto de otra persona, sino de la misma que hizo el IPAT:

5. SERVIDORES DE POLICIA JUDICIAL:			
Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
MARIBEL BURBANO ORTEGA		1085286905	PONAL
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	
INTEGRANTE CUADRANTE VIAL NO 3 SETRA DENAR	3183044765	<a href="mailto:Maribel.burbano@correo.policia.gov.co">Maribel.burbano@correo.policia.gov.co</a>	

En el evento de existir más registros se debe reproducir la tabla tantas veces sea necesario.

La misma situación ocurre con el Informe de Investigador de Campo FPJ 11, pues es diligenciado por la misma funcionaria que hizo el IPAT:

9. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL			
Nombres y Apellidos		Identificación	Entidad
MARIBEL BURBANO ORTEGA		1085286905	PONAL
Cargo	Teléfono / Celular	Correo electrónico	
INTEGRANTE CUADRANTE VIAL NO 3 SETRA DENAR	3183044765	<a href="mailto:Maribel.burbano@correo.policia.gov.co">Maribel.burbano@correo.policia.gov.co</a>	
<b>FIRMA</b>  INTEGRANTE CUADRANTE VIAL No 3 SETRA DENAR			
Nota: En caso de requerir más espacio para diligenciar alguna de estas casillas, utilice hoja en blanco anexa, relacionado el número de Noticia criminal			

Lo anterior debe ser analizado desde la perspectiva de la habilidad, destreza y experiencia en la conducción de vehículos que tenía el señor IVÁN DARÍO JOJOA BOTINA, la cual está plenamente acreditada. Por un lado, de acuerdo al IPAT obrante en el expediente digital, se observa que el conductor del vehículo de placa SJP 307 contaba con licencia de conducción para el momento de los hechos, sin ninguna restricción para conducir:

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS		VEHÍCULO (V)		FECHA DE NACIMIENTO		SESO		GRAVEDAD		
N.º CONDUCTOR	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACION	NACIONALIDAD	DIA	MESES				
1085308851	Ivan Darío Jojoa Botina	CC	1085308851	Colombia	25	11	1983	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DIRECCIÓN DE DOMICILIO		CUIDAD	TELEFONO	SE PRACTICO EXAMEN	SI	NO	PSICOACTIVA		SI	NO
Domicilio la laguna		Pasto	3163307698	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	GRADO		SI	NO
CATEGORIA		RESTRICCION	EXP. VEH.	CODIGO DE TRANSITO	CHALEGO	CASCO	CINTURON		SI	NO
C2			315108210	52480000	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Además de lo anterior, consultado el RUNT se observa que:

NOMBRE COMPLETO:	IVAN DARIO JOJOA BOTINA				
DOCUMENTO:	C.C. 1085308851	ESTADO DE LA PERSONA:	ACTIVA		
ESTADO DEL CONDUCTOR:	ACTIVO	Número de inscripción:	15118663		
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/01/2015				
Licencia(s) de conducción					
Nro. licencia	OT Expide Lic.	Fecha expedición	Estado	Restricciones	Detalles
1085308851	STRIA TTOYTTE MCPAL NARIÑO	15/08/2020	ACTIVA		<a href="#">Ver Detalle</a>
Categorías de la licencia Nro: 1085308851					
Categoría	Fecha expedición	Fecha vencimiento	Categoría antigua		
C2	15/08/2020	15/08/2023			
A2	06/02/2015	06/02/2025			
B2	15/08/2020	15/08/2030			

Recordemos qué es una licencia de conducción, según la Ley 769 de 2002:

*“(...) ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES. Para la aplicación e interpretación de este código, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:*

*(...) Licencia de conducción: Documento público de carácter personal e intransferible expedido por autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional (...)*”

Pues bien, es el documento que autoriza a una persona para la conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional. Sin embargo, esta autorización está reglamentada por el Ministerio de Transporte por expresa disposición de la norma ibídem:

*“(...) ARTÍCULO 20. El Ministerio de Transporte definirá mediante resolución las categorías de licencias de conducción y recategorizaciones, lo mismo que las restricciones especiales que deben tenerse en cuenta para la expedición de las licencias según cada categoría (...)*”

Es por lo anterior que el Ministerio de Transporte expide la Resolución 001500 del 27 de junio de 2005, la cual tiene por objeto:

*“(...) Artículo 1º. Objeto. La presente resolución tiene por objeto definir las nuevas categorías de las Licencias de Conducción, de conformidad con el artículo 20 de la Ley 769 de 2002 (...)*”

El fin teleológico de la norma es proteger a todos los actores viales, pues los automotores deben ser conducidos por personas de acuerdo a su conocimiento y experticia, además porque en tratándose de servicio público los conductores deben tener especiales conocimientos, experiencia y experticia para maniobrar los vehículos de carga, por su envergadura. Es por lo anterior que las licencias de conducción se categorizan de acuerdo a la destinación del vehículo que se vaya a conducir, es decir, en particular o público:

*“(...) Artículo 3º. Clasificación de las Licencias de Conducción. Las Licencias de Conducción se clasifican así:*

- 1. Licencias de Conducción para vehículos automotores destinados al servicio particular. Dentro de esta clasificación quedan comprendidos los vehículos de servicio oficial, diplomático, consular y de misiones especiales.*
- 2. Licencias de Conducción para vehículos automotores destinados al servicio público (...)*”

En tratándose de automotores de servicio público, la Resolución dispone:

“(…) **Artículo 5°. Categorías de las Licencias de Conducción de vehículos automotores de servicio público. Las Licencias de Conducción de los vehículos de servicio público tendrán las siguientes categorías, dentro de una nomenclatura única:**

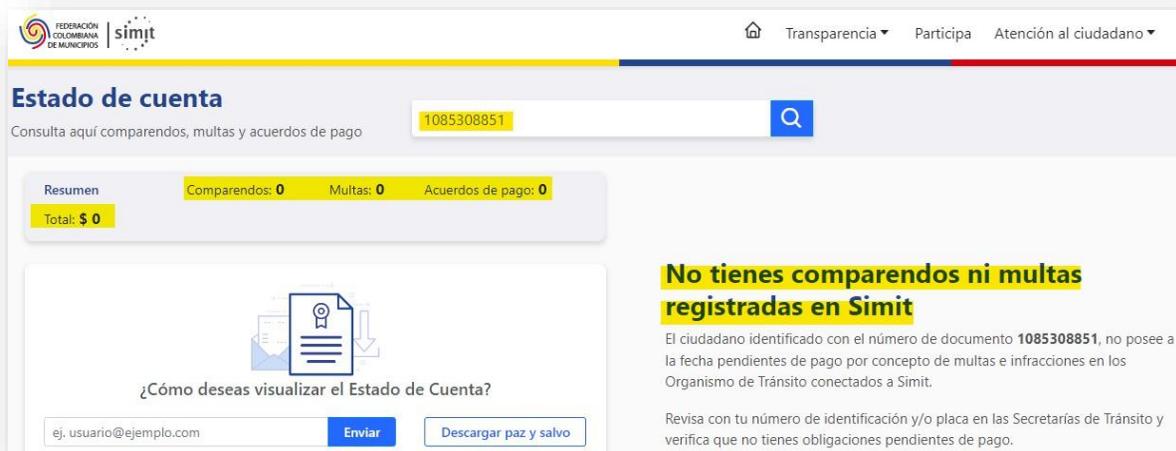
*C1 Para la conducción de automóviles, camperos, camionetas y microbuses.*

**C2 Para la conducción de camiones rígidos, busetas y buses.** *C3 Para la conducción de vehículos articulados.*

**Parágrafo 1°. Dentro de una misma nomenclatura, el titular de la Licencia de Conducción de mayor categoría podrá conducir vehículos de categoría inferior.**

**Parágrafo 2°. Los conductores que posean Licencia de Conducción para vehículos de servicio público, podrán conducir vehículos particulares de similar o menor categoría (...).** (Resaltado y negrilla propio).

Por último, el señor IVÁN DARÍO JOJOA BOTINA conductor del vehículo de placas SJP 307, ni siquiera tenía infracciones o multas registradas por la actividad de conducción de vehículos:



Como se observa, el referido conductor cumplía con toda la normatividad que exigía la conducción de camiones rígidos, busetas y buses en tratándose de servicio público, razón por la cual poner en duda su destreza, no tiene asidero fáctico, probatorio ni jurídico.

En consecuencia, debido a que correspondía al demandante probar los fundamentos de sus pedimentos, en específico, demostrar la causa efectiva del evento de 27 de mayo de 2022 y en vista de la ausencia probatoria que milita en el libelo genitor, de manera consecuente deberán ser negadas todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda.

En conclusión, resulta evidente entonces que la parte demandante pretende soportar sus pretensiones en un único documento, el cual, como se dijo antes, no puede ser tenido como prueba absoluta e irrefutable de lo que realmente ocurrió, principalmente, porque quien lo diligenció no presencié los hechos, acude en momentos posteriores a la ocurrencia de lo sucedido y se limita a diligenciar el informe de acuerdo a lo estipulado en la norma de tránsito nacional. Aunado a lo anterior, el señor IVÁN DARÍO JOJOA BOTINA era un conductor altamente experimentado, capacitado y autorizado para conducir vehículos de servicio público. Finalmente, la consecuencia necesaria frente a la ausencia y orfandad de medios de prueba que permitan esclarecer la causa efectiva de los hechos plurimencionados, implica correlativamente que se deban negar las pretensiones de la demanda.

Por esas razones, solicito respetuosamente se declare probada esta excepción.

## **2. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR LA NO ACREDITACIÓN DEL NEXO CAUSAL**

En relación con la excepción anterior, es menester formular este medio exceptivo, pues en vista de las circunstancias antes alegadas, en este caso no se configura el nexo causal para imputar responsabilidad a los demandados. El nexo causal, al ser uno de los elementos indispensables en la configuración de la responsabilidad civil, no se halla configurado ni acreditado en el caso de marras por cuanto existe una completa orfandad de medios de prueba que permitan conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos del 27 de mayo de 2022, además, teniendo en cuenta que el señor IVÁN DARÍO JOJOA BOTINA conductor del vehículo de placa SJP 307 estaba cumpliendo toda la normatividad para ejercer la actividad de conducción de vehículos terrestres.

La relación de causalidad es un requisito *sine qua non* para declarar la responsabilidad civil de una persona, dado un hecho y un daño. Como acotamos anteriormente, este elemento debe ser acreditado en todo caso por parte del demandante y su omisión conlleva sencillamente al fracaso de las declaraciones y condenas pretendidas. El estado del arte actual ha acogido la teoría de la causalidad adecuada, la cual indica que un hecho es causa de una consecuencia cuando la producción de esta le sea atribuible de conformidad con las reglas de la experiencia<sup>6</sup>. En resumidas cuentas, es un estudio de idoneidad del hecho para producir la consecuencia, que en materia de responsabilidad civil hace referencia al daño. La Corte Suprema de Justicia ha acogido esta teoría y la define de la siguiente manera:

*“(...) Ahora bien, para establecer ese nexo de causalidad es preciso acudir a las*

---

<sup>6</sup> Ballesteros J. (2012). Responsabilidad Civil. Parte General Tomo I. Temis. Bogotá Págs. 417 – 418

*reglas de la experiencia, a los juicios de probabilidad y al sentido de la razonabilidad, pues solo éstos permiten aislar, a partir de una serie de regularidades previas, el hecho con relevancia jurídica que pueda ser razonablemente considerado como la causa del daño generador de responsabilidad civil (...)*<sup>7</sup>

Debe igualmente resaltarse que la jurisprudencia ha utilizado como método para identificar la causa del daño “(...) la teoría de la causalidad adecuada, según la cual, solo es causa del resultado, aquella conducta que es suficiente, idónea y adecuada para la producción del mismo, (...) según esta teoría, solo los acontecimientos que normalmente producen un hecho pueden ser considerados como la causa del mismo. Por lo tanto, un comportamiento es el resultado de un daño, si al suprimirlo es imposible explicar el resultado jurídicamente relevante (...)”<sup>8</sup>. Así, es manifiesto el examen de causalidad consiste en un estudio de orden fáctico, acerca de la idoneidad de un hecho para ser considerado jurídicamente causal de la producción de un daño. En otras palabras, el hecho está sujeto a la verificación material y probatoria de su idoneidad para ser considerado bajo el concepto jurídico de causa.

El referido examen de causalidad cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, para que sea posible declarar responsabilidad civil, es requisito necesario e ineludible que exista y se encuentre probado el nexo causal entre el hecho que se alega y el daño cuya indemnización se solicita. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado lo siguiente:

*“(...) En materia de responsabilidad civil, la causa o nexo de causalidad es el concepto que permite atribuir a una persona la responsabilidad del daño por haber sido ella quien lo cometió, de manera que deba repararlo mediante el pago de una indemnización. El artículo 2341 del Código Civil exige el nexo causal como uno de los requisitos para poder imputar responsabilidad, al disponer que “el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización...”. (Se resalta). Cometer un delito o culpa significa entonces, según nuestro ordenamiento civil, realizar o causar el hecho constitutivo del daño resarcible (...)”*<sup>9</sup>

Para el caso bajo análisis, por la evidente ausencia de medios de prueba que permitan esclarecer los hechos del 27 de mayo de 2022, no es posible acreditar la configuración de responsabilidad civil en cabeza de los demandados por cuanto el requisito del nexo causal no se encuentra acreditado. En concordancia con la excepción anterior, se insiste, no militan en el expediente suficientes medios de prueba, conducentes y útiles que permitan, así sea sumariamente, esclarecer lo sucedido en la referida fecha, pues el señor IVÁN DARÍO JOJOA BOTINA conducía el vehículo bajo los estrictos cuidados demandados para tal actividad.

<sup>7</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 14 de diciembre de 2012. Radicación: 2002- 188. M. P. Ariel Salazar Ramírez.

<sup>8</sup> Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 22 de junio de 2001. M.P. Ricardo Hoyos Duque.

<sup>9</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 14 de diciembre de 2012. Radicación: 2002- 188. M. P. Ariel Salazar Ramírez.

En conclusión, en la medida en que existe una completa ausencia de medios de prueba sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron los hechos del 27 de mayo de 2022, además, que el señor IVÁN DARÍO JOJOA BOTINA conducía el vehículo bajo los estrictos cuidados demandados para tal actividad, no existiendo otra causa probable del evento, no se puede predicar responsabilidad en cabeza de los demandados. No se logró acreditar por la parte demandante, como era su obligación procesal, que los hechos del 27 de mayo de 2022 y el supuesto daño causado fueran atribuibles a los demandados, es decir, no se probó el nexo causal.

Solicito a señor Juez declarar probada esta excepción.

### **3. EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD APLICABLE A ESTE PARTICULAR ES EL DE LA CULPA PROBADA**

Se formula esta excepción, pues ambos conductores se encontraban en el ejercicio de una actividad peligrosa y, por tanto, la presunción sobre la culpa se neutraliza. Recordemos que, según lo narrado en la demanda, el 27 de mayo de 2022 el demandante conducía el vehículo de placa LUD 433 y afirma que el demandado IVÁN DARÍO JOJOA BOTINA conducía el vehículo de placa SJP 307. Es por lo anterior que la parte actora tiene la carga de probar la responsabilidad de las aquí demandadas, conforme lo ha señalado reiteradamente la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia al considerar que en el caso de las actividades peligrosas, la culpa se presume, salvo que las partes en controversia se encuentren en el desarrollo o ejercicio de ellas, pues bajo ese entendido el problema se analizaría desde la perspectiva del artículo 2341 del Código Civil, esto es, bajo la normatividad de la culpa probada y no a la luz del artículo 2356 del Código Civil. Según los documentos que obran en el expediente, al momento del suceso acaecido el 27 de mayo de 2022, la actividad desplegada por los conductores involucrados en el mismo es de las denominadas actividades peligrosas y, por tal motivo, la presunción sobre la culpa se neutraliza, teniendo la parte actora la carga de acreditarla, como lo ha señalado la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

En efecto, al adoptar la teoría de la neutralización, la Corte Suprema de Justicia ha considerado que, en el caso las actividades peligrosas, la culpa se presume, salvo que las partes en controversia se encuentren desplegando actividades peligrosas, pues aquí el problema se analiza desde la perspectiva del artículo 2341 del Código Civil, esto es, bajo la normatividad de la culpa probada. Es decir, que no se tiene en cuenta el artículo 2356 del Código Civil, que se fundamenta en la responsabilidad presunta. Lo anterior se materializa en la siguiente sentencia, en la que la Corte confirmó el fallo citando apartes de la sentencia impugnada, proferida por el Tribunal Superior del Distrito de Cundinamarca:

"(...) Como en este caso el accidente se produjo cuando ambas partes desarrollaban actividades de ese tipo, **se eliminaba cualquier presunción de culpa, lo que a su turno implicaba que la acción no se examinara a la luz del artículo 2356 del C. Civil, sino del 2341 ibídem, evento en el cual el demandante corría con la carga de demostrar todos los elementos integrantes de la responsabilidad civil extracontractual (...)**"<sup>10</sup>.

En otra sentencia, la Corte Suprema de Justicia confirmó los argumentos expuestos por el Tribunal Superior de Armenia, aplicando el régimen de la culpa probada, por el hecho de tratarse de concurrencia de actividades peligrosas, así:

"(...) La parte demandante debió probar la culpa de los demandados, por tratarse de una colisión entre dos vehículos bus y bicicleta que transitaban bajo la presunción de actividades peligrosas, para el caso la presunción de culpa se neutraliza y lo aplicable no sería el artículo 2356 de Código Civil sino el 2341 de culpa probada (...)"<sup>11</sup>.

Vale la pena recordar que la teoría de la causalidad aplicada en Colombia es la causalidad adecuada. A diferencia de la teoría de la equivalencia de condiciones en la que simplemente basta aplicar el método de la supresión mental hipotética y determinar si el hecho final se hubiere o no presentado o no con determinada actuación. La teoría de la causa adecuada exige un filtro adicional, en el que de esa multiplicidad de causas que se pueden presentar en el mundo fenomenológico que pueden ser condiciones *sine qua non*, serán relevantes solo aquellas de las que fuera previsible el resultado. Doctrina autorizada y reciente confluye en aseverar que para declarar la responsabilidad es necesaria la concurrencia de tres elementos indispensables, a saber:

"(...) Es sabido que para que exista la responsabilidad se requieren tres elementos absolutamente indispensables y necesarios: el daño, el hecho generador del mismo y un nexo de causalidad que permita imputar el daño a la conducta (acción u omisión) del agente generador. El nexo causal se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a esta por una relación de causa-efecto. Si no es posible encontrar esa relación mencionada, no tendrá sentido alguno continuar el juicio de responsabilidad (...)"<sup>12</sup> (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

En ese sentido, debe precisarse que una actividad peligrosa es la que puede producir daños

<sup>10</sup> Sentencia 5462 de 2000 M.P., José Fernando Ramírez Gómez

<sup>11</sup> Sentencia 6527 de 16 de marzo de 2001, M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno.

<sup>12</sup> Patiño, Héctor. "Responsabilidad extracontractual y causales de exoneración. Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano". Revista Derecho Privado N14. Universidad Externado de Colombia. 2008.

incontrolables e imprevisibles, tal como lo advierte la sociología en las situaciones impredecibles, incalculables y catastróficas de la sociedad del riesgo contemporánea. De ahí, que la obligación de indemnizar en este tipo de responsabilidad no puede depender del control o la previsión de las consecuencias, pues ello supondría imponer un criterio de imputación basado en la previsión de lo imprevisible. Ahora bien, la labor persuasiva debe orientarse a establecer cuál de todos los comportamientos antijurídicos ocasionó el daño. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado lo siguiente:

*“(...) aquél que de acuerdo con la experiencia (las reglas de la vida, el sentido común, la lógica de lo razonable) sea el más ‘adecuado’, el más idóneo para producir el resultado, atendidas por lo demás, las específicas circunstancias que rodearon la producción del daño y sin que se puedan menospreciar de un tajo aquellas circunstancias azarosas que pudieron decidir la producción del resultado, a pesar de que normalmente no hubieran sido adecuadas para generarlo (...)”<sup>13</sup>*

En efecto, el concepto de peligrosidad de la actividad, empero, no ha sido definido bajo un criterio jurídico general, sino que suele explicarse mediante ejemplos tales como la velocidad alcanzada, la naturaleza explosiva o inflamable de la cosa utilizada, la energía desplegada o conducida, entre otras situaciones cuya caracterización ha sido delimitada por la jurisprudencia. Del mismo modo, en este punto es menester aclarar que la responsabilidad civil supone resarcir un daño generado con ocasión de un hecho que no tiene origen en un incumplimiento obligacional, sino que opera entre quienes ha vinculado únicamente el azar. En particular, la responsabilidad civil extracontractual en actividades peligrosas, como sucede con la conducción de vehículos automotores, supone (i) que la víctima demuestre el ejercicio de la actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad entre ambos; (ii) que el presunto responsable solo podrá exonerarse, salvo norma en contrario, demostrando la existencia de alguna causal eximente de responsabilidad que rompa el nexo causal; y (iii) que en los casos de actividades peligrosas concurrentes el juez deba examinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produce el daño para establecer el grado de responsabilidad que corresponde a cada actor.

De manera que en la investigación dirigida a establecer si fue destruido el nexo causal o a ponderar el grado de incidencia de la conducta de la víctima, entre los varios antecedentes que en forma hipotética ocasionaron el daño. Únicamente deben dejarse los que, atendiendo los criterios dichos en la jurisprudencia, tuvieron la aptitud para producirlo, mas no los que simplemente emergieron como factores meramente circunstanciales. En el caso concreto, es menester señalar que la parte demandante en el presente asunto no acreditó los elementos para estructurar un juicio de responsabilidad, puesto que no existe prueba alguna que acredite relación de causalidad entre el supuesto perjuicio alegado y la actuación del conductor del vehículo de placa SJP 307. Por ende, la falencia de este requisito indispensable destruye cualquier posibilidad de erigir válidamente un

<sup>13</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. Sentencia del 15 de enero de 2008. Expediente 87300.

cargo de responsabilidad en contra de los demandados.

Así las cosas, para que se configure la responsabilidad civil extracontractual es necesario que concurren los siguientes elementos: i) una conducta humana, positiva o negativa, por regla general antijurídica, ii) un daño o perjuicio, esto es, un detrimento, menoscabo, deterioro, que afecte bienes o intereses ilícitos de la víctima, vinculados con su patrimonio, con los bienes de su personalidad, o con su esfera espiritual o afectiva, iii) una relación de causalidad entre el daño sufrido por la víctima y la conducta de aquel a quien se imputa su producción o generación y, iv) un factor o criterio de atribución de la responsabilidad, por regla general de carácter subjetivo (dolo o culpa). Presupuestos que no se reúnen en el presente caso.

Al respecto, vale la pena decir que en el análisis realizado a las pruebas que acompañan la demanda, no se observó en el expediente ninguna que permita demostrar o acreditar la ocurrencia de los hechos aducidos en el escrito de demanda con relación a la responsabilidad de los demandados en este proceso. Es decir, las circunstancias de modo, tiempo y lugar del accidente de tránsito no se encuentran acreditadas al interior del plenario, puesto que el Informe Policial de Accidente de Tránsito que se aportó a este proceso, se construyó a través de una hipótesis probable del accidente que determinó el agente de tránsito encargado de realizar el levantamiento del informe. De manera que el demandante intenta atribuir responsabilidad a los demandados sin ninguna prueba idónea que demuestre que la hipótesis del accidente efectivamente corresponde a la causa eficiente del mismo.

Así mismo, se resalta que de conformidad con la Resolución 001268 de 2000 expedida por el Ministerio de Transporte, el objetivo de diligenciar los Informes Policiales de Accidentes de Tránsito es identificar las hipótesis de causas de accidentalidad que permitan elaborar diagnósticos para la planificación de correctivos en materia vial con la finalidad de reducir el número de accidentes y/o disminuir su gravedad. Supuesto que dista considerable de establecer la responsabilidad de los vehículos implicados en los accidentes de tránsito. Circunstancia que está en consonancia con lo establecido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia según la cual, el valor probatorio del bosquejo topográfico o del Informe de Policial de Accidentes de Tránsito debe ser apreciado de conformidad con el sistema de apreciación racional, mediante el cual el juez no se encuentra atado por reglas preestablecidas que establezcan el mérito atribuible a los diversos medios de prueba. Por el contrario, *“lo dota de libertad para apreciarlos y definir su poder de convicción, con un criterio sistemático, razonado y lógico”*<sup>14</sup>. Es decir, el Informe Policial de Accidente de Tránsito no funge como prueba idónea y suficiente para acreditar un nexo causal en este caso, por tratarse de una mera hipótesis no comprobada. De manera que, al no existir prueba del nexo de causalidad, es jurídicamente improcedente endilgar cualquier tipo de responsabilidad, debiendo en este punto exonerar totalmente a los demandados.

---

<sup>14</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez. SC7978-2015. Radicado 2008-00150

En conclusión, para configurarse los elementos de la responsabilidad civil es necesario que concurren los siguientes elementos: i) hecho generador, ii) daño y iii) nexo de causalidad entre el daño sufrido por la víctima y la conducta de aquel a quien se imputa su producción o generación. Sin embargo, verificados los elementos probatorios que obran dentro del expediente no se logra establecer que se reúnan los elementos de la responsabilidad civil dentro del presente asunto, puesto que no existe prueba idónea que acredite un nexo de causalidad entre las conductas de los demandados y los daños que hoy reclaman los demandantes. Ahora bien, teniendo en cuenta que el IPAT no es un medio de prueba suficiente, deberán negarse las pretensiones de la demanda. Razón por la cual, al no encontrarse acreditado un nexo causal, no podría endilgársele a los demandados ningún tipo de responsabilidad por no encontrarse acreditado uno de los elementos estructurales de la misma.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

#### **4. SUBSIDIARIA: REDUCCIÓN DE LA EVENTUAL INDEMNIZACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA INCIDENCIA DE LA CONDUCTA DEL SEÑOR WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA EN LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO**

En gracia de discusión y de manera subsidiaria, debe tenerse en cuenta que en el improbable y remoto evento en que se reconocieran una o algunas de las pretensiones esgrimidas por los demandantes, de todas maneras, debe aplicarse la respectiva reducción de la indemnización. Lo anterior, en proporción a la contribución que tuvo en el accidente el señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA, quien imprudentemente conducía un vehículo sin el respeto a las normas de tránsito, es decir, asumió el riesgo de movilizarse sobre la vía sin respetar las señales y normas de tránsito y sin estar pendiente de los demás actores viales, como el vehículo de placa SJP 307 que se movilizaba de forma correcta. Por supuesto, sin perjuicio de que como ya se demostró en las anteriores excepciones: (i) No hay prueba del nexo de causalidad entre el actuar del conductor del vehículo de placa SJP 307 y los supuestos daños que sufrieron los demandantes, además, (ii) existe una completa ausencia de medios de prueba de corroboren lo sucedido el 27 de mayo de 2022.

Conforme a lo dicho, el despacho debe establecer un análisis causal de las conductas implicadas en el evento dañoso, a fin de determinar la incidencia del señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA en la ocurrencia del daño. Lo anterior, a efectos de disminuir la indemnización si es que a ella hubiere lugar, en proporción a su contribución en los hechos del 27 de mayo de 2022 en los que aparentemente se ocasionaron daños al vehículo del demandante y que ocurrieron como consecuencia de las conductas imprudentes desplegadas por el señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA. Así es como lo ha indicado la Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento del 19 de noviembre de 1993:

*“(…) Para aquellos eventos en los que tanto el autor de la conducta dañosa como el damnificado concurren en la generación del perjuicio, el artículo 2357 del Código Civil consagra una regla precisa, según el cual **“[l]a apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”**. Tradicionalmente, en nuestro medio se le ha dado al mencionado efecto la denominación “compensación de culpas (…)”<sup>15</sup>*

En distinto pronunciamiento, la misma Corporación manifestó que en el caso en que la negligencia de la víctima incida para que se exponga imprudentemente al daño, deberá necesariamente realizarse una reducción de la indemnización. Lo anterior fue manifestado en un caso en el que se evidenció la culpa de la víctima en la ocurrencia del daño, estimada en una proporción del cuarenta por ciento (40 %) de los perjuicios:

*“(…) En cuanto a la conducta de la víctima, analizada desde lo culpabilístico, es concurrente del hecho dañoso, por infringir los artículos 77 y 79 de la Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Tránsito Terrestre), al aparcar en lugar prohibido y sin encender las luces de parqueo. Empero, la violación de tales normas viales no resulta incidentes en un 50% de la causa del accidente, pues amén de su transgresión, el otro maquinista lo vio a cierta distancia estacionado, sólo que éste fue negligente, pues al no disminuir la velocidad ni cambiar de calzada, chocó con él.*

*Sin embargo, **aunque el obrar de Carlos Alirio Méndez Lache no fue determinante en una mitad en la producción del resultado dañoso, su actuar, aunque pasivo por no desarrollar al momento de la colisión la actividad peligrosa de la conducción, fue causante como mínimo del mismo, porque al detenerse sobre la carretera, asumió un riesgo razonablemente previsible, propio de las incidencias de la circulación, como lo es el de resultar impactado, ya sea por la actividad de otro conductor.***

*Debió entonces tomar “precauciones” a fin de evitar el siniestro, como haber parqueado en una berma, o en un lugar permitido para ello, evitando, en todo caso, convertirse en un obstáculo directo para vehículos en marcha en un segmento de la vía que les permite alcanzar altas velocidades. Así las cosas, la mencionada negligencia y situación de riesgo provocada por el demandante, conducen a esta Corte, **en atención a los elementos concausales y culpabilísticos, a modificar su porcentaje de concurrencia en un 40% (…)**<sup>16</sup> (Subrayado y negrilla fuera del texto original).*

<sup>15</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Radicación No. 3579. No publicada.

<sup>16</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Expediente 11001-31-03-032-2011-00736-01. junio 12 de 2018.

Como se lee, el fallador encontró probada la incidencia de la víctima en la causa generadora del daño, en proporción a un cuarenta por ciento (40 %) y en ese sentido redujo los perjuicios que se probaron en el proceso en el mismo porcentaje. Comoquiera que la responsabilidad del demandado resultó menguada por la participación determinante de la víctima en la ocurrencia del suceso. De tal suerte que queda completamente claro que el fallador debe considerar el marco de circunstancia en que se produce el daño, así como sus condiciones de modo, tiempo y lugar, a fin de determinar la incidencia causal de la conducta de la víctima en la ocurrencia del daño por el cual solicita indemnización.

En conclusión, tal como lo ha determinado la jurisprudencia, aunque es evidente la ausencia de medios de prueba sobre los hechos del 27 de mayo de 2022 se solicita que al encontrarse acreditado por medio de las pruebas que obran en el expediente que el señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA tuvo incidencia en los hechos del 27 de mayo de 2022, sea tenido en cuenta lo manifestado en esta excepción. En virtud de lo anterior, es importante recordar que el señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA estaba conduciendo un vehículo sin respetar las señales de tránsito. Razón por la cual, de considerarse procedente una indemnización por los perjuicios deprecados, esta debe ser reducida conforme al porcentaje de participación del señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA en la ocurrencia del accidente, como mínimo en un cincuenta por ciento (50 %).

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

### **EXCEPCIONES FRENTE A LAS PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS INVOCADAS EN LA DEMANDA**

#### **5. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE LA SEÑORA MARÍA ELIZABETH ANDRADE INSUASTY AL NO ACREDITARSE SU CONDICIÓN DE COMPAÑERA PERMANENTE DEL SEÑOR WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA**

En el caso de marras se configura la falta de legitimación en la causa por activa en atención a que el extremo actor no acredita con prueba suficiente la supuesta unión marital de hecho que existe entre la señora MARÍA ELIZABETH ANDRADE INSUASTY y el señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA en el momento de los hechos. Ello por cuanto no se allega ningún documento o medio de prueba que corrobore, así sea sumariamente, el estado civil de ambos demandantes. En ese sentido, debe el honorable despacho proceder a declarar la falta de legitimación en la causa por activa de la señora MARÍA ELIZABETH ANDRADE INSUASTY por los argumentos expuestos.

La legitimación en la causa ha sido definida ampliamente por la jurisprudencia, como aquella titularidad de los derechos de acción y contradicción. El Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 19753, magistrado ponente: Mauricio Fajardo Gómez, ha señalado sobre esta categoría jurídica lo siguiente:

*“(...) La legitimación en la causa por activa hace referencia a la relación sustancial que debe existir entre las partes del proceso y el interés sustancial del litigio, de tal manera que aquella persona que ostenta la titularidad de la relación jurídica material es a quien habilita la ley para actuar procesalmente.*

*Según lo ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación, la falta de legitimación en la causa no constituye una excepción que pueda enervar las pretensiones de la demanda, sino que configura un presupuesto anterior y necesario para que se pueda proferir sentencia, en el entendido de que, si no se encuentra demostrada tal legitimación, el juez no podrá acceder a las pretensiones de la demanda. Si bien la falta de legitimación en la causa se constituye en un presupuesto necesario para proferir sentencia, ello no es óbice para que esa circunstancia alegada a manera de excepción pueda ser resuelta en esta oportunidad procesal, toda vez que, según los dictados del numeral 6 del artículo 180 del CPACA., en el curso de la audiencia inicial, el juez debe resolver acerca de las excepciones previas y sobre las de falta de legitimación en la causa, cosa juzgada, transacción, conciliación y prescripción extintiva (...)”<sup>17</sup> (Subrayado y negrilla fuera de texto).*

Del análisis jurisprudencial señalado y del estudio realizado al acervo probatorio aportado al proceso, se refleja una evidente ausencia de legitimación por activa por parte de la señora MARÍA ELIZABETH ANDRADE INSUASTY, puesto que en ningún momento se observa prueba que acredite la relación de unión marital de hecho con el señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA, que pretende hacer valer. En ese orden de ideas, al no existir prueba idónea en el expediente que acredite el matrimonio o la Unión Marital de Hecho entre ella y el mencionado señor, no es procedente el reconocimiento de ningún emolumento a su nombre.

La Ley 979 de 2005 estableció los mecanismos por los cuales se declaran las uniones maritales de hecho, únicos medios idóneos de prueba para acreditar la condición de compañero permanente, en los siguientes términos:

*“(...) ARTÍCULO 2o. El artículo 4o. de la Ley 54 de 1990, quedará así: Artículo 4o. La existencia de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes, se declarará por cualquiera de los siguientes mecanismos:*

<sup>17</sup> Consejo de Estado. Sección Tercera. Expediente 19753. M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

1. Por escritura pública ante Notario por mutuo consentimiento de los compañeros permanentes.
2. Por Acta de Conciliación suscrita por los compañeros permanentes, en centro legalmente constituido.
3. Por sentencia judicial, mediante los medios ordinarios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento Civil, con conocimiento de los Jueces de Familia de Primera Instancia (...)"

Sin embargo, en este caso, no existe prueba idónea de una unión marital entre la señora MARÍA ELIZABETH ANDRADE INSUASTY y el señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA, ello por cuanto, tal como menciona la norma, no se allega escritura pública de notario, acta de conciliación suscrita por los sujetos o sentencia judicial, por el contrario, no milita ningún documento al respecto. Dicho lo anterior, la jurisprudencia ha sido enfática al señalar que para que exista la unión marital de hecho los supuestos compañeros permanentes debe acreditar tres elementos a saber, comunidad de vida, permanencia y singularidad, tal como se transcribe a continuación:

*"(...) Ha sido constante la jurisprudencia al señalar que son elementos para conformación de la unión marital de hecho una comunidad de vida, permanente y singular, de los cuales ha dicho que; (i) la **comunidad de vida** refiere a esa exteriorización de la voluntad de los integrantes de conformar una familia, manifestado en la convivencia, brindándose respeto, socorro y ayuda mutua, compartiendo metas y asuntos esenciales de la vida, <<(...) esa comunidad de vida debe ser firme, constante y estable, pues lo que el legislador pretende con esta exigencia es relieves que la institución familiar tiene, básicamente, propósitos de durabilidad, de estabilidad y de trascendencia>>, la cual se encuentra integrada por unos elementos <<(...) fácticos, objetivos como la convivencia, la ayuda y el socorro mutuos, las relaciones sexuales y la permanencia, y subjetivos otros, como el ánimo mutuo de permanencia, de unidad y la affectio maritalis (...)>> (ii) la **permanencia**, que refiere a la forma de vida en que una pareja idónea comparte voluntariamente y maritalmente, guiada por un criterio de estabilidad y permanencia, en contraposición de las relaciones esporádicas, temporales u ocasionales y; (iii) la **singularidad** indica que únicamente puede unir a dos personas idóneas, <<atañe con que sea solo esa sin que exista otra de la misma especie, cuestión que impide sostener que la ley colombiana dejó sueltas las amarras para afloraran en abundancia uniones maritales de hecho (...)"<sup>18</sup>*

Es claro entonces que la Corte considera de vital importancia que los sujetos que pretendan alegar la existencia de una unión marital de hecho acrediten la comunidad de vida, la permanencia y la singularidad. En ese sentido, no se probó por ningún medio tal circunstancia. Así pues, no obra al

<sup>18</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia SC4361-2018 de 12 de octubre de 2018. M.P. Margarita Cabello Blanco.

interior del expediente ninguna prueba que acredite que efectivamente la señora MARÍA ELIZABETH ANDRADE INSUASTY y el señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA tenían una comunidad de vida, que esta fuera permanente y singular.

Es menester señalar que tratándose de una relación personal que no le consta a mi mandante, la carga de la prueba está en cabeza del extremo actor por lo cual, debía allegar prueba útil, conducente y pertinente en los términos del artículo 165 del Código General del Proceso que acreditara la relación jurídica que afirman tener. En ese entendido, se evidencia que el material probatorio allegado por los demandantes es deficiente en su cometido de probar la existencia de la unión marital de hecho, por lo tanto, al no acreditarse debe quedar excluido de toda pretensión la señora MARÍA ELIZABETH ANDRADE INSUASTY.

En conclusión, debido a que el extremo actor no aporta prueba que respalde sus dichos y permita acreditar los elementos de la unión marital de hecho, debe tenerse este hecho como no probado y, por lo tanto, debe declarar el juez que la señora MARÍA ELIZABETH ANDRADE INSUASTY no tiene legitimación en la causa por activa pues no prueba la relación jurídica sustancial de la cual parte su reclamación. Por lo tanto, la señora MARÍA ELIZABETH ANDRADE INSUASTY no está legitimada para ejercer la acción que nos ocupa, por no demostrar la relación afectiva que pretende hacer valer en este proceso. Razón por la cual, no es jurídicamente procedente declarar indemnización alguna a su cargo, por los hechos de este litigio.

#### **6. AUSENCIA PROBATORIA Y NO ACREDITACIÓN DE LA CALIDAD DE LA DEMANDANTE CECILIA DEL ROSARIO QUETAMA CUASTUMAL RESPECTO DE SU PARENTESCO CON EL SEÑOR WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA**

Por medio del presente medio exceptivo, tal como se hizo al momento de pronunciarme frente a los hechos de la demanda y las pretensiones, se demuestra que en el proceso no obra ningún medio de prueba tendiente a demostrar el vínculo de consanguinidad entre el lesionado WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA y la demandante CECILIA DEL ROSARIO QUETAMA CUASTUMAL, quien, se afirma en la demanda, es madre del lesionado. Sin embargo, el Registro Civil de Nacimiento allegado demuestra y prueba que la madre de la demandante es una persona que no tenía documento de identificación y ni siquiera se relaciona número de identidad de dicha persona, por lo tanto, a la señora CECILIA DEL ROSARIO QUETAMA CUASTUMAL no le asiste ningún derecho dentro del presente proceso y muchos menos en el eventual y remoto caso de una indemnización.

Así define la Registraduría Nacional del Estado Civil el documento denominado registro civil de nacimiento:

*“(...) La inscripción de una persona en el registro civil de nacimiento permite reconocer su existencia legal e individualizarla con la designación de un nombre y un número único de identificación personal (NUIP). Este registro permite que le sean reconocidos sus derechos y deberes como colombiano, y le permite acceder a los bienes y servicios del Estado (...)”.*

Por su parte, el Decreto 1260 de 1970, sobre el estado civil de una persona, establece que:

*“(...) ARTICULO 1o. <DEFINICIÓN>. El estado civil de una persona es su situación jurídica en la familia y la sociedad, determina su capacidad para ejercer ciertos derechos y contraer ciertas obligaciones, es indivisible, indisponible e imprescriptible, y su asignación corresponde a la ley.*

*ARTICULO 2o. <ORIGEN DEL ESTADO CIVIL>. El estado civil de las personas deriva de los hechos, actos y providencias que lo determinan y de la calificación legal de ellos (...)”.*

La única forma de probar el estado civil de una persona es a través de los mencionados registros civiles, ya sea de nacimiento, matrimonio o defunción. Ahora bien, resulta imperante aportar este tipo de documentos al proceso, pues son el único medio de prueba que permite establecer los vínculos de afinidad que llegaren a tener las partes en el proceso entre sí. Sobre el registro de nacimiento, dice la misma norma:

*“(...) ARTICULO 9o. <REGISTRO DE NACIMIENTO>. El registro de nacimientos se llevará en folios destinados a personas determinadas que se distinguirán con un código o complejo numeral indicativo del orden interno de cada oficina y de la sucesión en que se vaya sentando. Indicarán, también, el número correspondiente a cada persona en el registro o archivo central”.*

*“ARTICULO 11. <CARACTERÍSTICAS DEL REGISTRO DE NACIMIENTO>. El registro de nacimiento de cada persona será único y definitivo. En consecuencia, todos los hechos y actos concernientes al estado civil y a la capacidad de ella, sujetos a registro, deberán inscribirse en el correspondiente folio de la oficina que inscribió el nacimiento, y el folio subsistirá hasta cuando se anote la defunción o la sentencia que declare la muerte presunta por desaparecimiento”.*

*“ARTICULO 44. <INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE NACIMIENTO>. En el registro de nacimientos se inscribirán:*

*1. Los nacimientos que ocurran en el territorio nacional.*

2. Los nacimientos ocurridos en el extranjero, de personas hijas de padre y madre colombianos.

3. Los nacimientos que ocurran en el extranjero, de personas hijas de padre o madre colombianos de nacimiento o por adopción, o de extranjeros residentes en el país, caso de que lo solicite un interesado.

4. Los reconocimientos de hijo natural, legitimaciones, adopciones, alteraciones de la patria potestad, emancipaciones, habilitaciones de edad, matrimonios, capitulaciones matrimoniales, interdicciones judiciales, discernimientos de guarda, rehabilitaciones, nulidades de matrimonio, divorcios, separaciones de cuerpos y de bienes, cambios de nombre, declaraciones de seudónimo, declaraciones de ausencia, defunciones y declaraciones de presunción de muerte, y en general, todos los hechos y actos relacionados con el estado civil y la capacidad de las personas (...).

Ahora, en cuanto al reconocimiento de la paternidad del nacido, también se establece lo siguiente:

*"(...) ARTICULO 58. <RECONOCIMIENTO DE LA PATERNIDAD>. Presente el presunto padre en el despacho del funcionario encargado de llevar el registro civil y enterado del contenido del folio de registro de nacimiento y de la hoja adicional en la que conste la atribución de paternidad, habrá de manifestar si reconoce a la persona allí indicada como hijo natural suyo o rechaza tal imputación.*

*Si el compareciente acepta la paternidad, se procederá a extender la diligencia de reconocimiento en el folio en que se inscribió el nacimiento, con su firma y la del funcionario.*

*En caso de rechazo de la atribución de paternidad, en la hoja adicional se extenderá un acta, con las mismas firmas (...).*

Nótese que, en el caso particular, el apoderado de los demandantes aporta el Registro Civil De Nacimiento de los demandantes, sin embargo, en el registro civil de nacimiento del señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA se observa lo siguiente:

SECCION GENERAL			
6. Primer apellido <b>BENAVIDES = = =</b>	7. Segundo apellido <b>QUETAMA = = =</b>	8. Nombres <b>WILLIAM ORLANDO = = = = =</b>	
9. Masculino o Femenino <b>MASCULINO</b>	10. <input checked="" type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Femenino	11. Fecha de nacimiento <b>30 ABRIL</b>	12. Año <b>1978</b>
13. Lugar de nacimiento <b>COLOMBIA</b>	14. Departamento, Int., o Corri. <b>NARIÑO</b>	15. Municipio <b>PASTO</b>	
SECCION ESPECIFICA			
16. Clínica, hospital, dirección de la casa, vareda, corregimiento, etc., donde ocurrió el nacimiento <b>Cra 20 A # 20=05 PASTO</b>			17. Hora <b>11am</b>
18. Documento presentado—Antecedente (Cert. médico, Acta parroq. etc.) <b>ADICIONAL AL SERIAL 3364942</b>		19. Nombre del profesional que certificó el nacimiento	20. No. licencia
21. Apellidos (de soltera) <b>QUETAMA CUASTUMAL = = = = =</b>		22. Nombres <b>CECILIA DEL ROSARIO = = =</b>	23. Edad (años) <b>18</b>
24. Identificación (clase y número)		25. Nacionalidad <b>COLOMBIANA</b>	26. Profesión u oficio <b>HOGAR</b>
27. Apellidos		28. Nombres	

Como se puede ver, la madre del señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA, es una persona que no tiene número ni documento de identidad personal. Por lo tanto, dentro del proceso no es posible establecer la relación o vínculo de consanguinidad entre CECILIA DEL ROSARIO QUETAMA CUASTUMAL y del señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA, por ende, no le asiste ningún derecho a la referida demandante dentro del proceso de marras, debido a que no se acreditó la calidad en la que actúa.

En conclusión, ninguna de las eventuales y remotas condenas que se profieran dentro del presente proceso podrá ir encaminada o reconocida a favor de la señora CECILIA DEL ROSARIO QUETAMA CUASTUMAL, pues no tiene ningún vínculo de parentesco con el lesionado, es decir, no existe relación alguna entre ella y el señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA y, por lo tanto, no está legitimada para actuar.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

## 7. TASACIÓN INDEBIDA E INJUSTIFICADA DE LOS SUPUESTOS PERJUICIOS MORALES PRETENDIDOS POR LOS DEMANDANTES

Por medio de la presente excepción se pretende demostrar al Honorable Despacho que el extremo procesal activo no acredita, argumenta, explica ni justifica de manera alguna la valoración sobre la tasación de las sumas de dinero pretendidas bajo el concepto de daño moral. Lo anterior, pues únicamente se limita a solicitar un monto a favor de los demandantes, sin que se argumente y/o sustente lo allí pretendido. Por otro lado, las sumas pretendidas bajo este concepto son exageradas y no se encuentran delimitadas ni enmarcadas de acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues en la demanda se solicitan 30 SMLMV para cada uno de los demandantes, sin que se argumente y/o sustente lo allí pretendido. Por otro lado, las sumas pretendidas bajo este concepto son exageradas y no se encuentran delimitadas ni enmarcadas de acuerdo a los lineamientos jurisprudenciales de la Sala Civil de la Corte Suprema

de Justicia, pues se solicitan valores que han sido reconocidos en casos excepcionales a víctimas cuyas lesiones han sido más graves. Mientras que en el caso particular se trata de lesiones de menor gravedad.

Se advierte que, de conformidad con las pretensiones de la demanda, se solicitan las siguientes sumas de dinero:

Para WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA (lesionado): 30 SMLMV  
Para CECILIA DEL ROSARIO QUETAMA CUASTUMAL: 30 SMLMV  
Para JEISON ALEJANDRO BENAVIDES JALVIN : 30 SMLMV  
Para MARÍA ELIZABETH ANDRADE INSUASTY: 30 SMLMV  
Para DAVID FERNANDO BENAVIDES ANDRADE: 30 SMLMV  
Para EMILIANO SEBASTIÁN BENAVIDES ANDRADE: 30 SMLMV

Resulta pertinente recordar que, con relación a la ponderación de los daños morales que pretende la parte actora, si bien la misma se encuentra deferida al recto criterio del fallador, estas deben ser debidamente acreditadas, demostradas y tasadas por quien las pretende, teniendo en cuenta además que, este tipo de perjuicios “(...) se trata de agravios que recaen sobre intereses, bienes o derechos que por su naturaleza extrapatrimonial o inmaterial resultan inasibles e inconmensurables(...)”<sup>19</sup>. Sobre este tipo de perjuicio, la Corte ha reseñado que el mismo no “constituye un «regalo u obsequio»” por el contrario, se encuentra encaminado a “(...) reparar la congoja, impacto directo en el estado anímico espiritual y en la estabilidad emocional de la persona que sufrió la lesión y de sus familiares (...)”<sup>20</sup>, con sujeción a los elementos de convicción y las particularidades de la situación litigiosa. Sin perjuicio de los criterios orientadores de la jurisprudencia, en procura de una verdadera, justa, recta y eficiente impartición de justicia<sup>21</sup>.

Inicialmente, se debe advertir al despacho que existe una desmesurada solicitud de perjuicios morales que, para el año 2023, equivale a \$ 208.800.000, lo cual es a todas luces improcedente, puesto que refleja un evidente ánimo especulativo y una errónea tasación de los perjuicios, en tanto que los mismos resultan exorbitantes según los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte Suprema de Justicia. En efecto, es inviable el reconocimiento del daño moral en la suma pretendida por la parte demandante, por cuanto la tasación propuesta es equivocada y en tal sentido, no hay lugar al reconocimiento de suma alguna por concepto que supere los montos fijados a partir del desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia.

Para ilustrar de forma puntual la manera en que la Corte Suprema de Justicia ha cuantificado este perjuicio, es preciso traer a colación algunos casos particulares. Así pues, en sentencia del 6 de

<sup>19</sup> Sentencia de casación civil del 13 de mayo de 2008, Exp.1997-09327-01.

<sup>20</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 6 de mayo de 2016. Rad: 2004-032 (M.P: Luis Armando Tolosa Villabona)

<sup>21</sup> Ídem

mayo de 2016 con radicación No. 2004-00032-01, la Sala Civil de la Corte analizó el caso de una mujer de 17 años, que a raíz de las lesiones derivadas de un accidente de tránsito debió someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas y verse obligada a usar un catéter que le atravesaba su cabeza, cuello y pecho y que le “restringía la posibilidad de concurrir a sitios controlados por detectores magnéticos, porque estos aparatos descontrolan la válvula; se obstaculiza bañarse en piscinas, realizar actividades deportivas, tener relaciones sentimentales”<sup>22</sup>. En esta ocasión, la Corte reconoció por concepto de daño moral el monto de QUINCE MILLONES DE PESOS (\$ 15.000.000):

*“(…) resulta indudable la aflicción y congoja que a Diana Carolina Beltrán Toscano le produce la secuela dejada por el accidente de marras consistente en «perturbación psíquica de carácter permanente» y «deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanentes», pues es profundamente penoso, mucho más para una dama en la flor de su juventud, ver en su cuerpo cicatrices que antes del insuceso no estaban y ser consciente que sus funciones psicológicas se encuentran alteradas no transitoriamente sino por el resto de sus días, así la estética médica logre arrasarlos, lo cual conlleva al quebrantamiento indiscutible de caros derechos de la personalidad y de la autoestima [...]por tanto, es procedente fijar el monto de la condena por este aspecto en la suma de quince millones de pesos (\$15.000.000) para cada demandante (...)”<sup>23</sup>.*

En otro proceso, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó el pago a la víctima directa de QUINCE MILLONES DE PESOS (\$ 15.000.000) por concepto de daño moral a causa de la amputación de su miembro inferior izquierdo<sup>24</sup>.

Por tanto, es claro el ánimo e intención de lucro de la parte demandante al pretender el reconocimiento de un perjuicio moral sobre \$ 208.800.000 para los demandantes, cuando en casos de mayor gravedad la Corte Suprema de Justicia ha reconocido cifras mucho menores. En virtud de lo anterior, las pretensiones invocadas por la parte demandante evocan un evidente ánimo especulativo.

En atención a los argumentos expuestos, la pretensión de reconocimiento de perjuicios morales en cabeza de la demandante se encuentra totalmente alejada de los criterios normativos y jurisprudenciales que se han sostenido durante años. Lo anterior, al no encontrarse acreditado, en primer lugar, la responsabilidad en cabeza de los demandados y, en segundo lugar, de forma clara y fehaciente los valores pretendidos, ya que sólo se estipulan unos rubros sin indicación de su procedencia. La doctrina ha establecido, en relación a la naturaleza demostrable de los perjuicios morales, lo siguiente:

<sup>22</sup> ídem).

<sup>23</sup> ídem.

<sup>24</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 15 de octubre de 2004. Exp. 6199. M.P. Julio César Valencia Copete.

*“(…) Los perjuicios morales subjetivados, igual que los materiales, deben aparecer demostrados procesalmente. Si bien su cuantificación económica es imposible, dada la naturaleza misma del daño, **lo cierto es que su intensidad es perfectamente demostrable**. La medicina y la psiquiatría contemporáneas pueden dictaminar casi con exactitud el grado y duración del dolor físico y psíquico (…)”<sup>25</sup>. (Negrillas fuera del texto original).*

En conclusión, es claro que la parte demandante, con la solicitud de reconocimiento de este perjuicio, no acredita con ningún medio de prueba los requisitos mínimos necesarios para que sea reconocido este concepto indemnizatorio, toda vez que no hay congruencia entre lo pretendido, lo que pretende probar la parte demandante y los lineamientos que al respecto ha emitido la Sala Civil de la Corte. Además, en el caso particular se trata de lesiones de menor gravedad. Por otro lado, sus peticiones son abiertamente exageradas, inconducentes e injustificadas por cuanto solicita el reconocimiento de sumas de dinero que han sido concedidas excepcionalmente en casos de mayor gravedad. Recordemos el caso de la víctima a la que le tuvieron que amputar su miembro inferior izquierdo y que la Corte reconoció la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS (\$ 15.000.000) por concepto de daño moral, mientras que en el caso particular se trata de lesiones de menor gravedad, pero se pretenden \$ 208.800.000 para los demandantes.

Por todo lo anterior, solicito declarar probada esta excepción.

#### **8. IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO DEL SUPUESTO DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, ASÍ COMO SU CUANTIFICACIÓN INDEBIDA E INJUSTIFICADA Y PRETENDIDA POR EL SEÑOR WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA**

Por medio de la presente, se demostrará que las supuestas lesiones que aparentemente padeció WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA no afectaron ni cambiaron de manera alguna las actividades, rutinas ni la forma de vida que tenía después de los hechos ocurridos el 27 de mayo de 2022. Es decir, su existencia y su vida continuó con total normalidad y sin ningún tipo de afectación por lo ocurrido en dicha fecha. Además, dentro del plenario no obra ningún medio de prueba que permita entrever alteraciones, cambios o mutaciones en su comportamiento en relación con los demás y consigo mismo. De todas maneras, la cuantificación que por este concepto solicita la parte demandante es exorbitante pues, como veremos más adelante, desatiende los baremos jurisprudenciales que, sobre el daño a la vida de relación, se ha referido la Corte Suprema de Justicia.

Se advierte que, de conformidad con las pretensiones de la demanda se solicitan las siguientes sumas de dinero:

<sup>25</sup> Tamayo, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo II. Prueba de los Perjuicios Morales Subjetivados. Pág. 508.

Para WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA (lesionado): 30 SMLMV

En la actualidad, como es bien sabido, el daño a la vida de relación pretende reparar el mismo perjuicio sufrido en la órbita física y psicológica de la víctima que le impide realizar aquellas actividades agradables a la existencia, sin que este tipo de perjuicio tenga por vocación reconocerse en todos los casos. En efecto, pues hoy el mismo se ha admitido excepcionalmente cuando se trata de lesiones graves, que afecten la órbita de desenvolvimiento del lesionado y sólo para ser indemnizado a la víctima directa, por estar asociado estrictamente con lesiones físicas o anatómicas. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, ha delimitado el concepto de daño a la vida de relación y lo diferencia del daño moral, así:

*“(...) Como se observa, a diferencia del daño moral, que corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo, el daño a la vida de relación constituye una afectación a la esfera exterior de la persona, que puede verse alterada en mayor o menor grado a causa de una lesión inflingida (sic) a los bienes de la personalidad o a otro tipo de intereses jurídicos, en desmedro de lo que la Corte en su momento denominó “actividad social no patrimonial (...)”.*

*Dicho con otras palabras, esta especie de perjuicio puede evidenciarse en la disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la pérdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como también en la privación que padece el afectado para desplegar las más elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad. Podría decirse que quien sufre un daño a la vida de relación se ve forzado a llevar una existencia en condiciones más complicadas o exigentes que los demás, comoquiera que debe enfrentar circunstancias y barreras anormales, a causa de las cuales hasta lo más simple se puede tornar difícil. Por lo mismo, recalca la Corte, la calidad de vida se ve reducida, a paso que las posibilidades, opciones, proyectos y aspiraciones desaparecen definitivamente o su nivel de dificultad aumenta considerablemente. Es así como de un momento a otro la víctima encontrará injustificadamente en su camino obstáculos, preocupaciones y vicisitudes que antes no tenía, lo que cierra o entorpece su acceso a la cultura, al placer, a la comunicación, al entretenimiento, a la ciencia, al desarrollo y, en fin, a todo lo que supone una existencia normal, con las correlativas insatisfacciones, frustraciones y profundo malestar (...)”<sup>26</sup>.*

Para conocer a mayor profundidad lo que ha establecido la Corte Suprema de Justicia en algunos casos en los que excepcionalmente se reconoció este concepto indemnizatorio, es preciso señalar

<sup>26</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de mayo de 2008, radicado 11001-3103- 006-1997-09327-01.

el siguiente caso: la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó el pago de 50 SMLMV para la víctima directa por los perjuicios causados con **la pérdida de la capacidad de locomoción permanente**, como consecuencia de accidente de tránsito por exceso de velocidad del vehículo en el que iba de pasajera<sup>27</sup>. Nótese que en dicho caso la víctima perdió su movilidad de forma definitiva, en cambio en el presente caso no. En otro penoso caso, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó el pago de \$ 30.000.000 a la víctima directa **por los perjuicios ocasionados por la extracción de su ojo izquierdo**.

Obsérvese que, en los casos antes referidos, la víctima quedó con secuelas para toda la vida y que afectaron directamente su interacción con el mundo exterior. Las secuelas fueron de tal magnitud, que era de esperarse que su actitud y su forma de ser cambiara abruptamente tras los hechos que motivaron cada una de las anteriores demandas. En el caso particular que nos cita al presente proceso, no se vislumbra un medio de prueba que, al menos sumariamente, permita acreditar que el señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA tuvo consecuencias permanentes en su corporeidad que afectaron directamente su estilo de vida, su relación con los demás o consigo mismo.

Es indispensable reiterar que el caso particular se trata de lesiones de menor gravedad. Se está solicitando una suma de dinero abiertamente improcedente por cuanto no se observa ningún detrimento de tipo personal que se avizore en el demandante, tampoco una secuela que haya impedido continuar con su vida de forma normal o con regularidad a la que llevaban antes de los hechos que nos citan al proceso. Por lo tanto, la pretensión por este concepto no se encuentra probada, es desbordada y no se ajusta a los criterios que sobre este tipo de perjuicio ha establecido la jurisprudencia, no siendo procedente su reconocimiento, para lo cual nos remitimos a la argumentación expuesta en el literal anterior.

En conclusión, el reconocimiento de este perjuicio para el señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA es improcedente, pues no se encuentra plenamente acreditado dentro del presente proceso. Lo anterior, por cuanto el mismo sólo se concede en casos especialísimos a víctimas cuyas lesiones sean de tal gravedad que impacten directamente el estilo de vida de la persona. Sin embargo, el caso particular se trata de lesiones de menor gravedad. Además, como se expuso, es exagerado el monto pretendido con relación al presunto daño sufrido, lo debidamente demostrado en el proceso y el baremo jurisprudencial que al respecto ha emitido reiteradamente el órgano de cierre en la jurisdicción ordinaria especialidad civil.

Por todo lo anterior, solicito declarar probada esta excepción.

---

<sup>27</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 12 de noviembre de 2019, radicado 73001-31-03-002-2009-00114-01.

## 9. IMPROCEDENCIA, FALTA DE MEDIO DE PRUEBA E INDEBIDA CUANTIFICACIÓN DEL PERJUICIOS DE DAÑO EMERGENTE SOLICITADO

Mediante la presente excepción se demostrará al despacho que al demandante no se le pueden reconocer el concepto indemnizatorio por daño emergente que solicita en la demanda. Lo anterior, toda vez que: **(i)** La minuta de contrato adjunta no es el medio de prueba idóneo para acreditar la titularidad de dominio de un bien sujeto a registro, como un vehículo; **(ii)** La declaración ante Notaría del señor Nelson Alirio Tepú Díaz de ninguna manera prueba la posesión del vehículo de placa LUD 433 en cabeza del demandante; **(iii)** Obra un certificado de tradición del vehículo de placa LUD 433 en el que se observa que su propietario actual es el señor Jhoan Sebastián Beltrán Mallama, persona completamente distinta al demandante; **(iv)** Si bien se afirma que desde el 9 de abril de 2022 el demandante ostenta la posesión del vehículo, ni siquiera ha transcurrido el tiempo necesario para adquirir el bien por prescripción ordinaria ni extraordinaria adquisitiva del dominio; **(v)** No obra ninguna sentencia mediante la cual se adjudique el vehículo al demandante por prescripción adquisitiva de dominio; **(vi)** No obra ninguna sentencia sobre un proceso verbal por incumplimiento del supuesto contrato de compraventa, al no transferir el derecho de dominio; **(vii)** El documento de entrega definitiva del referido vehículo suscrito por la Fiscalía tampoco tiene la virtualidad de determinar la posesión del automotor; **(viii)** Una vez realizada la búsqueda en el RUNT con la placa LUD 433 y la cédula del demandante, esto es, 98400238, arroja que el referido carro no es de propiedad del demandante; **(ix)** No se prueba de ninguna manera los actos de señor y dueño ejercidos por parte del demandante sobre el automotor de placa LUD 433; **(x)** Aunado a todo lo anterior, los documentos no tienen validez probatoria hasta tanto no sean ratificados por las personas que supuestamente los suscribieron.

Frente al daño emergente, es claro que la parte Demandante tenía entre sus mandatos como parte actora, toda la carga probatoria sobre los perjuicios deprecados en la demanda. Por lo tanto, la cuantía de los daños por los cuales se está exigiendo una indemnización deberán estar claramente probados a través de los medios idóneos que la ley consagra en estos casos. La honorable Corte Suprema de Justicia ha definido el daño emergente en los siguientes términos:

*“(…) De manera, **que el daño emergente comprende la pérdida misma de elementos patrimoniales, las erogaciones que hayan sido menester o que en el futuro sean necesarios y el advenimiento de pasivo, causados por los hechos de los cuales se trata de deducirse la responsabilidad.***

*Dicho en forma breve y precisa, **el daño emergente empobrece y disminuye el patrimonio, pues se trata de la sustracción de un valor que ya existía en el patrimonio del damnificado;** en cambio, el lucro cesante tiende a aumentarlo, corresponde a nuevas utilidades que la víctima presumiblemente hubiera conseguido*

*de no haber sucedido el hecho ilícito o el incumplimiento (...)*<sup>28</sup> (Énfasis propio).

Con fundamento en lo anterior, podemos concluir que el daño emergente comprende la pérdida de elementos patrimoniales, causada por los hechos de los cuales se trata de deducirse la responsabilidad. Lo primero que debe manifestarse frente al supuesto daño emergente que pretende reclamar la demandante a través del presente proceso es que existe un completa orfandad probatoria al respecto. Nótese que la parte activa del litigio simplemente relaciona dineros de lo que pretende por medio de la presente Litis, pero no allega medios de prueba que los respalden, es decir, contrariando los fundamentos mismos del concepto indemnizatorio del daño emergente, como se puede observar:

**A. Un contrato no es prueba del derecho de dominio.** La parte demandante pretende demostrar con una minuta de contrato de compraventa que supuestamente el demandante compró el vehículo de placa LUD 433, sin embargo, dicho medio de prueba es completamente insuficiente, por cuanto, en primera medida, es una minuta escrita a mano lo que pone en duda su veracidad y autenticidad, por otro lado, tal documento no acredita que en el presente caso se cumplió con la teoría del título y el modo.

**B. La declaración extraprocesal no es prueba del derecho de posesión.** Dentro del libelo milita una declaración del señor Nelson Alirio Tepú Díaz por medio de la cual se pretende acreditar que el demandante es poseedor del vehículo de placa LUD 433, sin embargo, llama poderosamente la atención que dicha declaración es demasiado precisa, con demasiados detalles, para que hubiera sido libre y espontánea, pues describe a la perfección el vehículo de placa LUD 433:

**SEGUNDO:** Bajo la gravedad del juramento y en honor a la verdad declaro que conozco de vista, trato y comunicación desde hace aproximadamente 20 años al señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA, identificado con cédula de ciudadanía No. 98.400.238 expedida en Pasto, por lo que puedo dar fe que desde el mes de abril de 2022 adquirió el vehículo de las siguientes características:

- Clase de vehículo: AUTOMÓVIL
- Marca: DAEWOO
- Servicio: PARTICULAR
- Placas: LUD-433
- Modelo: 2001
- Color: PLATEADO

También es precisa al indicar sobre la compra del automotor desde abril de 2022:

<sup>28</sup>Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 07 de diciembre de 2017. M.P. Margarita Cabello Blanco. SC20448-2017.

**TERCERO:** Declaro WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA compro el vehículo antes mencionado, el cual desde el momento en que se lo entregaron lo utilizó para transportarse a sus diligencias personales y trasladarse a su trabajo.

**CUARTO:** Declaro WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA desde el mes de abril de 2022, ejerce y ostenta la sana e ininterrumpida posesión y tenencia del vehículo anteriormente descrito.

Por lo anterior, es evidente que la declaración del señor Nelson Alirio Tepú Díaz no fue libre, voluntaria y espontánea, sino que estuvo permeada por el mismo demandante, suministrando los datos que debía mencionar el declarante.

**C. El certificado de tradición describe a otro propietario.** El señor Jhoan Sebastián Beltrán Mallama es quien figura como propietario inscrito del vehículo de placa LUD 433, es decir, persona completamente diferente a los demandantes en el presente proceso:

**CERTIFICADO DE TRADICION PLACA: LUD433**

Certificamos que en esta Entidad reposa el Historial del Vehículo con los siguientes datos:

PLACA	LUD433	CILINDRAJE	1498	REGRABADO
CLASE VEHICULO	AUTOMOVIL	NUMERO MOTOR	A15SMS344204B	NO
TIPO SERVICIO	PARTICULAR	NUMERO SERIE	KLATF48YEB563970	NO
MARCA	DAEWOO	NUMERO CHASIS	KLATF48YEB563970	NO
LINEA	LANOS SA	NUMERO MANIFIESTO	05040006624	
MODELO	2001	FECHA MANIFIESTO	07/06/2000	
COLOR	PLATEADO	ADUANA	--	
CARROCERIA	HATCH BACK	ESTADO VEHICULO	ACTIVO	
NRO PUERTAS	5	EMPRESA	NO REGISTRA	
CAP. CARGA	--			
PASAJEROS	5			

**PROPIETARIO(S) ACTUAL(ES) Y ANTERIORES DEL VEHICULO**

Propietario	Identificación	Fecha Propiedad	Porcentaje	Propietario Actual
JHOAN SEBASTIAN BELTRAN MALLAMA	1081283597	08/04/2022	100	SI

**D. No se ha adquirido el vehículo por usucapión.** Como se afirma en los hechos de la demanda y sin reconocer que sea cierto, el vehículo fue supuestamente adquirido en abril de 2022, pero nunca se hizo el traspaso o la tradición del mismo. Por lo tanto, aunque es evidente que el demandante no es el propietario inscrito del carro, tampoco ha transcurrido el tiempo necesario para adquirir el bien por prescripción adquisitiva ordinaria de dominio que, en el caso de muebles con justo título, es de 3 años.

**E. No existe proceso ni sentencia de pertenencia.** En relación con lo anterior, no se allegó constancia de que actualmente curse un proceso verbal de pertenencia para adquirir el bien por prescripción, tampoco se allega sentencia en firme que así lo declare.

**F. No existe proceso ni sentencia por incumplimiento contractual.** A pesar de que el vehículo fue supuestamente comprado en abril de 2022 y que es evidente que el vendedor incumplió con una de sus obligaciones, como lo es el traspaso jurídico del automotor, no obra ninguna constancia de un proceso iniciado en su contra, tampoco se allega sentencia en firme que así lo declare.

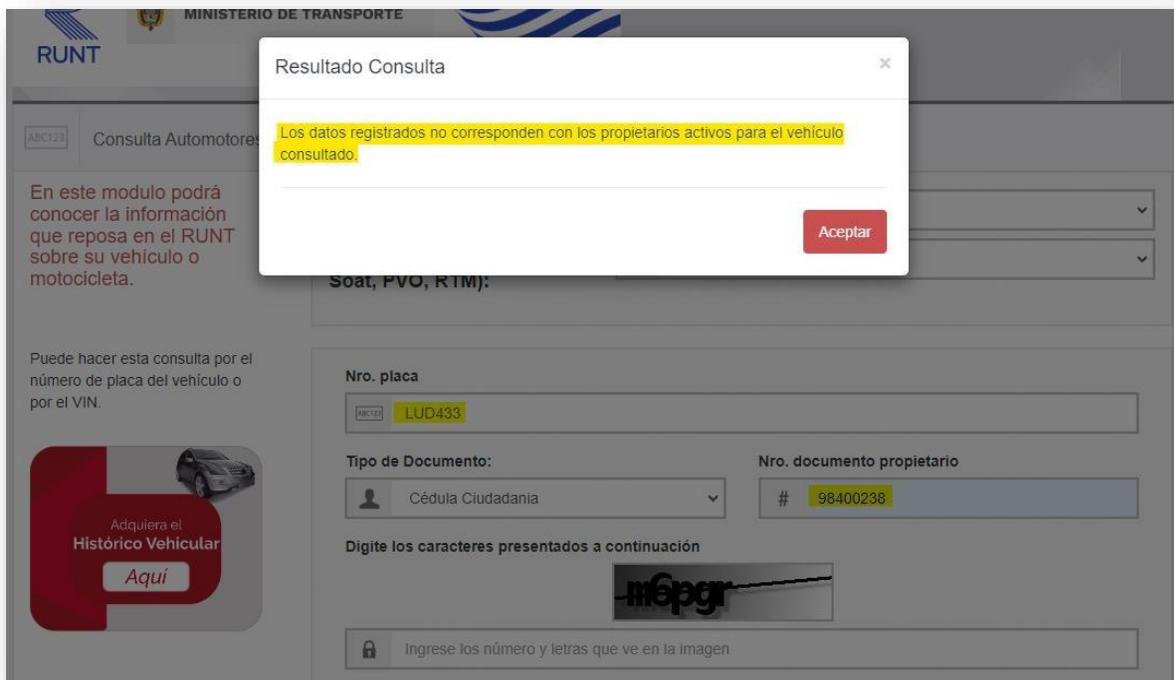
**G. La entrega definitiva del carro no es indicativo de la posesión.** Inicialmente se debe advertir que el documento mediante el cual la Fiscalía General de la Nación ordena entregar de forma definitiva un vehículo no es, de ninguna forma, válido para certificar la situación jurídica de un automotor:

Cordial Saludo:

Para su cumplimiento me permito comunicarle a Usted, que este Despacho ordenó la ENTREGA DEFINITIVA del siguiente rodante, al señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA, identificado con la C.C.No. 98.400.238, en su condición de POSEEDOR, vehículo vinculado al asunto de la referencia, automotor de las siguientes características:

Aunado a lo anterior, la entrega definitiva de un vehículo se puede realizar al propietario o al conductor del mismo al momento del accidente.

**H. En el RUNT no figura el demandante como propietario.** Una vez realizada la búsqueda en el RUNT con la placa LUD 433 y la cédula del demandante, esto es, 98400238, arroja que el referido carro no es de propiedad del demandante:



I. **No se prueban los actos de señor y dueño del supuesto poseedor.** A pesar de que en múltiples apartes de la demanda se afirma que el demandante es poseedor del vehículo de placa LUD 433, lo cierto es que no se acredita bajo ningún medio de prueba tal circunstancia, no se adjuntan recibos de pago de impuestos del carro por parte del demandante, tampoco la compra de seguros para amparar el automotor, facturas por compra de repuestos o mantenimiento del velocípedo, es decir, no se observan los actos del supuesto poseedor del carro.

En ese orden de ideas, y de acuerdo a lo desarrollado por la Corte Suprema de Justicia en donde se ha establecido que, para la procedencia de reconocimiento de perjuicios a título de daño emergente, es necesario que el reclamante demuestre mediante prueba suficiente que se trata de perjuicios ciertos y no hipotéticos. Lo que no sucede en el caso en concreto, en tanto que la parte demandante solicita reconocimiento de sumas de dinero a título de daño emergente, sin que pruebe la causación de dichos perjuicios. Carga que le asiste por ser el reclamante del daño, según los términos jurisprudenciales de la Corte. Bajo esta misma línea, en otro pronunciamiento también ha indicado que la existencia de los perjuicios en ningún escenario se puede presumir, tal y como se observa a continuación:

*“(...) aun cuando en la acción de incumplimiento contractual es dable reclamar el reconocimiento de los perjuicios, en su doble connotación de daño emergente y lucro cesante, no lo es menos que para ello resulta ineludible que el perjuicio reclamado tenga como causa eficiente aquel incumplimiento, **y que los mismos sean ciertos y concretos y no meramente hipotéticos o eventuales, teniendo el reclamante la carga de su demostración,** como ha tenido oportunidad de indicarlo, de manera*

*reiterada (...)*<sup>29</sup> (Negrita y Subrayado fuera del texto original)

Bajo esta misma línea, en otro pronunciamiento también ha indicado que la existencia de los perjuicios en ningún escenario se puede presumir, tal y como se observa a continuación: “(...) Ya bien lo dijo esta Corte en los albores del siglo XX, al afirmar que “(...) la existencia de perjuicios no se presume en ningún caso; [pues] no hay disposición legal que establezca tal presunción (...)”<sup>30</sup> (Subrayado fuera del texto original).

Así, en el expediente no se encuentran pruebas pertinentes y útiles que respalden las erogaciones mencionadas en estos conceptos, por lo que se debe observar que la demanda no cumple con la carga probatoria necesaria para demostrar el daño emergente de manera certera y conducente. Según la jurisprudencia, quien afirma un hecho tiene la obligación de probarlo. Por lo tanto, la parte que demanda un derecho debe alegar y demostrar los hechos que lo fundamentan. Es absolutamente imperativo que se presenten pruebas procesales utilizando los medios de convicción regulares y oportunamente incorporados al expediente. No se puede otorgar a nadie el privilegio de que su mera afirmación sea considerada prueba suficiente de lo que sostiene. Por lo tanto, la falta de pruebas pertinentes y útiles en el expediente impide el reconocimiento de las erogaciones reclamadas, y la demanda, al no cumplir con la carga probatoria requerida, no puede prosperar.

En conclusión, es claro que los demandantes tenían entre sus mandatos como parte actora, toda la carga probatoria sobre los perjuicios deprecados en la demanda. Por lo tanto, cada uno de los daños por los cuales está exigiendo una indemnización deberán estar claramente probados a través de los medios idóneos que la Ley consagra en estos casos. Lo que no sucede en el presente toda vez que se solicita un daño emergente bajo una completa carencia de medios de prueba.

Por todo lo expuesto, solicito declarar debidamente probada esta excepción.

## **10. IMPROCEDENCIA, FALTA DE MEDIO DE PRUEBA E INDEBIDA CUANTIFICACIÓN DEL PERJUICIO DE LUCRO CESANTE SOLICITADO**

Sin perjuicio de las consideraciones anteriores, se propone esta excepción a fin de poner presente al despacho que son improcedentes todas las acciones tendientes a obtener el reconocimiento de perjuicios en la modalidad de lucro cesante, comoquiera que los supuestos de orden fáctico y jurídico no permiten que la pretensión que se solicita bajo esta modalidad pueda configurarse. En efecto, a través del escrito introductorio se advertiré que esta pretensión es a todas luces improcedente, pues: **(i)** Revisado el RUAF – SISPRO, se observa que el demandante únicamente

<sup>29</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 15 de febrero de 2018. MP. Margarita Cabello Blanco. EXP: 2007-0299

<sup>30</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 12 de junio de 2018. MP Luis Armando Tolosa Villabona. EXP: 2011-0736.

está afiliado en salud bajo el régimen subsidiado; **(ii)** La página del ADRES confirma que el demandante está afiliado en salud bajo el régimen subsidiado; **(iii)** Quiere decir todo lo anterior que el señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA nunca ha trabajado, ni ha generado ingresos, por lo tanto, los hechos del 27 de mayo de 2022 no afectaron en nada las condiciones económicas que antes tenía el demandante.

El lucro cesante ha sido entendido como una categoría de los perjuicios materiales de naturaleza económica y de contenido pecuniario. Es decir, que puede cuantificarse en una suma de dinero y que consiste en la afectación o menoscabo de un derecho material o patrimonial, reflejado en la ganancia o ingreso que se ha dejado de percibir y que no ingresará al patrimonio de la persona. En otras palabras, se deja de recibir cuando se sufre un daño y puede ser percibido a título de indemnización por las víctimas directas o indirectas cuando se imputa al causante del perjuicio la obligación de reparar.

No obstante, para indemnizar un daño, además de su existencia cierta, actual o futura, es necesaria su plena demostración en el proceso con elementos probatorios fidedignos e idóneos, como lo son aquellos medios permitidos en el ordenamiento jurídico. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente:

*“(...) en cuanto perjuicio, **el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual.** (...) Vale decir que el **lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afianza en una situación real, existente al momento del evento dañoso, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente** (...) Por último están todos aquellos “sueños de ganancia”, como suele calificarlos la doctrina especializada, que no son más que **conjeturas o eventuales perjuicios que tienen como apoyatura meras hipótesis, sin anclaje en la realidad que rodea, la causación del daño, los cuales, por obvias razones, no son indemnizables**”<sup>31</sup>. (Subrayado y negrilla fuera del texto original).*

Así, resulta evidente que para reconocer la indemnización del lucro cesante es necesario, de un lado, estar en presencia de una alta probabilidad de que la ganancia esperada iba a obtenerse y de otro, que sea susceptible de evaluarse concretamente. Sin que ninguna de esas deducciones pueda estar soportada en simples suposiciones o conjeturas, porque de ser así, se estaría en frente de una utilidad meramente hipotética o eventual. De manera que el lucro cesante solo reconocerá cuando obren pruebas suficientes que acrediten que efectivamente la víctima dejó de percibir los ingresos o perdió una posibilidad cierta de percibirlos. En reciente pronunciamiento la Corte

<sup>31</sup> Corte Suprema de Justicia. Sentencia Rad. 2000-01141 del 24 de junio de 2008.

Suprema de Justicia manifestó literalmente lo siguiente

*“(…) Esta tipología de daño patrimonial corresponde a la ganancia esperada, de la que se ve privada la víctima como consecuencia del hecho dañoso padecido; desde luego, **a condición de que no sea sólo hipotética, sino cierta y determinada o determinable**, y se integra por «todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirían luego, con el mismo fundamento de hecho», según lo explicó esta Corporación en CSJ SC, 28 jun. 2000, rad. 5348, reiterada en CSJ SC16690-2016, 17 nov (…)”*

Por el mismo sendero, en sentencia CSJ SC11575-2015, 31 ago., la Sala enfatizó que la reparación del lucro cesante

*«(…) **resulta viable en cuanto el expediente registre prueba concluyente y demostrativa de la verdadera entidad y extensión cuantitativa del mismo. En caso contrario, se impone rechazar por principio conclusiones dudosas o contingentes acerca de las ganancias que se dejaron de obtener apoyadas tales conclusiones en simples esperanzas, expresadas estas en ilusorios cálculos que no pasan de ser especulación teórica, y no en probabilidades objetivas demostradas con el rigor debido**»(…)»<sup>32</sup> (Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

En el caso concreto, se tiene que la parte actora pretende el reconocimiento de sumas exageradas e infundadas, por concepto de lucro cesante, pues como se observa:

**A. No hay prueba de la actividad laboral o económica.** El señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA nunca ha tenido o tiene un trabajo formal y, por lo tanto, lo ocurrido el 27 de mayo de 2022 no tuvo ninguna injerencia ni repercusión en el aspecto laboral y económico del demandante, como se observa en la base de datos pública SISPRO-RUAF, el demandante está afiliado en el régimen subsidiado, pero en el régimen de pensión, riesgos laborales y cesantías ni siquiera se han hecho reportes de afiliación:

<sup>32</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. SC4966-2019. Expediente 2011-00298. M.P. Luis Alonso Rico Puerta.

INFORMACIÓN BÁSICA						Fecha de Corte:	2023-06-30
Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo		
CC 98400238	WILLIAM	ORLANDO	BENAVIDES	QUETAMA	M		
AFILIACIÓN A SALUD						Fecha de Corte:	2023-06-30
Administradora	Régimen	Fecha Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento -> Municipio		
EMSSANAR S.A.S.	Subsidiado	10/08/2002	Activo	CABEZA DE FAMILIA	PASTO		
AFILIACIÓN A PENSIONES						Fecha de Corte:	2023-06-30
No se han reportado afiliaciones para esta persona							
AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES						Fecha de Corte:	2023-06-30
No se han reportado afiliaciones para esta persona							
AFILIACIÓN A COMPENSACIÓN FAMILIAR						Fecha de Corte:	2023-06-30
Administradora CF	Fecha de Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Miembro de la Población Cubierta	Tipo de Afiliado	Municipio Labora		
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE NARIÑO	2018-11-23	Activo	Cónyuge o Compañero (a) permanente		Nariño- PASTO		
AFILIACIÓN A CESANTIAS						Fecha de Corte:	2023-06-30
No se han reportado afiliaciones para esta persona							

**B. El demandante sólo está afiliado en salud, en el régimen subsidiado.** En igual sentido, la página del ADRES confirma que el demandante está afiliado en salud bajo el régimen subsidiado:

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES					
Información de Afiliados en la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud					
Resultados de la consulta					
Información Básica del Afiliado :					
COLUMNAS	DATOS				
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC				
NÚMERO DE IDENTIFICACION	98400238				
NOMBRES	WILLIAM ORLANDO				
APELLIDOS	BENAVIDES QUETAMA				
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**				
DEPARTAMENTO	NARIÑO				
MUNICIPIO	PASTO				
Datos de afiliación :					
ESTADO	ENTIDAD	RÉGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	EMSSANAR S.A.S.	SUBSIDIADO	10/08/2002	31/12/2999	CABEZA DE FAMILIA

Quiere decir todo lo anterior que el señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA nunca ha trabajado, ni ha generado ingresos, por lo tanto, los hechos más adelante descritos no afectaron en nada las condiciones económicas que antes tenía el demandante.

En este orden de ideas, es claro que en ningún caso procede el reconocimiento solicitado por la parte demandante, toda vez que los supuestos perjuicios en los que se fundamentan las pretensiones de la demanda fueron calculados, estimados o valorados de forma completamente equivocada. De modo que, siguiendo los derroteros jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, ante la ausencia de certeza del lucro, es decir, la existencia real, tangible y no meramente hipotética o eventual, es improcedente el reconocimiento de indemnización por esta tipología de perjuicios. En tal virtud, ante la ausencia de prueba del lucro, claramente deberá denegarse totalmente esta pretensión incluida en la demanda.

En este orden de ideas, es claro que en ningún caso procede el reconocimiento solicitado por la

parte demandante, toda vez que los supuestos perjuicios en los que se fundamentan las pretensiones de la demanda fueron calculados, estimados o valorados de forma completamente equivocada. De modo que, siguiendo los derroteros jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia, ante la ausencia de certeza del lucro, es decir, la existencia real, tangible y no meramente hipotética o eventual, es improcedente el reconocimiento de indemnización por esta tipología de perjuicios. En tal virtud, ante la ausencia de prueba del lucro, claramente deberá denegarse totalmente esta pretensión incluida en la demanda.

Por todo lo expuesto, solicito declarar debidamente probada esta excepción.

### **EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE AL CONTRATO DE SEGURO**

#### **11. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR A CARGO DE SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. POR LA NO REALIZACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE RCE No. 1000272 NI LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL C.CO.**

Es necesario aclarar que, para que nazca a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador, es requisito que el solicitante del amparo demuestre tanto la realización del riesgo asegurado en la póliza de RCE No. 1000272, como también la cuantía de la pérdida. En tal virtud, si no se prueban estos dos elementos (la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida) la prestación condicional de la aseguradora no nace a la vida jurídica y no podrá hacerse efectiva la póliza. Dado que en el presente caso no se demostró la realización del riesgo asegurado, es decir, la responsabilidad civil extracontractual del asegurado porque, en primer lugar, no se demostró un nexo de causalidad entre las conductas de los demandados y el daño alegado por los demandantes, toda vez que, como se dijo antes, se configura una completa ausencia de medios de prueba que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos del 27 de mayo de 2022, es claro que no nació obligación de indemnizar por parte de los demandados.

Así entonces, para efectos de solicitudes de indemnización por los riesgos amparados, la carga probatoria gravita sobre la parte demandante. En ese sentido, el artículo 1077 del Código de Comercio, estableció:

**“(…) ARTÍCULO 1077. <CARGA DE LA PRUEBA>. *Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso* (…).”** (subrayado y negrilla fuera del texto original)

El cumplimiento de tal carga probatoria respecto de la ocurrencia del siniestro, es fundamental para que se haga exigible la obligación condicional derivada del contrato de seguro, tal como lo ha

indicado doctrina respetada sobre el tema:

*“(...) Es asunto averiguado que en virtud del negocio asegurativo, el asegurador contrae una obligación condicional que el artículo 1045 del código de comercio califica como elemento esencial del contrato, cuyo objeto se concreta a pagar la indemnización cuando se realice el riesgo asegurado. Consecuente con esta concepción, el artículo 1054 de dicho estatuto puntualiza que la verificación del riesgo -como suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador- “da origen a la obligación del asegurado” (se resalta), lo que significa que es en ese momento en el que nace la deuda y, al mismo tiempo, se torna exigible (...)”*

*“(...) Luego la obligación del asegurador nace cuando el riesgo asegurado se materializa, y cual si fuera poco, emerge pura y simple.*

*Pero hay más. Aunque dicha obligación es exigible desde el momento en que ocurrió el siniestro, **el asegurador, ello es medular, no está obligado a efectuar el pago hasta tanto el asegurado o beneficiario le demuestre que el riesgo se realizó y cuál fue la cuantía de su pérdida.** (...) Por eso el artículo 1080 del Código de Comercio establece que “el asegurador estará obligado a efectuar el pago...[cuando] el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077”. Dicho en breve, el asegurador sabe que tiene un deber de prestación, pero también sabe que mientras el acreedor no cumpla con una carga, no tendrá que pagar (...)”*

*“(...) Se dirá que el asegurado puede acudir al proceso declarativo, y es cierto; pero aunque la obligación haya nacido y sea exigible, la pretensión fracasará si no se atiende la carga prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio, porque sin el cumplimiento de ella el asegurador no debe “efectuar el pago” (C. de CO., art. 1080) (...)”<sup>33</sup> (Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

De lo anterior, se infiere que, en todo tipo de seguros, cuando el asegurado quiera hacer efectiva la garantía deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y de ser necesario, también deberá demostrar la cuantía de la pérdida. Para el caso en estudio, debe señalarse como primera medida que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba consistente en demostrar la realización del riesgo asegurado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1072 del Código de Comercio. Según las pruebas documentales obrantes en el plenario, no se han probado estos factores, por lo que, en ese sentido, no ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador.

<sup>33</sup> ÁLVAREZ GÓMEZ Marco Antonio. “Ensayos sobre el Código General del Proceso. Volumen I. Hipoteca, Fiducia mercantil, Prescripción, Seguros, Filiación, Partición de bienes en vida y otras cuestiones sobre obligaciones y contratos”. Segunda Edición. Editorial Temis, Bogotá, 2018. Pág. 121-125.

Sin perjuicio de las excepciones anteriores, se formula esta de conformidad con lo estipulado en las condiciones específicas la póliza No. 1000272, toda vez que de la mera lectura podemos concluir que el riesgo asegurado no se realizó. El amparo de responsabilidad civil extracontractual que se pretende afectar se concertó en los siguientes términos:

**CLÁUSULA 1. - OBJETO DEL SEGURO.**

1.1. EL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO TIENE POR OBJETO INDEMNIZAR O REEMBOLSAR AL ASEGURADO LAS SUMAS POR LAS CUALES SEA CIVILMENTE RESPONSABLE, MEDIANTE SENTENCIA JUDICIAL DEBIDAMENTE EJECUTORIADA O MEDIANTE ACUERDO O TRANSACCIÓN AUTORIZADA DE MODO EXPRESO POR SBS COLOMBIA, POR HECHOS EN QUE INCURRA EL ASEGURADO A CONSECUENCIA DE UN ACCIDENTE O SERIE DE ACCIDENTES EMANADOS DE UN SOLO EVENTO SÚBITO E IMPREVISTO OCASIONADO CON EL VEHÍCULO, DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE SEGURO, QUE CONSTITUYA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN CABEZA DEL ASEGURADO, SEGÚN APAREZCA CLARAMENTE DETERMINADO EN EL "CUADRO DE DECLARACIONES" DE LA PRESENTE PÓLIZA, DERIVADA DEL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, ASÍ:

**1.1.1. RESPONSABILIDAD CIVIL  
EXTRA CONTRACTUAL:**

MUERTE, LESIONES PERSONALES Y/O DAÑOS EN LOS BIENES MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS NO TRANSPORTADOS.

En este orden de cosas, mediante el referido contrato de seguro, en virtud de la cual se vinculó a mi procurada al presente litigio, la aseguradora cubre la responsabilidad civil extracontractual atribuible al asegurado nombrado en la carátula de la póliza cuando este sea civilmente responsable de acuerdo con la legislación colombiana y a los términos, estipulaciones, excepciones y limitaciones contempladas en la póliza. Sin embargo, en este caso encontramos que tal riesgo no se estructuró, pues de acuerdo a los medios de prueba obrantes en el expediente, la parte activa del litigio no logró demostrar y acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos del 27 de mayo de 2022, por lo tanto, no cumplió con su carga procesal y legal de

demostrar la ocurrencia del siniestro, es decir, existe una fractura del nexo causal y, por ende, la negación de todas las pretensiones de la demanda.

Claramente, conforme se explicó en el pronunciamiento frente a los hechos y pretensiones de la demanda, la parte activa del litigio fundamenta su escrito petitorio única y exclusivamente en un Informe de Accidente de Tránsito (IPAT) para intentar endilgar responsabilidad civil en cabeza de los demandados. No obstante, no obran en el expediente más medios probatorios que den cuenta real y fidedigna de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos del 27 de mayo de 2022. Observándose una total orfandad de elementos que permitan corroborar lo que realmente ocurrió el día de los hechos. Por tal motivo, por la ausencia de medios probatorios que militen dentro del expediente de la referencia, las pretensiones de la demanda se deben desestimar.

En virtud de la clara inexistencia de responsabilidad del asegurado, la aseguradora deberá ser absuelta de cualquier responsabilidad indemnizatoria, pues al tenor del amparo contratado, se estipuló que mi representada cubre la responsabilidad en que incurra el asegurado. Sin embargo, el demandante no logró estructurar los elementos constitutivos para que se predique la responsabilidad a cargo del asegurado y con eso se torna imposible acceder a reconocimientos económicos que deba asumir la aseguradora, pues el riesgo amparado no se configuró.

En conclusión, para el caso en estudio debe señalarse que la póliza No. 1000272 no podrá ser afectada por cuanto la parte actora no demostró la realización del riesgo asegurado, pues no se ha presentado un evento en el cual haya sido declarada la responsabilidad civil del asegurado. Por el contrario, se observa de manera evidente la completa ausencia de elementos materiales probatorios dentro del expediente que permitan endilgar responsabilidad al extremo pasivo, de acuerdo a lo reiteradamente manifestado. De esa forma, como se incumplieron las cargas de que trata el artículo 1072 del Código de Comercio, es claro que no ha nacido la obligación condicional del asegurador.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

## **12. EL SEGURO CONTENIDO EN LA PÓLIZA DE RCE No. 1000272 ES DE CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO**

Esta excepción se plantea en gracia de discusión y se soporta en el hecho de que el demandante pretermite el contenido de normas de orden público que consagran el carácter meramente indemnizatorio del seguro que sirvió de soporte a la presente demanda. Lo anterior, como se consagra en el artículo 1088 del Código de Comercio, establece que jamás el seguro podrá constituir fuente de enriquecimiento. Asimismo, el artículo 1127 ibídem, sólo obliga al asegurador a indemnizar los perjuicios que cause el asegurado con ocasión de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley, siempre que no esté expresamente excluido en el contrato de

seguro. Por lo tanto, con esa condición suprema, la responsabilidad del asegurador que se enmarca dentro del límite máximo asegurado, consistente en la obligación de pagar la indemnización, alcanzará solo hasta el monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado, como lo ordena el artículo 1089 ibídem, también infringida por la parte activa de esta acción.

Respecto al carácter indemnizatorio del contrato de seguro, la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 22 de julio de 1999, se ha referido de la siguiente manera:

***“(…) Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato (...)”***<sup>34</sup> (Negrita por fuera de texto).

Es importante mencionar que la materia propia del seguro que sirvió de fundamento a la presente acción, de acuerdo con la naturaleza del riesgo que se protege, es de contenido puramente indemnizatorio conforme a lo preceptuado en el artículo 1088 del Código de Comercio y sólo podrá ser afectado según lo reza el artículo 1127 ibídem. En efecto, según lo normado en el referido precepto, este tipo de seguros es meramente indemnizatorio y jamás podrá constituir una fuente de enriquecimiento, por lo cual, la indemnización únicamente debe ceñirse a los perjuicios que efectivamente se logren acreditar por parte de quien los alega. Sumado al hecho del deber de acreditación, como es apenas, lógico del acaecimiento de alguno de los eventos asegurados en el contrato.

En vista de lo anterior, para el caso concreto, como se expuso en las excepciones de fondo planteadas frente a la demanda, las pretensiones que pretende sean reconocidas por el actor del presente pleito están indebidamente cuantificadas, no sólo por la orfandad probatoria con la que se pretenden demostrar, sino porque supera totalmente los baremos jurisprudenciales reiterados en muchas oportunidades por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Esto supone a todas luces un enriquecimiento injustificado de los demandantes. En consecuencia, al encontrarse una indebida pretensión de enriquecimiento con base en un contrato de seguro, se vulnera la disposición que establece el carácter meramente indemnizatorio del mismo.

En conclusión, de acuerdo a las voces de los artículos 1088 y 1127 del Código de Comercio sobre el carácter indemnizatorio del seguro y la responsabilidad del asegurador frente a la obligación indemnizatoria, en el caso particular se observa que, de acuerdo a los pedimentos injustificados,

<sup>34</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065

equivocadamente tasados y exorbitantes que hace en conjunto la parte demandante sobre los conceptos de daño moral, daño a la vida de relación, lucro cesante y daño emergente, es evidente la pretensión indebida de enriquecimiento con base en el contrato de seguro, vulnerando el carácter indemnizatorio que reviste al contrato de seguros.

En tal medida, solicito respetuosamente que se declare probada la presente excepción.

**13. EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE RCE No. 1000272**

Se plantea esta excepción con el fin de demostrar en el presente proceso que, dentro de las condiciones generales del contrato de seguro de RCE No. 1000272, por medio del cual se vincula a mi representada al presente proceso como demandada directa, en gracia de discusión y sin que la presente constituya el reconocimiento de obligación alguna de mi representada, cabe mencionar que, en el remoto evento y muy improbable escenario de que a mi procurada se le hiciera exigible la afectación del negocio contractual expedido por ella, mediante la cual se aseguró la responsabilidad civil extracontractual del asegurado, se estipularon las condiciones, los límites, los amparos otorgados, las exclusiones, las sumas aseguradas, los deducibles pactados, etc. De manera que exclusivamente son estos los parámetros que determinarían en un momento dado la posible responsabilidad que podría atribuirse a mi poderdante, en cuanto enmarcan la obligación condicional que contrajo y las diversas cláusulas del aseguramiento, incluso y sin perjuicio de las estipulaciones que la exoneran de responsabilidad, que pido declarar en el fallo.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

*“(...) **ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA.** El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074 (...)”.*

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

*“(...) Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta*

*Corporación, el valor de la prestación a cargo de la aseguradora, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización (...)"<sup>35</sup>.*

Téngase en cuenta que expresamente en el certificado de la póliza de RCE No. 1000272 se estipuló el límite de la cobertura para los eventos asegurables y amparados por el contrato, y en este punto impera el precepto del artículo 1079 del Código de Comercio, conforme al cual el asegurador estará obligado a responder únicamente hasta la concurrencia de la suma asegurada, sin excepción y sin perjuicio del carácter meramente indemnizatorio de esta clase de pólizas, consagrado en el artículo 1088 ibídem, que establece que los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituirse en fuente de enriquecimiento.

Ahora bien, exclusivamente en gracia de discusión, sin ánimo de que implique el reconocimiento de responsabilidad en contra de mi representada, se debe manifestar que, en la póliza de RCE No. 1000272, se indicaron los límites para los diversos amparos pactados, de la siguiente manera:

AMPAROS Y COBERTURAS				
COBERTURA	VALOR ASEGURADO		DEDUCIBLE	MINIMO
		%		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL PARA EL VEHICULO	-	-	--	--
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	\$	60. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	\$	60. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	\$	120. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	\$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	\$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	\$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	\$	INCLUIDO	--	--
LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :				
EXCLUSIONES:				
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA				

Sin embargo, el anterior es el límite máximo asegurado por la vigencia de la póliza, es decir, es el valor máximo por el que estaría llamada a responder mi representada en la totalidad de siniestros o pagos que se deban hacer con ocasión a la vigencia comprendida entre el 29 de noviembre de 2021 y el 29 de noviembre de 2022. Por otro lado, el valor asegurado de 60 SMLMV corresponde al salario vigente de la fecha en que ocurrió el accidente, es decir, para el caso concreto, el salario mínimo del año 2022 era \$ 1.000.000, por lo que el valor asegurado en la referida póliza es de \$ 60.000.000.

<sup>35</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2001. Mp. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. EXP 5952

En la causa que nos asiste, de acuerdo con los límites máximos establecidos en el contrato asegurativo, el monto máximo que hipotéticamente correspondería a mi procurada indemnizar, por los reprochados en el libelo genitor, es de \$ 60.000.000 para el amparo de lesiones o muerte de una persona, dentro de la cobertura de Responsabilidad Civil Extracontractual. De manera que ruego a su señoría proceder de conformidad en el momento en el que decida de fondo lo relativo a la relación sustancial que vincula a mi prohijada en esta causa.

De conformidad con estos argumentos, respetuosamente solicito declarar probada la excepción planteada en favor de los derechos e intereses de mi procurada.

#### **14. EN LA PÓLIZA DE RCE No. 1000272 SE PACTÓ UN DEDUCIBLE DIFERENCIAL**

Por medio de la presente excepción se pretende demostrar que en la póliza de RCE No. 1000272, se estipuló adicionalmente la existencia de un deducible diferencial, el cual legalmente está permitido, y que deberá tenerse en cuenta por el Juzgador a la hora de emitir una eventual condena, por cuanto que las sumas que se encuentran limitadas bajo deducible indelegablemente deben ser asumidas por el asegurado sin que a mi prohijada le asista ninguna obligación resarcitoria respecto de las mismas.

En primer lugar, debe recordarse que la estipulación del deducible en los contratos de seguro, se encuentra consagrada en el Art. 1103 del C. Co.; que reza lo siguiente:

*“(...) Las cláusulas según las cuales el asegurado deba soportar una cuota en el riesgo o en la pérdida, o afrontar la primera parte del daño, implican, salvo estipulación en contrario, la prohibición para el asegurado de protegerse respecto de tales cuotas, mediante la contratación de un seguro adicional. La infracción de esta norma producirá la terminación del contrato original (...)”*

En síntesis, el deducible comporta la participación que asume el asegurado cuando se presenta el siniestro, el cual se manifiesta en un valor o porcentaje pactado en la póliza de seguro. Así entonces, de acuerdo con el contenido de la póliza, el deducible pactado fue del 10 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA MÍNIMO UN (1) SMLMV, así se determinó en el negocio asegurativo estudiado:

AMPAROS Y COBERTURAS				
COBERTURA	VALOR ASEGURADO		DEDUCIBLE	MINIMO
			%	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL PARA EL VEHICULO	-	-	--	--
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	\$	60. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	\$	60. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	\$	120. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	\$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	\$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	\$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	\$	INCLUIDO	--	--
LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :				
EXCLUSIONES:				
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA				

Sin perjuicio a lo anterior, es de indicar que el deducible comporta la participación que asume el asegurado cuando se presenta el siniestro, el cual se manifiesta en un valor o porcentaje pactado en la póliza de seguro. Así entonces, de acuerdo con el contenido de la póliza, el deducible pactado fue diferencial así: si el siniestro fue avisado hasta los 60 días de su ocurrencia o conocimiento de su ocurrencia, el asegurado asume un deducible del 20 % del valor de la pérdida, mínimo 6 SMLMV; si fue avisado hasta los 90 días, el asegurado asume un deducible del 30 % del valor de la pérdida, mínimo 10 SMLMV y si fue avisado pasados los 90 días, el asegurado asume un deducible del 50 % del valor de la pérdida, mínimo 20 SMLMV, así se determinó en el negocio asegurativo estudiado:

• Modificación deducibles. El deducible establecido para el amparo de R.C.E y/o R.C.C. en la carátula de la póliza se mantendrá siempre y cuando el accidente de tránsito sea reportado dentro de los 30 días calendarios siguientes a la ocurrencia del mismo o el conocimiento por parte del asegurado o tomador del evento que genera dicha responsabilidad. En caso de presentar a SBS Colombia el siniestro fuera de los términos establecidos, el deducible se modificará de acuerdo a los días transcurridos después del día 30 así:

Hasta 60 días calendarios deducible 20% mínimo 6 SMMLV  
Hasta 90 días calendarios deducible 30% mínimo 10 SMMLV  
Más de 90 días calendarios deducible 50% mínimo 20 SMMLV

Por lo que es necesario indicar que no existe prueba en el plenario del aviso que se debió efectuar a la compañía aseguradora para mantener el deducible del 10% mínimo 1 SMLMV, y por consiguiente, debe tenerse presente que, una vez se encuentre fehacientemente probado el evento asegurado, el Juez deberá, al momento de atribuir responsabilidades sobre la indemnización del presunto daño antijurídico causado, aplicar el monto que al asegurado le correspondería cubrir en virtud del deducible pactado de acuerdo con la temporalidad de su obligación de aviso del siniestro.

Es decir que, si en la causa civil bajo su conocimiento ocurre el improbable caso de endilgarse responsabilidad a la demandada y asegurada y a mi mandante se le hiciera exigible la afectación del aseguramiento, el asegurado tendría que cubrir el monto correspondiente del deducible proporcionalmente a la temporalidad que se acredite dentro del proceso respecto del aviso del siniestro. De esta manera, en el hipotético evento en el que mi representada sea declarada civilmente responsable en virtud de la aplicación del contrato de seguro contenido en la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual Para Vehículos No. 1000272, es de suma importancia que el Honorable Juzgador descuenta del importe de la indemnización la suma pactada como deducible.

Por consiguiente, debe tenerse presente que, una vez se encuentre fehacientemente probado el evento asegurado, el Juez deberá, al momento de atribuir responsabilidades sobre la indemnización del presunto daño antijurídico causado, aplicar el monto que al asegurado le correspondería cubrir en virtud del deducible pactado. Es decir que, si en la causa civil bajo su conocimiento ocurre el improbable caso de endilgarse responsabilidad a la demandada y asegurada y a mi mandante se le hiciera exigible la afectación del aseguramiento, la tomadora tendría que cubrir el monto anteriormente indicado como deducible.

Por lo expuesto, solicito respetuosamente al Juez, declarar probada esta excepción.

### **15. RIESGOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LA PÓLIZA DE RCE No. 1000272**

Por medio de la presente, se solicita al despacho que, en caso de que en el curso del proceso se configure alguna exclusión contemplada en las condiciones particulares o generales del contrato de seguro de RCE No. 1000272, la declare probada, por cuanto hizo parte del negocio contractual que celebraron las partes.

En materia de seguros, el asegurador según el artículo 1056 del Código de Comercio podrá a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurado. Por lo tanto, es en el conjunto de las condiciones que contiene el respectivo contrato donde se determinan o delimitan contractualmente los riesgos, su alcance o extensión, el ámbito temporal y geográfico en el que el amparo opera, las causales de exclusión, o en general, las de exoneración. Por tanto, son esos los parámetros a los que se tiene que sujetarse el sentenciador al resolver cualquier pretensión que se base en la correspondiente póliza. Luego, obviamente el asegurador tiene la facultad de delimitar contractualmente los riesgos que asume, conforme a lo normado en el artículo 1056 Código de Comercio.

De las normas que regulan la delimitación de los riesgos asumidos por el asegurador (artículos 1056 y 1127 del Código de Comercio), se infiere lógicamente que la autonomía que otorgan esas normas a los sujetos contratantes está circunscrita no sólo a la relación riesgo-causa (responsabilidad civil) sino a la relación riesgo-efecto. Es decir, que resulta válido delimitar los efectos de la materialización del riesgo y el carácter patrimonial del mismo, asumiendo o no las consecuencias que ello genere, en todo o en parte, conforme al desarrollo jurisprudencial del derecho de daños. En virtud de lo anterior, es menester señalar que la póliza de seguro de RCE No. 1000272 en sus condiciones generales señala una serie de exclusiones, y de configurarse alguna de ellas, no podrá condenarse a mi prohijada.

En conclusión, de configurarse alguna de las exclusiones previamente mencionadas o las que

constan en el clausulado general de la póliza, no podrá existir responsabilidad en cabeza del asegurador, por cuanto el juez no podrá ordenar la afectación de la póliza de seguro No. 1000272 pues las partes acordaron expresamente pactar tales exclusiones. En consecuencia, si se evidencia dentro del proceso alguna de ellas, la póliza no cubriría ninguna solicitud de indemnización por lo que deberán denegarse las pretensiones de la demanda.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

## **16. INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. Y LOS DEMÁS DEMANDADOS**

Se formula esta excepción en razón a que SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. no puede ser considerada como responsable en la comisión de un accidente de tránsito respecto al cual no tuvo participación o injerencia alguna. Máxime, en atención a que su relación con el vehículo de placa SJP 307 para el momento de presunta ocurrencia de los hechos que sirven de base para la acción se circunscribe a las condiciones del contrato de seguro, en el cual no se pactó la solidaridad.

La responsabilidad civil implica la existencia de un hecho, un daño y un nexo de causalidad en entre ambos. Sin embargo, mi representada no se encuentra abocada a esta relación toda vez que no generó de manera directa o indirecta daño alguno a la parte demandante. Razón por la cual, la misma no puede ser condenada en forma alguna como responsable de un accidente en el cual no tuvo participación. De igual forma, mi representada no puede ser asemejada al asegurado en términos de que entre los mismos exista solidaridad, puesto que ésta sólo tiene su fuente en la ley o en los contratos. Sin que en la ley ni en el contrato de seguro suscrito entre mi representada y el tomador se haya establecido la misma.

Resulta pertinente recordar que, de conformidad con el Art. 2344 del C.C. si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa. Sin embargo, tal como ha señalado la H. Corte Suprema de Justicia<sup>36</sup>, la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño. No obstante, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban. Recuérdese que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mí representada deba ser condenada de forma solidaria.

Ahora bien, en lo concerniente a la solidaridad convenida entre las partes, la H. Corte<sup>37</sup> igualmente se ha ocupado de ella al señalar lo siguiente:

<sup>36</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia SC780-2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

<sup>37</sup> *Ibidem*.

*“(…) **La solidaridad contractual civil debe ser declarada expresamente cuando la ley no la establece, por ello jamás se presume.** De ahí que es un mandato de carácter sustancial, ya que impone una obligación material al responsable solidario frente a los sujetos activos de la relación jurídica.*

*Ni la prescripción ni la solidaridad son, por lo tanto, elementos “accesorios” de la relación jurídico-sustancial o derecho material. Si la acción sustancial está prescrita el demandante no tiene ningún derecho y el demandado no es civilmente responsable; y **si el deudor contractual no es responsable in solidum, entonces no está obligado a pagar el total de la indemnización.** Desde luego que se trata de una cuestión fundamental y no de un tema secundario (…)” (Negrilla y Sublínea por fuera del texto original).*

Como se colige del contrato de seguro materializado a partir de las Pólizas de Seguro aquí vinculadas, entre mi procurada y el tomador y/o asegurado no se pactó la solidaridad, así como tampoco se señaló que la misma tuviese una relación adicional y/o distinta a la función aseguradora por la misma desarrollada. Lo cual claramente deviene en que no es posible predicar la solidaridad pretendida por la parte demandante. Consecuentemente, mi procurada no puede ser tenida como responsable del accidente de tránsito presuntamente acaecido el 27 de mayo de 2022, pues su relación se limita y circunscribe al contrato de seguro que la misma otorgó en el cual no se pactó la solidaridad.

En conclusión, mi procurada no puede ser tenida como responsable en la comisión del accidente de tránsito respecto al cual se erige el presente trámite comoquiera que su relación con el vehículo de placa SJP 307 para el momento de ocurrencia de los hechos se delimitó de conformidad con las condiciones del contrato de seguro sin que en el mismo se haya pactado la solidaridad.

Por lo anterior, señor juez, solicito se abstenga de declarar responsable por el accidente a mi representada en un eventual fallo y declare probada esta excepción.

#### **17. GENÉRICA O INNOMINADA Y OTRAS.**

Solicito declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, que se origine en la Ley en virtud de lo reglado en el artículo 282 del Código General del Proceso.

#### **CAPITULO II:**

#### **CONTESTACIÓN AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA FORMULADO POR LA EMPRESA**

**TRANSPORTADORA AUTOBUSES DEL SUR S.A.S. A SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**

**I. FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA**

**Frente al hecho “1.”:** como este hecho contiene varias afirmaciones, me pronuncio frente a cada una de ellas:

- NO LE CONSTA de manera directa a mi representada la ocurrencia de un accidente de tránsito el 27 de mayo de 2022, ni las circunstancias de tiempo, modo y lugar que habrían rodeado el mismo, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Sin embargo, dentro del expediente se observa un IPAT, el cual contiene la información sobre el lugar donde ocurrieron los hechos, la fecha, los conductores y los vehículos involucrados.
- NO LE CONSTA de manera directa a mi representada si el vehículo de placa SJP 307, para el 27 de mayo de 2022, era de propiedad de la señora MARÍA AURA ELISA CALVACHE DE MONCAYO, toda vez que son circunstancias ajenas al conocimiento de mi prohijada. Sin embargo, en el expediente se aportó un histórico vehicular del referido automotor expedido por el RUNT, en el cual se observa que cierto.

**Frente al hecho “2.”:** Es cierto que ante este honorable despacho se adelanta una demanda verbal de responsabilidad civil extracontractual instaurada por el señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDEZ QUETAMÁ y sus familiares, quienes pretende el pago de unos perjuicios sufridos. En todo caso, se manifiesta que las pretensiones presentadas en la demanda, carecen de fundamento para prosperar, comoquiera que dentro del plenario no obran elementos de convicción suficientes que acrediten la responsabilidad que pretende atribuirse a la pasiva de esta acción, ya que la parte actora basa sus infundadas atribuciones en una mera hipótesis.

**Frente al hecho “3.”:** NO ES CIERTO como está redactado y se aclara: Si bien mi representada expidió el contrato de seguro documentado en la Póliza De Seguros De Responsabilidad Civil Extracontractual Para Vehículos No. 1000272, vigente entre el 29 de noviembre de 2021 y el 29 de noviembre de 2022, en la que figuraba como tomador AUTOBUSES DEL SUR S.A.S., como asegurada MARÍA AURA CALVACHE DE MONCAYO, como beneficiarios TERCEROS AFECTADOS, que contemplaba como riesgo asegurado el vehículo de placa SJP 307 y en la que se otorgó el amparo de responsabilidad civil extracontractual, lo cierto es que la misma no podrá ser afectada por cuanto no se acreditó la ocurrencia de un siniestro ni la cuantía de la pérdida, por lo tanto, no se configuró el riesgo asegurado contenido en dicha póliza y asumido por mi representada.

**Frente al hecho “4.”:** como este hecho contiene varias afirmaciones, me pronuncio frente a cada una de ellas:

- Si bien es cierto lo relativo a la existencia de las pólizas que en este numeral se relacionan, y sus vigencias, se aclara que el mero hecho de que la empresa transportadora haya tomado diversas pólizas con mi representada no implica per se que nazca a cargo de esta última obligación indemnizatoria alguna.
- Si bien mi representada expidió el contrato de seguro documentado en la Póliza De Seguros De Responsabilidad Civil Extracontractual Para Vehículos No. 1000272, vigente entre el 29 de noviembre de 2021 y el 29 de noviembre de 2022, en la que figuraba como tomador AUTOBUSES DEL SUR S.A.S., como asegurada MARÍA AURA CALVACHE DE MONCAYO, como beneficiarios TERCEROS AFECTADOS, que contemplaba como riesgo asegurado el vehículo de placa SJP 307 y en la que se otorgó el amparo de responsabilidad civil extracontractual, lo cierto es que la misma no podrá ser afectada por cuanto no se acreditó la ocurrencia de un siniestro ni la cuantía de la pérdida, por lo tanto, no se configuró el riesgo asegurado contenido en dicha póliza y asumido por mi representada.
- De otro lado, es necesario aclarar que frente a las Póliza De Seguros De Responsabilidad Civil Contractual No. 1000167, no es susceptible de afectarse en forma alguna, ya que lo que se discute en el proceso es la eventual existencia de responsabilidad civil extracontractual en cabeza de la asegurada; por lo que, frente a dicha póliza, como se abordará en los respectivos medios exceptivos, no existe cobertura material respecto de los hechos que aquí se ventilan.

**Frente al hecho “5.”:** No es un hecho, es una solicitud de la parte. Sin perjuicio de ello, se precisa que si bien las pólizas en mención se encontraban vigentes para el 27 de mayo de 2022, este despacho debe tener en cuenta que la mera existencia del contrato de seguro no significa que exista de manera automática una obligación indemnizatoria a cargo de la aseguradora, pues esta solo surge cuando el riesgo amparado en el mentado contrato ha sido efectivamente realizado en los términos de su cobertura, y siempre que no se configure ninguna causal legal o convencional de exclusión o de inoperancia del mismo. En primer lugar, es necesario aclarar que la Póliza De Seguros De Responsabilidad Civil Contractual No. 1000167 no es susceptible de afectarse en tanto su cobertura y amparos no se enmarcan en los presupuestos fácticos del presente litigio al limitarse al eventual resarcimiento de perjuicios derivados de la responsabilidad contractual, es decir por lesiones o muerte de pasajeros del vehículo asegurado y no de la responsabilidad extracontractual, por lo que se evidencia que no ha nacido ninguna obligación condicional del asegurador en razón a esta póliza. En segundo lugar, en el presente caso, comoquiera que no se encuentran acreditados los elementos configurativos de la responsabilidad civil extracontractual que se persigue, toda vez que no existen pruebas que demuestren el hecho dañoso, daño y relación causal, el riesgo asegurado no se entiende realizado y por lo mismo, no nace la obligación resarcitoria de mi procurada concertada en la Póliza De Seguros De Responsabilidad Civil Extracontractual Para Vehículos No. 1000272, y por lo tanto es improcedente su afectación.

## II. FRENTE A LA PRETENSIÓN ÚNICA DEL LLAMAMIENTO

**ME OPONGO** a la prosperidad de la única pretensión incoada en el llamamiento en garantía, por cuanto no se vislumbran los elementos *sine qua non* para predicar, como exigible, la obligación indemnizatoria de SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.; pues si bien la sociedad EMPRESA TRANSPORTADORA AUTOBUSES DEL SUR S.A.S celebró varios contratos de seguros con mi representada, contenidos en las Pólizas de RCE No. 1000272 y de RCC No. 1000167, lo cierto es que ninguna de estas pólizas podrá afectarse pues como se ha manifestado de forma reiterada. En primer lugar, es necesario aclarar que la Póliza De Seguros De Responsabilidad Civil Contractual No. 1000167 no es susceptible de afectarse en tanto su cobertura y amparos no se enmarcan en los presupuestos fácticos del presente litigio al limitarse al eventual resarcimiento de perjuicios derivados de la responsabilidad contractual, es decir por lesiones o muerte de pasajeros del vehículo asegurado y no de la responsabilidad extracontractual, por lo que se evidencia que no ha nacido ninguna obligación condicional del asegurador en razón a esta póliza. En segundo lugar, no hay pruebas dentro del proceso que logren acreditar de forma certera y fehaciente una responsabilidad civil extracontractual en cabeza de la pasiva de la acción, en la ocurrencia del accidente de tránsito del pasado 27 de mayo de 2022, en donde presuntamente resultó lesionado el señora WILLIAM ORLANDO BENAVIDEZ QUETAMÁ y que las lesiones del anterior se hayan dado por un actuación del conductor del vehículo SJP 307; en ese orden de ideas, no existen pruebas fehacientes que demuestren el hecho dañoso, daño y relación causal, y por ende el riesgo asegurado no se entiende realizado y por lo mismo, no nace la obligación resarcitoria de mi procurada concertada en la Póliza De Seguros De Responsabilidad Civil Extracontractual Para Vehículos No. 1000272, y por lo tanto es improcedente su afectación.

## III. EXCEPCIONES DE MÉRITO FRENTE AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

### 1. AUSENCIA DE COBERTURA MATERIAL DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL No. 1000167, DEBIDO A QUE EN EL PRESENTE PROCESO SE DEBATE LA PRESUNTA CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta que la parte actora pretende obtener la indemnización por concepto de daño emergente proveniente del accidente de tránsito presuntamente acaecido el día 27 de mayo de 2022, entre el vehículo asegurado por mi mandante de placa SJP 307 y el vehículo de placa LUD 433 presuntamente de propiedad del demandante, es claro que el debate gira en torno a verificar la configuración de los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual prescritos en el artículo 2341 y siguientes del Código Civil, es decir, no se contempla la responsabilidad civil desde la perspectiva del incumplimiento de contrato alguno, imposibilitando de esta forma la afectación de

la póliza de Responsabilidad Civil Contractual contratada por la asegurada. De tal suerte, dichos contratos no prestan cobertura material para los hechos que aquí se ventilan.

Nuestra legislación civil contempla la posibilidad de exigir el resarcimiento por los perjuicios que determinada persona cause a otra debido a una conducta u omisión que no tiene origen, o no se desarrolla en el marco de una relación contractual, para tal efecto, esta posibilidad de resarcimiento de perjuicios se encuentra regulada en el artículo 2341 del Código Civil:

*“(...) ARTICULO 2341. <RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL>. El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido (...)”*

A su vez, el artículo 1056 del Código de Comercio permite establecer de forma libre a la compañía aseguradora los riesgos que desea asumir:

*“(...) ARTÍCULO 1056. <ASUNCIÓN DE RIESGOS>. Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado (...)”*

Es decir, la compañía aseguradora tiene libertad contractual para determinar si desea amparar la responsabilidad civil contractual o extracontractual, asunción de riesgo que servirá como guía al momento de verificar el surgimiento de la obligación a cargo de mi representada.

La Superintendencia Financiera de Colombia ha efectuado sendos pronunciamos sobre la aplicación del artículo 1056 del Código de Comercio, que confirma la legitimación del ejercicio de la autonomía de la voluntad contractual, como en el siguiente concepto:

*“(...) 3. La libertad contractual Dentro del ámbito de libertad contractual que le asiste a las partes en el contrato de seguro, el asegurador en virtud de la facultad que consagra el artículo 1056 del Código de Comercio puede, salvo las restricciones legales, asumir a su arbitrio todos o algunos de los riesgos a que está expuesto el interés asegurado, el patrimonio o la persona del asegurado. Es así como éste, **mediante la suscripción de la póliza de seguro decide otorgar determinados amparos supeditados al cumplimiento de ciertos presupuestos, de tal manera que solo en el evento en que se presenten dichos presupuestos deberá cumplir con su obligación de indemnizar.***

*De igual forma, adicionalmente, puede incorporar en la póliza determinadas*

estipulaciones, contentivas de circunstancias que, aún siendo origen del evento dañoso o efecto del mismo, no obliguen al asegurador a la prestación señalada en el contrato de seguro, las cuales se conocen generalmente con **el nombre de exclusiones**. De conformidad con lo anterior, las compañías aseguradoras son autónomas para otorgar o no determinados amparos, de acuerdo con sus políticas internas de selección de riesgos.

Como una limitación a esta autonomía, las compañías aseguradoras tienen el deber de celebrar el contrato y consecuentemente brindar la cobertura del caso, si se trata de un seguro de naturaleza obligatoria, de conformidad con lo estipulado en el artículo 191 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, en los cuales las entidades aseguradoras que tengan autorizado el ramo correspondiente están en la obligación de otorgar la cobertura en los términos que la ley prevea, sin posibilidad de negar la asunción del riesgo (...)”<sup>38</sup> (Negrilla y Sublínea por fuera del texto original).

En efecto en la sentencia del Consejo de Estado del 24 de julio de 2013, expediente 27.505 con ponencia del Doctor Mauricio Fajardo Gómez, se trae a colación el concepto dado por la Superintendencia Financiera antes citado, de la siguiente manera:

“(…) Ahora bien, las compañías de seguros autorizadas para operar en Colombia tienen como regla general la facultad que les asiste **de seleccionar los riesgos que deseen asumir de acuerdo con su experiencia y su capacidad técnica y económica** si se tiene en cuenta que el artículo 1056 del Código de Comercio dispone que el “asegurador podrá a su arbitrio asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados”. La contrapartida de esa autonomía para delimitar el riesgo en el contrato de seguro y decidir si se emite o no lo póliza de seguro, no puede ser otra que la carga de la compañía de seguros de evaluar y **definir en forma completa y clara las condiciones del riesgo para minimizar su exposición al mismo** y prestar un adecuado servicio de aseguramiento. Por lo anterior, delimitado el riesgo por la propia compañía de seguros y expedida la póliza correspondiente, la aseguradora tendrá la consecuente obligación de responder por el siniestro **en los términos de la póliza de seguro** otorgada, es decir que como consecuencia de su decisión voluntaria y libre de asumir un riesgo y de la expedición de la póliza respectiva, se le impone la obligación primordial de indemnizar al asegurado, mediante el pago de las sumas estipuladas - o la reposición o reconstrucción de la cosa asegurada en su caso- sin que le sea permitido en el momento de la reclamación entrar a redefinir el riesgo amparado o recortar el alcance de su cobertura, en forma unilateral y con fundamento en

<sup>38</sup> Concepto No. 1999001812 del 2 de marzo de 1999. Citado en Análisis Jurisprudencial Seguro de Cumplimiento. Potestad de las aseguradoras de asumir los riesgos. Universidad Javeriana. 2019

*interpretaciones acerca de la naturaleza o alcance del amparo o invocar términos y condiciones que no fueron expresados en la póliza (...)" (Negrilla y Sublínea por fuera del texto original).*

Por lo anterior, es necesario aclarar que en virtud de las condiciones bajo las cuales se otorgó el aseguramiento documentado en la póliza de responsabilidad civil contractual, es inviable su afectación en este caso, toda vez que en este asunto la actora solicita la declaración de responsabilidad civil extracontractual en cabeza de la pasiva, **lo cual de ninguna manera fue amparado por mi mandante en la PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL No. 1000167.**

Véase que la Póliza de Responsabilidad Civil Contractual No. 1000167 prevé exclusivamente los perjuicios surgidos por el incumplimiento de un contrato celebrado entre las partes del respectivo proceso, situación que no se acopla a la discusión que ocupa nuestra atención, en igual sentido, los amparos contemplados por la póliza no guardan relación alguna con lo pedido en la demanda, lo cual se observa a continuación:

**CLÁUSULA 1. - OBJETO DEL SEGURO.**

1.1. EL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO TIENE POR OBJETO INDEMNIZAR O REEMBOLSAR AL ASEGURADO LAS SUMAS POR LAS CUALES SEA CIVILMENTE RESPONSABLE, MEDIANTE SENTENCIA JUDICIAL DEBIDAMENTE EJECUTORIADA O MEDIANTE ACUERDO O TRANSACCIÓN AUTORIZADA DE MODO EXPRESO POR SBS COLOMBIA, POR HECHOS ACAECIDOS DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE SEGURO, EN RELACIÓN CON LA RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL, SEGÚN APAREZCA CLARAMENTE DETERMINADO EN EL "CUADRO DE DECLARACIONES" DE LA PRESENTE PÓLIZA, **DERIVADA DEL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS,** DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, ASÍ:

**1.1.1. RESPONSABILIDAD CIVIL  
CONTRACTUAL:**

MUERTE, INCAPACIDAD PERMANENTE,  
INCAPACIDAD TEMPORAL Y GASTOS  
MÉDICOS, QUIRÚRGICOS,  
FARMACEÚTICOS Y HOSPITALARIOS,  
CAUSADOS A PASAJEROS, **COMO  
CONSECUENCIA DE ACCIDENTE  
DERIVADO DEL TRANSPORTE,** SEGÚN LO

**CLÁUSULA 2. - RIESGOS  
CUBIERTOS.**

SE CONSIDERA RIESGO CUBIERTO LA  
RESPONSABILIDAD CIVIL DEL  
ASEGURADO, DE ACUERDO CON LO  
PREVISTO EN LA CONDICIÓN 1,  
ENTENDIÉNDOSE:

**POR PASAJERO:**

**A TODA PERSONA TRANSPORTADA QUE  
SEA PORTADORA DE UN PASAJE O  
FIGURE EN LA LISTA DE PASAJEROS  
DEL VEHÍCULO ASEGURADO.**

Con esto, se observa que el objeto de la póliza de responsabilidad civil contractual es cubrir los perjuicios que el asegurado ocasione a los pasajeros del vehículo asegurado. Es claro como aún en un caso remoto, si se llegare a estudiar la afectación de la póliza en comento, dicho estudio no saldría avante toda vez que los amparos estipulados en las condiciones generales no contemplan los perjuicios patrimoniales causados a terceros.

Por lo tanto, en el caso que nos convoca no existe cobertura material en relación con esta póliza y frente a los hechos endilgados en la demanda comoquiera que no fueron objeto de asegurabilidad ni se encuentran amparados en la póliza contratada con mi representada.

Teniendo en cuenta los puntos esbozados ante este Despacho, los hechos del 27 de mayo de 2022, que ahora son materia de litigio y que se tramitan mediante proceso de responsabilidad civil extracontractual por las presuntas lesiones al señor WILLIAM ORLANDO BENAVIDEZ QUETAMÁ, no son objeto de asegurabilidad bajo las condiciones pactada en el contrato de seguro de RCC No. 1000167, entonces no existe cobertura material con respecto a la responsabilidad civil en que incurra el asegurado y por lo tanto deberá declararse dicha excepción de falta de cobertura material de la póliza por la que se vinculó a mi representada.

Solicito al Despacho tener por probada esta excepción.

**2. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN INDEMNIZATORIA A CARGO DE SBS SEGUROS DE COLOMBIA S.A., POR LA NO REALIZACIÓN DEL RIESGO ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 1000272**

Es necesario aclarar que, para que nazca a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador, es requisito que el solicitante del amparo demuestre tanto la realización del riesgo asegurado en la póliza de RCE No. 1000272, como también la cuantía de la pérdida. En tal virtud, si no se prueban estos dos elementos (la realización del riesgo asegurado y la cuantía de la pérdida) la prestación condicional de la aseguradora no nace a la vida jurídica y no podrá hacerse efectiva la póliza. Dado que en el presente caso no se demostró la realización del riesgo asegurado, es decir, la responsabilidad civil extracontractual del asegurado porque, en primer lugar, no se demostró un nexo de causalidad entre las conductas de los demandados y el daño alegado por los demandantes, toda vez que, como se dijo antes, se configura una completa ausencia de medios de prueba que permitan esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos del 27 de mayo de 2022, es claro que no nació obligación de indemnizar por parte de los demandados.

Así entonces, para efectos de solicitudes de indemnización por los riesgos amparados, la carga probatoria gravita sobre la parte demandante. En ese sentido, el artículo 1077 del Código de Comercio, estableció:

**“(...) ARTÍCULO 1077. <CARGA DE LA PRUEBA>. Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso (...).”** (subrayado y negrilla fuera del texto original)

El cumplimiento de tal carga probatoria respecto de la ocurrencia del siniestro, es fundamental para que se haga exigible la obligación condicional derivada del contrato de seguro, tal como lo ha indicado doctrina respetada sobre el tema:

*“(...) Es asunto averiguado que en virtud del negocio asegurativo, el asegurador contrae una obligación condicional que el artículo 1045 del código de comercio califica como elemento esencial del contrato, cuyo objeto se concreta a pagar la indemnización cuando se realice el riesgo asegurado. Consecuente con esta concepción, el artículo 1054 de dicho estatuto puntualiza que la verificación del riesgo -como suceso incierto que no depende exclusivamente de la voluntad del tomador- “da origen a la obligación del asegurado” (se resalta), lo que significa que es en ese momento en el que nace la deuda y, al mismo tiempo, se torna exigible (...).”*

*“(...) Luego la obligación del asegurador nace cuando el riesgo asegurado se materializa, y cual si fuera poco, emerge pura y simple.*

*Pero hay más. Aunque dicha obligación es exigible desde el momento en que ocurrió el siniestro, **el asegurador, ello es medular, no está obligado a efectuar el pago hasta tanto el asegurado o beneficiario le demuestre que el riesgo se realizó y cuál fue la cuantía de su pérdida.** (...) Por eso el artículo 1080 del Código de Comercio establece que “el asegurador estará obligado a efectuar el pago...[cuando] el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077”. Dicho en breve, el asegurador sabe que tiene un deber de prestación, pero también sabe que mientras el acreedor no cumpla con una carga, no tendrá que pagar (...)”*

*“(...) Se dirá que el asegurado puede acudir al proceso declarativo, y es cierto; pero aunque la obligación haya nacido y sea exigible, la pretensión fracasará si no se atiende la carga prevista en el artículo 1077 del Código de Comercio, porque sin el cumplimiento de ella el asegurador no debe “efectuar el pago” (C. de CO., art. 1080) (...)”<sup>39</sup> (Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

De lo anterior, se infiere que, en todo tipo de seguros, cuando el asegurado quiera hacer efectiva la garantía deberá demostrar la ocurrencia del siniestro y de ser necesario, también deberá demostrar la cuantía de la pérdida. Para el caso en estudio, debe señalarse como primera medida que la parte demandante no cumplió con la carga de la prueba consistente en demostrar la realización del riesgo asegurado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1072 del Código de Comercio. Según las pruebas documentales obrantes en el plenario, no se han probado estos factores, por lo que, en ese sentido, no ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional del asegurador.

Sin perjuicio de las excepciones anteriores, se formula esta de conformidad con lo estipulado en las condiciones específicas la póliza No. 1000272, toda vez que de la mera lectura podemos concluir que el riesgo asegurado no se realizó. El amparo de responsabilidad civil extracontractual que se pretende afectar se concertó en los siguientes términos:

<sup>39</sup> ÁLVAREZ GÓMEZ Marco Antonio. “Ensayos sobre el Código General del Proceso. Volumen I. Hipoteca, Fiducia mercantil, Prescripción, Seguros, Filiación, Partición de bienes en vida y otras cuestiones sobre obligaciones y contratos”. Segunda Edición. Editorial Temis, Bogotá, 2018. Pág. 121-125.

**CLÁUSULA 1. - OBJETO DEL SEGURO.**

1.1. EL PRESENTE CONTRATO DE SEGURO TIENE POR OBJETO INDEMNIZAR O REEMBOLSAR AL ASEGURADO LAS SUMAS POR LAS CUALES SEA CIVILMENTE RESPONSABLE, MEDIANTE SENTENCIA JUDICIAL DEBIDAMENTE EJECUTORIADA O MEDIANTE ACUERDO O TRANSACCIÓN AUTORIZADA DE MODO EXPRESO POR SBS COLOMBIA, POR HECHOS EN QUE INCURRA EL ASEGURADO A CONSECUENCIA DE UN ACCIDENTE O SERIE DE ACCIDENTES EMANADOS DE UN SOLO EVENTO SÚBITO E IMPREVISTO OCASIONADO CON EL VEHÍCULO, DURANTE LA VIGENCIA DE ESTE SEGURO, QUE CONSTITUYA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN CABEZA DEL ASEGURADO, SEGÚN APAREZCA CLARAMENTE DETERMINADO EN EL "CUADRO DE DECLARACIONES" DE LA PRESENTE PÓLIZA, DERIVADA DEL TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LAS DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, ASÍ:

**1.1.1. RESPONSABILIDAD CIVIL  
EXTRA CONTRACTUAL:**

MUERTE, LESIONES PERSONALES Y/O DAÑOS EN LOS BIENES MATERIALES CAUSADOS A TERCEROS NO TRANSPORTADOS.

En este orden de cosas, mediante el referido contrato de seguro, en virtud de la cual se vinculó a mi procurada al presente litigio, la aseguradora cubre la responsabilidad civil extracontractual atribuible al asegurado nombrado en la carátula de la póliza cuando este sea civilmente responsable de acuerdo con la legislación colombiana y a los términos, estipulaciones, excepciones y limitaciones contempladas en la póliza. Sin embargo, en este caso encontramos que tal riesgo no se estructuró, pues de acuerdo a los medios de prueba obrantes en el expediente, la parte activa del litigio no logró demostrar y acreditar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos del 27 de mayo de 2022, por lo tanto, no cumplió con su carga procesal y legal de demostrar la ocurrencia del siniestro, es decir, existe una fractura del nexo causal y, por ende, la negación de todas las pretensiones de la demanda.

Claramente, conforme se explicó en el pronunciamiento frente a los hechos y pretensiones de la demanda, la parte activa del litigio fundamenta su escrito petitorio única y exclusivamente en un

Informe de Accidente de Tránsito (IPAT) para intentar endilgar responsabilidad civil en cabeza de los demandados. No obstante, no obran en el expediente más medios probatorios que den cuenta real y fidedigna de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos del 27 de mayo de 2022. Observándose una total orfandad de elementos que permitan corroborar lo que realmente ocurrió el día de los hechos. Por tal motivo, por la ausencia de medios probatorios que militen dentro del expediente de la referencia, las pretensiones de la demanda se deben desestimar.

En virtud de la clara inexistencia de responsabilidad del asegurado, la aseguradora deberá ser absuelta de cualquier responsabilidad indemnizatoria, pues al tenor del amparo contratado, se estipuló que mi representada cubre la responsabilidad en que incurra el asegurado. Sin embargo, el demandante no logró estructurar los elementos constitutivos para que se predique la responsabilidad a cargo del asegurado y con eso se torna imposible acceder a reconocimientos económicos que deba asumir la aseguradora, pues el riesgo amparado no se configuró.

En conclusión, para el caso en estudio debe señalarse que la póliza No. 1000272 no podrá ser afectada por cuanto la parte actora no demostró la realización del riesgo asegurado, pues no se ha presentado un evento en el cual haya sido declarada la responsabilidad civil del asegurado. Por el contrario, se observa de manera evidente la completa ausencia de elementos materiales probatorios dentro del expediente que permitan endilgar responsabilidad al extremo pasivo, de acuerdo a lo reiteradamente manifestado. De esa forma, como se incumplieron las cargas de que trata el artículo 1072 del Código de Comercio, es claro que no ha nacido la obligación condicional del asegurador.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

### **3. EL SEGURO CONTENIDO EN LA PÓLIZA DE RCE No. 1000272 ES DE CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO**

Esta excepción se plantea en gracia de discusión y se soporta en el hecho de que el demandante pretermite el contenido de normas de orden público que consagran el carácter meramente indemnizatorio del seguro que sirvió de soporte a la presente demanda. Lo anterior, como se consagra en el artículo 1088 del Código de Comercio, establece que jamás el seguro podrá constituir fuente de enriquecimiento. Asimismo, el artículo 1127 ibídem, sólo obliga al asegurador a indemnizar los perjuicios que cause el asegurado con ocasión de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley, siempre que no esté expresamente excluido en el contrato de seguro. Por lo tanto, con esa condición suprema, la responsabilidad del asegurador que se enmarca dentro del límite máximo asegurado, consistente en la obligación de pagar la indemnización, alcanzará solo hasta el monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado, como lo ordena el artículo 1089 ibídem, también infringida por la parte activa de esta acción.

Respecto al carácter indemnizatorio del contrato de seguro, la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 22 de julio de 1999, se ha referido de la siguiente manera:

*“(…) Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la operancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato (...)”<sup>40</sup> (Negrita por fuera de texto).*

Es importante mencionar que la materia propia del seguro que sirvió de fundamento a la presente acción, de acuerdo con la naturaleza del riesgo que se protege, es de contenido puramente indemnizatorio conforme a lo preceptuado en el artículo 1088 del Código de Comercio y sólo podrá ser afectado según lo reza el artículo 1127 íbidem. En efecto, según lo normado en el referido precepto, este tipo de seguros es meramente indemnizatorio y jamás podrá constituir una fuente de enriquecimiento, por lo cual, la indemnización únicamente debe ceñirse a los perjuicios que efectivamente se logren acreditar por parte de quien los alega. Sumado al hecho del deber de acreditación, como es apenas, lógico del acaecimiento de alguno de los eventos asegurados en el contrato.

En vista de lo anterior, para el caso concreto, como se expuso en las excepciones de fondo planteadas frente a la demanda, las pretensiones que pretende sean reconocidas por el actor del presente pleito están indebidamente cuantificadas, no sólo por la orfandad probatoria con la que se pretenden demostrar, sino porque supera totalmente los baremos jurisprudenciales reiterados en muchas oportunidades por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Esto supone a todas luces un enriquecimiento injustificado de los demandantes. En consecuencia, al encontrarse una indebida pretensión de enriquecimiento con base en un contrato de seguro, se vulnera la disposición que establece el carácter meramente indemnizatorio del mismo.

En conclusión, de acuerdo a las voces de los artículos 1088 y 1127 del Código de Comercio sobre el carácter indemnizatorio del seguro y la responsabilidad del asegurador frente a la obligación indemnizatoria, en el caso particular se observa que, de acuerdo a los pedimentos injustificados, equivocadamente tasados y exorbitantes que hace en conjunto la parte demandante sobre los conceptos de daño moral, daño a la vida de relación, lucro cesante y daño emergente, es evidente la pretensión indebida de enriquecimiento con base en el contrato de seguro, vulnerando el carácter indemnizatorio que reviste al contrato de seguros.

---

<sup>40</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065

En tal medida, solicito respetuosamente que se declare probada la presente excepción.

**4. EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO EN LA PÓLIZA DE RCE No. 1000272**

Se plantea esta excepción con el fin de demostrar en el presente proceso que, dentro de las condiciones generales del contrato de seguro de RCE No. 1000272, por medio del cual se vincula a mi representada al presente proceso como demandada directa, en gracia de discusión y sin que la presente constituya el reconocimiento de obligación alguna de mi representada, cabe mencionar que, en el remoto evento y muy improbable escenario de que a mi procurada se le hiciera exigible la afectación del negocio contractual expedido por ella, mediante la cual se aseguró la responsabilidad civil extracontractual del asegurado, se estipularon las condiciones, los límites, los amparos otorgados, las exclusiones, las sumas aseguradas, los deducibles pactados, etc. De manera que exclusivamente son estos los parámetros que determinarían en un momento dado la posible responsabilidad que podría atribuirse a mi poderdante, en cuanto enmarcan la obligación condicional que contrajo y las diversas cláusulas del aseguramiento, incluso y sin perjuicio de las estipulaciones que la exoneran de responsabilidad, que pido declarar en el fallo.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

***“(...) ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA. El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074 (...).”***

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

***“(...) Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, el valor de la prestación a cargo de la aseguradora, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en***

*el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización (...)"<sup>41</sup>.*

Téngase en cuenta que expresamente en el certificado de la póliza de RCE No. 1000272 se estipuló el límite de la cobertura para los eventos asegurables y amparados por el contrato, y en este punto impera el precepto del artículo 1079 del Código de Comercio, conforme al cual el asegurador estará obligado a responder únicamente hasta la concurrencia de la suma asegurada, sin excepción y sin perjuicio del carácter meramente indemnizatorio de esta clase de pólizas, consagrado en el artículo 1088 ibídem, que establece que los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituirse en fuente de enriquecimiento.

Ahora bien, exclusivamente en gracia de discusión, sin ánimo de que implique el reconocimiento de responsabilidad en contra de mi representada, se debe manifestar que, en la póliza de RCE No. 1000272, se indicaron los límites para los diversos amparos pactados, de la siguiente manera:

AMPAROS Y COBERTURAS				
COBERTURA	VALOR ASEGURADO		DEDUCIBLE	
			%	MINIMO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL PARA EL VEHICULO	-	-	--	--
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	\$	60. SMLMV	10.0 %	1.0 SMLMV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	\$	60. SMLMV	10.0 %	1.0 SMLMV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	\$	120. SMLMV	10.0 %	1.0 SMLMV
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	\$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	\$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	\$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	\$	INCLUIDO	--	--
LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :				
EXCLUSIONES:				
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA				

Sin embargo, el anterior es el límite máximo asegurado por la vigencia de la póliza, es decir, es el valor máximo por el que estaría llamada a responder mi representada en la totalidad de siniestros o pagos que se deban hacer con ocasión a la vigencia comprendida entre el 29 de noviembre de 2021 y el 29 de noviembre de 2022. Por otro lado, el valor asegurado de 60 SMLMV corresponde al salario vigente de la fecha en que ocurrió el accidente, es decir, para el caso concreto, el salario mínimo del año 2022 era \$ 1.000.000, por lo que el valor asegurado en la referida póliza es de \$ 60.000.000.

En la causa que nos asiste, de acuerdo con los límites máximos establecidos en el contrato asegurativo, el monto máximo que hipotéticamente correspondería a mi procurada indemnizar, por los reprochados en el libelo genitor, es de \$ 60.000.000 para el amparo de lesiones o muerte de una persona, dentro de la cobertura de Responsabilidad Civil Extracontractual. De manera que ruego a su señoría proceder de conformidad en el momento en el que decida de fondo lo relativo a

<sup>41</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2001. Mp. Jorge Antonio Castillo Rúgeles. EXP 5952

la relación sustancial que vincula a mi prohijada en esta causa.

Ahora bien, sin perjuicio de que la póliza de RCC No. 1000167, no presta cobertura material a los hechos objeto del litigio, en atención que la misma únicamente puede ser afectada cuando se declare la responsabilidad en cabeza del asegurado frente a daños causados únicamente a pasajeros del vehículo asegurado, situación que no se presenta en el caso bajo ventilación; resulta necesario, exponer que en gracia de discusión los límites asegurados fueron los siguientes:

AMPAROS Y COBERTURAS					
COBERTURA	VALOR ASEGURADO	%	DEDUCIBLE	MINIMO	
MUERTE ACCIDENTAL	\$ 100. SMMLV	--			--
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	\$ 100. SMMLV	--			--
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL	\$ 100. SMMLV	--			--
REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS	\$ 100. SMMLV	--			--
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	\$ INCLUIDO	--			--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	\$ INCLUIDO	--			--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	\$ INCLUIDO	--			--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	\$ INCLUIDO	.0			.0
LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :					
<b>EXCLUSIONES:</b>					
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA					

De conformidad con estos argumentos, respetuosamente solicito declarar probada la excepción planteada en favor de los derechos e intereses de mi procurada.

#### 5. EN LA PÓLIZA DE RCE No. 1000272 SE PACTÓ UN DEDUCIBLE DIFERENCIAL

Por medio de la presente excepción se pretende demostrar que en la póliza de RCE No. 1000272, se estipuló adicionalmente la existencia de un deducible diferencial, el cual legalmente está permitido, y que deberá tenerse en cuenta por el Juzgador a la hora de emitir una eventual condena, por cuanto que las sumas que se encuentran limitadas bajo deducible indelegablemente deben ser asumidas por el asegurado sin que a mi prohijada le asista ninguna obligación resarcitoria respecto de las mismas.

En primer lugar, debe recordarse que la estipulación del deducible en los contratos de seguro, se encuentra consagrada en el Art. 1103 del C. Co.; que reza lo siguiente:

*“(...) Las cláusulas según las cuales el asegurado deba soportar una cuota en el riesgo o en la pérdida, o afrontar la primera parte del daño, implican, salvo estipulación en contrario, la prohibición para el asegurado de protegerse respecto de tales cuotas, mediante la contratación de un seguro adicional. La infracción de esta norma producirá la terminación del contrato original (...)”*

En síntesis, el deducible comporta la participación que asume el asegurado cuando se presenta el

siniestro, el cual se manifiesta en un valor o porcentaje pactado en la póliza de seguro. Así entonces, de acuerdo con el contenido de la póliza, el deducible pactado fue del 10 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA MÍNIMO UN (1) SMLMV, así se determinó en el negocio aseguraticio estudiado:

AMPAROS Y COBERTURAS				
COBERTURA	VALOR ASEGURADO		DEDUCIBLE	MINIMO
			%	
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL PARA EL VEHICULO	-	-	--	--
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	\$	60. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE UN TERCERO	\$	60. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
LESIONES O MUERTE DE DOS O MAS PERSONAS.	\$	120. SMMLV	10.0 %	1.0 SMMLV
AMPARO DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL	\$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	\$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA PENAL	\$	INCLUIDO	--	--
ASISTENCIA JURIDICA INICIAL	\$	INCLUIDO	--	--
LIMITE MÁXIMO DE RESPONSABILIDAD :				
EXCLUSIONES:				
SEGUN SE DETALLA EN CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES DE LA POLIZA				

El deducible comporta la participación que asume el asegurado cuando se presenta el siniestro, el cual se manifiesta en un valor o porcentaje pactado en la póliza de seguro. Sin perjuicio a lo anterior, es de aclarar que, de acuerdo con el contenido de la póliza, en este caso se pactó un deducible diferencial así: si el siniestro fue avisado hasta los 60 días de su ocurrencia o conocimiento de su ocurrencia, el asegurado asume un deducible del 20 % del valor de la pérdida, mínimo 6 SMLMV; si fue avisado hasta los 90 días, el asegurado asume un deducible del 30 % del valor de la pérdida, mínimo 10 SMLMV y si fue avisado pasados los 90 días, el asegurado asume un deducible del 50 % del valor de la pérdida, mínimo 20 SMLMV, así se determinó en el negocio aseguraticio estudiado:

- **Modificación deducibles.** El deducible establecido para el amparo de R.C.E y/o R.C.C. en la carátula de la póliza se mantendrá siempre y cuando el accidente de tránsito sea reportado dentro de los 30 días calendarios siguientes a la ocurrencia del mismo o el conocimiento por parte del asegurado o tomador del evento que genera dicha responsabilidad. En caso de presentar a SBS Colombia el siniestro fuera de los términos establecidos, el deducible se modificará de acuerdo a los días transcurridos después del día 30 así:  
Hasta 60 días calendarios deducible 20% mínimo 6 SMMLV  
Hasta 90 días calendarios deducible 30% mínimo 10 SMMLV  
Más de 90 días calendarios deducible 50% mínimo 20 SMMLV

Por lo que es necesario indicar que no existe prueba en el plenario del aviso que se debido efectuar a la compañía aseguradora para mantener el deducible del 10% mínimo 1 SMLMV, y por consiguiente, debe tenerse presente que, una vez se encuentre fehacientemente probado el evento asegurado, el Juez deberá, al momento de atribuir responsabilidades sobre la indemnización del presunto daño antijurídico causado, aplicar el monto que al asegurado le correspondería cubrir en virtud del deducible pactado de acuerdo con la temporalidad de su obligación de aviso del siniestro.

Es decir que, si en la causa civil bajo su conocimiento ocurre el improbable caso de endilgarse responsabilidad a la demandada y asegurada y a mi mandante se le hiciera exigible la afectación del aseguramiento, el asegurado tendría que cubrir el monto correspondiente del deducible proporcionalmente a la temporalidad que se acredite dentro del proceso respecto del aviso del siniestro. De esta manera, en el hipotético evento en el que mi representada sea declarada

civilmente responsable en virtud de la aplicación del contrato de seguro contenido en la Póliza de Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual Para Vehículos No. 1000272, es de suma importancia que el Honorable Juzgador descuente del importe de la indemnización la suma pactada como deducible.

Por consiguiente, debe tenerse presente que, una vez se encuentre fehacientemente probado el evento asegurado, el Juez deberá, al momento de atribuir responsabilidades sobre la indemnización del presunto daño antijurídico causado, aplicar el monto que al asegurado le correspondería cubrir en virtud del deducible pactado. Es decir que, si en la causa civil bajo su conocimiento ocurre el improbable caso de endilgarse responsabilidad a la demandada y asegurada y a mi mandante se le hiciera exigible la afectación del aseguramiento, la tomadora tendría que cubrir el monto anteriormente indicado como deducible.

Sin perjuicio de que la póliza de RCC No. 1000167, no presta cobertura material a los hechos objeto del litigio, en atención que la misma únicamente puede ser afectada cuando se declare la responsabilidad en cabeza del asegurado frente a daños causados únicamente a pasajeros del vehículo asegurado, situación que no se presenta en el caso bajo análisis; resulta necesario, exponer que dentro del contrato asegurativo se pactó la aplicación de un deducible diferencial, de la siguiente manera:

• Modificación deducibles. El deducible establecido para el amparo de R.C.E y/o R.C.C. en la carátula de la póliza se mantendrá siempre y cuando el accidente de tránsito sea reportado dentro de los 30 días calendarios siguientes a la ocurrencia del mismo o el conocimiento por parte del asegurado o tomador del evento que genera dicha responsabilidad. En caso de presentar a SBS Colombia el siniestro fuera de los términos establecidos, el deducible se modificará de acuerdo a los días transcurridos después del día 30 así:

Hasta 60 días calendarios deducible 20% mínimo 6 SMMLV  
Hasta 90 días calendarios deducible 30% mínimo 10 SMMLV  
Más de 90 días calendarios deducible 50% mínimo 20 SMMLV

De conformidad con lo anterior, se tiene que el deducible pactado entre las partes, depende del tiempo en el que asegurado, en este caso Transportadora Autobuses del sur S.A.S, realizó el reporte de la ocurrencia del accidente de tránsito, encontrando que si el mismo fue reportado dentro de los 30 primeros días a la ocurrencia del mismo, no se aplica ningún tipo de deducible; pero si el mismo fue reportado entre el día 31 al 60, el deducible que se debe aplicar es del 20% sobre la totalidad de la pérdida o mínimo 6 SMLMV; así mismo, si el reporte se hizo dentro del día 61 al 90 el deducible que se debe aplicar es del 30% sobre el valor total de la pérdida o mínimo 10 SMLMV, y finalmente, si se superaron los 90 días, el deducible que opera para tal caso sería del 50% del valor total de la pérdida o mínimo 20 SMLMV.

Por lo expuesto, solicito respetuosamente al Juez, declarar probada esta excepción.

## 6. RIESGOS EXPRESAMENTE EXCLUIDOS EN LA PÓLIZA DE RCE No. 1000272

Por medio de la presente, se solicita al despacho que, en caso de que en el curso del proceso se configure alguna exclusión contemplada en las condiciones particulares o generales del contrato de seguro de RCE No. 1000272, la declare probada, por cuanto hizo parte del negocio contractual que celebraron las partes.

En materia de seguros, el asegurador según el artículo 1056 del Código de Comercio podrá a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurado. Por lo tanto, es en el conjunto de las condiciones que contiene el respectivo contrato donde se determinan o delimitan contractualmente los riesgos, su alcance o extensión, el ámbito temporal y geográfico en el que el amparo opera, las causales de exclusión, o en general, las de exoneración. Por tanto, son esos los parámetros a los que se tiene que sujetarse el sentenciador al resolver cualquier pretensión que se base en la correspondiente póliza. Luego, obviamente el asegurador tiene la facultad de delimitar contractualmente los riesgos que asume, conforme a lo normado en el artículo 1056 Código de Comercio.

De las normas que regulan la delimitación de los riesgos asumidos por el asegurador (artículos 1056 y 1127 del Código de Comercio), se infiere lógicamente que la autonomía que otorgan esas normas a los sujetos contratantes está circunscrita no sólo a la relación riesgo-causa (responsabilidad civil) sino a la relación riesgo-efecto. Es decir, que resulta válido delimitar los efectos de la materialización del riesgo y el carácter patrimonial del mismo, asumiendo o no las consecuencias que ello genere, en todo o en parte, conforme al desarrollo jurisprudencial del derecho de daños. En virtud de lo anterior, es menester señalar que la póliza de seguro de RCE No. 1000272 en sus condiciones generales señala una serie de exclusiones, y de configurarse alguna de ellas, no podrá condenarse a mi prohijada.

En conclusión, de configurarse alguna de las exclusiones previamente mencionadas o las que constan en el clausulado general de la póliza, no podrá existir responsabilidad en cabeza del asegurador, por cuanto el juez no podrá ordenar la afectación de la póliza de seguro No. 1000272 pues las partes acordaron expresamente pactar tales exclusiones. En consecuencia, si se evidencia dentro del proceso alguna de ellas, la póliza no cubriría ninguna solicitud de indemnización por lo que deberán denegarse las pretensiones de la demanda.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

## **7. INEXISTENCIA DE SOLIDARIDAD ENTRE SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. Y LOS DEMÁS DEMANDADOS**

Se formula esta excepción en razón a que SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. no puede ser

considerada como responsable en la comisión de un accidente de tránsito respecto al cual no tuvo participación o injerencia alguna. Máxime, en atención a que su relación con el vehículo de placa SJP 307 para el momento de presunta ocurrencia de los hechos que sirven de base para la acción se circunscribe a las condiciones del contrato de seguro, en el cual no se pactó la solidaridad.

La responsabilidad civil implica la existencia de un hecho, un daño y un nexo de causalidad en entre ambos. Sin embargo, mi representada no se encuentra abocada a esta relación toda vez que no generó de manera directa o indirecta daño alguno a la parte demandante. Razón por la cual, la misma no puede ser condenada en forma alguna como responsable de un accidente en el cual no tuvo participación. De igual forma, mi representada no puede ser asemejada al asegurado en términos de que entre los mismos exista solidaridad, puesto que ésta sólo tiene su fuente en la ley o en los contratos. Sin que en la ley ni en el contrato de seguro suscrito entre mi representada y el tomador se haya establecido la misma.

Resulta pertinente recordar que, de conformidad con el Art. 2344 del C.C. si un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa. Sin embargo, tal como ha señalado la H. Corte Suprema de Justicia<sup>42</sup>, la solidaridad es una imposición para los agentes a quienes se les atribuye la autoría de un daño. No obstante, mi representada no era la propietaria del automotor ni sus dependientes lo manejaban. Recuérdese que la fuente de la solidaridad es la Ley, el testamento o el contrato y en el caso que nos ocupa, no existe norma o pacto que establezca que mi representada deba ser condenada de forma solidaria.

Ahora bien, en lo concerniente a la solidaridad convenida entre las partes, la H. Corte<sup>43</sup> igualmente se ha ocupado de ella al señalar lo siguiente:

***“(…) La solidaridad contractual civil debe ser declarada expresamente cuando la ley no la establece, por ello jamás se presume. De ahí que es un mandato de carácter sustancial, ya que impone una obligación material al responsable solidario frente a los sujetos activos de la relación jurídica.***

*Ni la prescripción ni la solidaridad son, por lo tanto, elementos “accesorios” de la relación jurídico-sustancial o derecho material. Si la acción sustancial está prescrita el demandante no tiene ningún derecho y el demandado no es civilmente responsable; y **si el deudor contractual no es responsable in solidum, entonces no está obligado a pagar el total de la indemnización.** Desde luego que se trata de una cuestión fundamental y no de un tema secundario (…)”* (Negrilla y Sublínea por fuera del texto original).

<sup>42</sup> CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia SC780-2020. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

<sup>43</sup> Ibídem.

Como se colige del contrato de seguro materializado a partir de las Pólizas de Seguro aquí vinculadas, entre mi procurada y el tomador y/o asegurado no se pactó la solidaridad, así como tampoco se señaló que la misma tuviese una relación adicional y/o distinta a la función aseguradora por la misma desarrollada. Lo cual claramente deviene en que no es posible predicar la solidaridad pretendida por la parte demandante. Consecuentemente, mi procurada no puede ser tenida como responsable del accidente de tránsito presuntamente acaecido el 27 de mayo de 2022, pues su relación se limita y circunscribe al contrato de seguro que la misma otorgó en el cual no se pactó la solidaridad.

En conclusión, mi procurada no puede ser tenida como responsable en la comisión del accidente de tránsito respecto al cual se erige el presente trámite comoquiera que su relación con el vehículo de placa SJP 307 para el momento de ocurrencia de los hechos se delimitó de conformidad con las condiciones del contrato de seguro sin que en el mismo se haya pactado la solidaridad.

Por lo anterior, señor juez, solicito se abstenga de declarar responsable por el accidente a mi representada en un eventual fallo y declare probada esta excepción.

#### **8. DISPONIBILIDAD DE LA SUMA ASEGURADA**

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismos hechos dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que en el evento que para la fecha de la sentencia se ha agotado totalmente el valor asegurado no habrá lugar a cobertura alguna.

#### **9. EL CONTRATO ES LEY PARA LAS PARTES**

Sin que esta excepción constituya aceptación de responsabilidad alguna, es pertinente mencionar que la obligación de la aseguradora sólo nace si efectivamente se realiza el riesgo amparado en la póliza y no se configura ninguna de las causales de exclusión o de inoperancia del contrato de seguro, convencionales o legales. Esto significa que la responsabilidad se predicará cuando el suceso esté concebido en el ámbito de la cobertura del respectivo contrato, según su texto literal y por supuesto la obligación indemnizatoria o de reembolso a cargo de mi representada se limita a la suma asegurada, además de que son aplicables todos los preceptos que para los seguros de daños y responsabilidad civil contiene el estatuto mercantil, que en su Art. 1079 establece que “(...) *El asegurador no estará obligado a responder sino hasta concurrencia de la suma asegurada (...)*”.

Por lo que el Despacho tendrá que resolver la relación sustancial que vincula a mi mandante con este proceso en atención a las condiciones de los aseguramientos por ella expedidos.

Se hace imprescindible destacar que la obligación del asegurador no nace en cuanto no se cumple la condición pactada de la que pende para su surgimiento, condición esa que es la realización del riesgo asegurado o siniestro, o sea que el evento en cuestión efectivamente esté previsto en el amparo otorgado, siempre y cuando no se configure una exclusión de amparo u otra causa convencional o legal que la exonere de responsabilidad, por ende la eventual obligación indemnizatoria está supeditada al contenido de cada póliza, es decir a sus diversas condiciones, al ámbito del amparo, a la definición contractual de su alcance o extensión, a los límites asegurados para cada riesgo tomado, etc.

La póliza utilizada como fundamento contractual de la convocatoria, como cualquier contrato de seguro, se circunscribe a la cobertura expresamente estipulada en sus condiciones, las que determinan el ámbito, extensión o alcance del respectivo amparo, así como sus límites, sumas aseguradas, deducibles (que es la porción que de cualquier siniestro debe asumir la entidad asegurada), las exclusiones de amparo, la vigencia, etc., luego son esas condiciones las que enmarcan la obligación condicional que contrae el asegurador y por eso el Juzgador debe sujetar el pronunciamiento respecto de la relación sustancial, que sirve de base para vincular a mi mandante en esta causa, al contenido de las condiciones de la póliza.

Consecuentemente la posibilidad de que surja responsabilidad de la aseguradora depende rigurosamente de las diversas estipulaciones contractuales, ya que su cobertura exclusivamente se refiere a los riesgos asumidos, según esas condiciones y no a cualquier evento, ni a cualquier riesgo no previsto convencionalmente, o excluido de amparo; por ello, al no haberse demostrado la existencia de un contrato de seguro vigente, o que cumpliera con los presupuestos de su modalidad de cobertura temporal, ni haberse demostrado además la realización del evento asegurado, inadmisiblemente resultaría que, con fundamento en los hechos que hoy son objeto de litigio, se afecte la póliza vinculada y se le exija a mi mandante pago indemnizatorio alguno.

Ciertamente, su afectación es improcedente en este caso toda vez que, de conformidad con lo ya ampliamente explicado no se cumplen los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual y, aún si se hallaren probados, no se acreditó la ocurrencia del riesgo trasladado a la Compañía. Así entonces, como no se reúnen los requisitos de la responsabilidad en cabeza de la asegurada a la evidencia obrante en el plenario, no se puede predicar responsabilidad en cabeza de la entidad y, consecuentemente de mi representada.

En este orden de ideas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción.

## 10. ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA

Acorde con lo manifestado a lo largo de este escrito de contestación, es necesario acudir a la figura del Enriquecimiento sin Justa Causa. Este postulado se encuentra plasmado en el artículo 831 del Código de Comercio. El artículo proscribire el enriquecimiento sin causa a expensas de otra persona.

La Corte Suprema de Justicia advierte:

*“(...) Hay que precisar, a ese respecto, que la jurisprudencia fundacional de lo que hoy es el querer de la ley, se orientaba a **corregir las situaciones en las cuales el patrimonio de un sujeto de derecho sufría mengua, mientras otro acrecía sus haberes en la misma medida, sin que existiera una razón que explicara esa alteración**, caso en el cual se imponía al juez el deber de adoptar los correctivos necesarios **en procura de que se restableciera la equidad** (...)”<sup>44</sup> (Énfasis propio)*

De todo lo anterior se desprende que en caso de condenar a la demandada y a mi representada a la indemnización de perjuicios pretendida por la demandante se estaría generando un enriquecimiento de la parte demandante y un empobrecimiento correlativo en el demandado. Esta conclusión surge del hecho de que no haya cumplido la parte demandante con su carga probatoria al no estar demostrado con los medios de pruebas pertinentes, útiles y conducentes que la demandada, generó un daño en la parte demandante que las obligue a su indemnización. Además, en el hipotético caso en que si se determine que hubo un daño imputable a la demandada y que se haya causado a la parte demandante –lo cual no sucede en este caso–, debe restringirse su indemnización a los perjuicios probados, en la medida que tal como lo establece el honorable tratadista Dr. Juan Carlos Henao en su obra “*El daño*”: **“se debe indemnizar el daño, sólo el daño y nada más que el daño”** (Pág. 45).

Conforme a lo expuesto solicito declarar probada esta excepción.

## 11. GENÉRICA O INNOMINADA Y OTRAS

Solicito declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, que se origine en la Ley en virtud de lo reglado en el artículo 282 del Código General del Proceso.

### CAPÍTULO III

#### PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS MEDIOS DE PRUEBA DE LA PARTE DEMANDANTE

<sup>44</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala Civil. 19 de diciembre de 2012. Exp. 54001-3103-006-1999-00280-01.

### 1. RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

El artículo 262 del Código General del Proceso faculta a las partes dentro de un proceso para que, si a bien lo tienen, soliciten la ratificación de los documentos provenientes de terceros aportados por la parte contraria. Vale la pena resaltar que esta disposición establece una clara consecuencia jurídica ante el evento en que una parte solicite la ratificación del documento y ello no se lleve a cabo:

*“(…) Artículo 262. Documentos declarativos emanados de terceros. Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación (…)”*

Entonces, cabe resaltar que Juez sólo podrá apreciar probatoriamente los documentos cuya ratificación se solicita si efectivamente esta se hace, como lo consagra el citado artículo. En tal virtud, solicito al despacho que no se les conceda valor alguno demostrativo a los documentos provenientes de terceros aportados por la parte demandante mientras esta no solicite y obtenga su ratificación, y entre ellos, de manera enunciativa enumero los siguientes:

1. Minuta del contrato de compraventa de vehículo automotor No. 11944930 del 9 de abril de 2022 y suscrito por William Orlando Benavides Quetama y Mónica Marisol Mallama Oviedo.
2. Acta de declaración extrajudicial del señor Nelson Alirio Tepu Díaz, identificado con la cédula No. 16.284.044 de Palmira.

### 2. FRENTE AL MEDIO DE PRUEBA DENOMINADO “INFORME PERICIAL DE INSPECCIÓN TÉCNICA AL VEHÍCULO DE PLACAS LUD 433 CON SUS SOPORTES”.

**ME OPONGO** a que este medio de prueba sea decretado como un documento, toda vez que el mismo es introducido al presente proceso como dictamen pericial, por lo tanto, no puede ser decretado como medio de prueba documental y dictamen pericial al mismo tiempo, por ser improcedente.

Solicito respetuosamente citar a los señores PABLO LENIN ERASO ENRÍQUEZ y MAURICIO QUENORAN LEGARDA, quienes elaboraron el referido dictamen para que asistan a la audiencia que fije el despacho, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 228 de ibídem, para ejercer la contradicción del dictamen pericial y con el fin de interrogarlos sobre su idoneidad, imparcialidad y sobre el contenido del dictamen.

### 3. FRENTE AL MEDIO DE PRUEBA DENOMINADO “PERICIAL”.

Solicito respetuosamente citar a los señores PABLO LENIN ERASO ENRÍQUEZ y MAURICIO QUENORAN LEGARDA, quienes elaboraron el referido dictamen para que asistan a la audiencia que fije el despacho, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 228 de ibídem, para ejercer la contradicción del dictamen pericial y con el fin de interrogarlos sobre su idoneidad, imparcialidad y sobre el contenido del dictamen.

#### CAPÍTULO IV

#### MEDIOS DE PRUEBA SOLICITADOS Y APORTADOS POR SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.<sup>45</sup>

Solicito a este honorable despacho se sirva decretar y tener como pruebas las siguientes:

##### **1. DOCUMENTALES.**

- Póliza De Seguros De Responsabilidad Civil Extracontractual Para Vehículos No. 1000272 junto con su condicionado general, la cual ya reposa en el expediente por haber sido allegada con la contestación a la demanda.
- Póliza De Seguros De Responsabilidad Civil Contractual Para Vehículos No. 1000167 junto con su condicionado general.

##### **2. INTERROGATORIO DE PARTE.**

- A. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte a los demandantes y que sean mayores de edad, señores CECILIA DEL ROSARIO QUETAMA CUASTUMAL, JEISON ALEJANDRO BENAVIDES JALVIN, MARÍA ELIZABETH ANDRADE INSUASTY, DAVID FERNANDO BENAVIDES ANDRADE, EMILIANO SEBASTIÁN BENAVIDES ANDRADE y WILLIAM ORLANDO BENAVIDES QUETAMA, en su calidad de demandantes, a fin de que contesten el cuestionario que se les formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. Los demandantes podrán ser citados en la dirección de notificación relacionada en la demanda.
- B. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte a los demandados, señor IVÁN DARÍO JOJOA BOTINA, MARÍA AURA CALVACHE DE MONCAYO y al representante legal de EMPRESA TRANSPORTADORA AUTOBUSES DEL SUR S.A.S. o quien haga sus veces, en su calidad de demandados, a fin de que contesten el cuestionario que se les formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. Los demandados

<sup>45</sup> Código General del Proceso, artículo 96 numeral 4

podrán ser citados en la dirección de notificación relacionada en cada una de sus contestaciones.

### 3. DECLARACIÓN DE PARTE

Al tenor de lo preceptuado en el artículo 198 del Código General del Proceso, respetuosamente solicito ordenar la citación del Representante Legal de **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.** para que sea interrogado por el suscrito, sobre los hechos referidos en la contestación de la demanda y, especialmente, para exponer y aclarar los amparos, ausencias de cobertura, exclusiones, términos y condiciones de los contratos de seguro No. 1000272.

### 4. TESTIMONIALES

Siguiendo lo preceptuado por los artículos 208 y siguientes del Código General del Proceso, solicito al señor Juez se sirva decretar la práctica del testimonio de la Dra. **MARIA CAMILA AGUDELO ORTIZ**, quien tiene domicilio en la ciudad de Bogotá y puede ser citada en la Calle 22D No. 72-38 de la ciudad de Bogotá y correo electrónico [camilaortiz27@gmail.com](mailto:camilaortiz27@gmail.com) para que declare sobre las condiciones generales y particulares de las pólizas No. 1000272, los límites pactados, los deducibles concertados, las exclusiones, los amparos concertados, la disponibilidad de las sumas aseguradas, las solicitudes presentadas ante la compañía, sus respuestas y sobre los demás aspectos que resulten relevantes al presente proceso judicial, y en general sobre lo referido en las excepciones propuestas en este escrito.

### 5. DICTAMEN PERICIAL

Comedidamente anuncio que me valdré de un informe de reconstrucción de accidente de tránsito a fin de ofrecer al despacho una ampliación frente a las circunstancias en las cuales se presentó el accidente, realizando un análisis exhaustivo y detallado de las pruebas que obran en el expediente, para finalmente realizar un estudio de los factores que, según su experticia, determinen la causa eficiente del mismo.

El medio de prueba anunciado es conducente, pertinente y útil, por cuanto pretende ilustrar al despacho, de forma técnica y científica, sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos del 27 de mayo de 2022.

Dicha prueba pericial se solicita y se anuncia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 227 del Código General del Proceso, pues a la fecha no me es posible aportarla dada la complejidad técnica del mismo, además, el término de traslado no fue suficiente para elaborar y aportar el dictamen pericial

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito al despacho que se le conceda a mi representada un término no inferior a dos (2) meses con el fin de aportar dictamen pericial realizado por un perito experto en el tema, el anterior término se justifica teniendo en cuenta la complejidad de dicho dictamen, pues se hace necesario realizar un estudio minucioso a fin de lograr la reconstrucción requerida.

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito al Honorable Juez proceder de conformidad.

## **6. INTERVENCIÓN EN DOCUMENTALES Y TESTIMONIOS**

Con el objeto de probar los hechos materia de las excepciones de mérito, nos reservamos el derecho de contradecir las pruebas documentales presentadas al proceso y participar en la práctica de las testimoniales que lleguen a ser decretadas, así como del correspondiente interrogatorio de parte e intervenir en las diligencias de ratificación y otras pruebas solicitadas.

### **CAPÍTULO V**

#### **ANEXOS**

- Documentos relacionados en el acápite de pruebas.
- Poder general que me faculta para actuar, el cual ya reposa en el expediente por haber sido allegado con la contestación a la demanda.
- Certificado de existencia y representación legal de SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. expedido por la Cámara de Comercio y por la Superintendencia Financiera de Colombia, el cual ya reposa en el expediente por haber sido allegado con la contestación a la demanda.

### **CAPÍTULO VI**

#### **NOTIFICACIONES<sup>46</sup>**

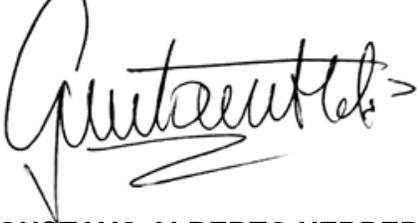
Por la parte actora serán recibidas en el lugar indicado en su escrito de demanda. Por los demás demandados y el llamante en garantía, donde indiquen en sus respectivas contestaciones.

Por mi representada SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., se recibirán notificaciones en la Calle 36 N No. 6A - 65 oficina 2108 de la ciudad de Santiago de Cali, Dirección electrónica: [notificaciones.sbseguros@sbseguros.co](mailto:notificaciones.sbseguros@sbseguros.co)

<sup>46</sup> Código General del Proceso, artículo 96 numeral 5.

Por parte del suscrito se recibirán notificaciones en la Secretaría de su despacho o en la Avenida 6A Bis No. 35N-100, Centro Empresarial Chipichape, Oficina 212 de la ciudad de Cali. Dirección electrónica: [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co)

Cordialmente,



**GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA**

C.C No. 19.395.114 de Bogotá D.C

T.P. No. 39.116 del C.S. de la J.